

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



RECURSO DE RECLAMACIÓN

2

NÚMERO: 573/2019

MARZO/15/2019

11:36 (HORAS)

VIII

RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA

EN CONTRA DEL: PROVEÍDO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 29 DE ENERO
DE 2019, DICTADO EN EL EXPEDIENTE VARIOS 1240/2018

MINISTRO PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EXT. _____

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: _____

SUPREMA CORTE DE
EXPEDIENTE QUE CONSTA DE: UN CUADERNO Y UN CUADERNO
AUXILIAR

★ 20 AGO 2019 ★
PENAL ARCHIVO CENTRAL

PRIMERA SALA

REASUNCIÓN DE COMP. 10/2019

RECIBIDO


RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA

Núm. de Reg.	Número de Expediente	Tipo de Asunto Materia	Promovente, Datos de Origen	Fecha de Ingreso	Contenido	Destino
011760	573/2019	RECURSO DE RECLAMACIÓN MATERIA: PENAL	<p>RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA</p> <p>MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN</p> <p>ÓRGANO JURISDICCIONAL: JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO</p> <p>ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO</p> <p>OFICIO: ESCRITO DE 15/03/2019</p>	15/03/2019	<p>CUADERNOS: RECIBIDO DE UN ENVIADO, EN 81 FOJAS, CON: - CON UNA COPIA DEL MISMO.</p> <p>ACTO RECLAMADO: PROVEÍDO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 29 DE ENERO DE 2019, DICTADO EN EL EXPEDIENTE VARIOS 1240/2018</p> <p>FECHA RESOLUCIÓN: 29/01/2019</p> <p>RESOLUCIÓN RECURRIDA:I.DÍGASELE A LA PARTE PROMOVENTE QUE DEBE ESTARSE A LO DETERMINADO EN LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD DE ATRACCIÓN 479/2018 Y 7/2019, ASÍ COMO EN EL DIVERSO EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 10/2019.II.SE DESECHA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD DE ATRACCIÓN QUE FORMULA LA PROMOVENTE...</p> <p>JUZGADO DE DISTRITO: J.A.- 651/2017</p>	<p>SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>N.E.U.N.: 21382657</p> <p>CLASIFICACIÓN: OTROS - DESECHA</p> <p>RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL VARIOS 1240/2018-VRNR</p> <p>ANTECEDENTE: REASUNCIÓN DE COMP. 10/2019</p>

ELABORÓ: VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA

RECIBÍ 1 ASUNTO _____

REVISÓ TEMA: _____



SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

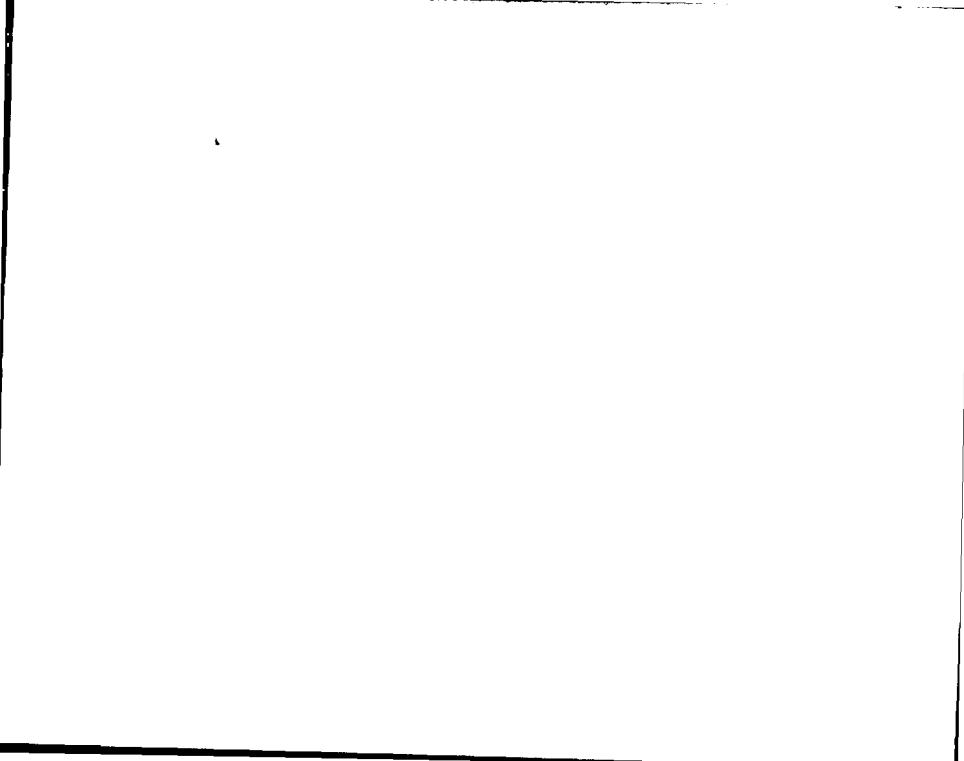
Folio: 00097810

Expediente: 573/19

Firma: _____

COTEJO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
MARIO ISAAC MENDOZA FERREYRA

[illegible]



ENGROSE: Rec. Rec. 573/2019	FECHA/HORA: 03/Junio/2019	PONENCIA: Gonzalo Alcántara
ANEXOS: 1 Rec. Rec. 573/2019 con 113 fojas		
2 Varios 1240/2018 - VRNR - con 52 fojas		
3 Lc. aux. rec. rec. 573/2019 con 83 fojas		
4 Lc. aux. Varios 1240/2018 - VRNR con 33 fojas		
5 GTCMPICTO	Subse	
6 antec RQ. 1/2019	Varios 1240/2018 - VRNR G. ad. aux.	
7 R.I. 1/2019	Inf.	
8		
9		
TOTAL 2 cedres; 2 Lc. auxiliares		
ENTREGA/EXTENSIÓN: Alameda G. de H.	RECIBE: 2301	[Signature]

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4.

5.

6. 6. 6. 6. 6.

7. 7. 7. 7. 7.

8. 8. 8. 8. 8.

9. 9. 9. 9. 9.

10. 10. 10. 10. 10.

11. 11. 11. 11. 11.

OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y DE CORRESPONDENCIA
BOLETA DE CONTROL PARA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

TIPO EXPEDIENTE (PROVISIONAL)

R. Reclamación

FECHA

15/03/19

FOLIO

011760

FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA RESPECTIVA MESA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE ESTE EXPEDIENTE (LIC. JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES, LIC. G. ROCÍO PÉREZ MAQUEDA, LIC. BRENDA M. PALMA MARTÍNEZ, LIC. ROMÁN MARÍN ENRÍQUEZ, LIC. MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTÍNEZ O LIC. AZHUR TEJADA FLORES)

FIRMA DEL TITULAR DE LA OFICINA - LIC. RODRIGO ROBLES ENRÍQUEZ

TURNO AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

VICTOR H. ESPINOSA PIÑA

PARA SER LLENADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE: (MIRIAM ÁVILA SALCEDO, ISIDRO ZUÑIGA SOLORZANO, GUADALUPE A. GARZA GUILLÉN, ERNESTO ALTAMIRANO LAGUNAS, CYNTHIA ROMÁN ARRIAGA, RICARDO ALEJANDRO RAMÍREZ PADILLA Y VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA)

NÚMERO ASIGNADO AL EXPEDIENTE

873/2019

ANTECEDENTES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE QUE SE INTEGRA

Antecedente: Reas. Comp. 10/2019

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

TIPO DE EXPEDIENTE (CLASIFICACIÓN DEFINITIVA)

R. Reclamación

FIRMA DEFINITIVA DEL SUPERVISOR DE LA MESA RESPECTIVA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

FIRMA DEFINITIVA DEL TITULAR DE LA OFICINA

INSTRUCCIONES

1. La presente boleta se utilizará y se agregará como primer foja a todo expediente que se forme en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia (OCJC).
2. En la boleta deberá indicarse la fecha de ingreso y el número de folio, así como el tipo de expediente que corresponda provisionalmente.
3. El supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes y el titular de la OCJC deberán suscribirla indicando la clasificación provisional. Posteriormente el referido supervisor turnará el material relativo al servidor público que formará el expediente respectivo y revisará los antecedentes.
4. El servidor público que forme el expediente deberá estudiar las constancias y en caso de duda sobre el tipo de expediente asignado lo hará del conocimiento del supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes, el cual de inmediato confirmará la clasificación asignada o, en caso de duda, lo consultará con el titular de la OCJC, este último deberá confirmar dicha categoría o, en su caso, consultar al titular de la Secretaría General de Acuerdos.
5. El servidor público responsable de formar el expediente respectivo asignará el número que corresponda, atendiendo a la categoría en que se ubica, revisará los ANTECEDENTES sobre asuntos relacionados con el asunto relativo al expediente que se forma, los indicará en esta boleta y la suscribirá.
6. El servidor público que forme el expediente lo entregará al supervisor de su mesa de formación de expedientes, el cual lo revisará e informará al titular de la OCJC cualquier situación que dé lugar a estimar incorrecta la clasificación de aquél, incluso la relevancia del asunto que justifique informe especial al Secretario General de Acuerdos.
7. Con base en lo anterior el titular de la OCJC suscribirá la presente boleta junto con el supervisor de la respectiva mesa de formación de expedientes y previa asignación del secretario auxiliar al que corresponda su estudio, remitirá el expediente a la Subsecretaría General de Acuerdos por conducto de la mesa de informes de la OCJC.

SECRET



SUPREMA
D. I. C. I. A. D.
SECRETARIA GE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Presente.

Blandiré el escudo de la razón y dignidad hasta que el estandarte de la justicia se enarbole.

Martha Patricia González Nava, por propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P.10900; ante su Señoría, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

1. La suscrita acude ante el Máximo Tribunal Constitucional del país, a solicitar acceso a la justicia.
2. Por lo que con fundamento en los artículos 104 de la Ley de Amparo, y 10, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acudo a interponer Recurso de Reclamación en referencia al proveído notificado por listas el once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en expediente varios 1240/2018-VRNR, suscrito por su Señoría.
3. Retomando, el artículo 104, segundo párrafo de la Ley de Amparo que mandata que el Recurso de Reclamación se interpondrá por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresaran los agravios, dentro del término de tres días al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En este fundamento vengo a decir:
4. La quejosa acudió a solicitar amparo y protección de la Justicia de la Unión en diciembre de dos mil dieciséis con el juicio de amparo 1118/2016, prosiguiendo con está indefensión ante el Estado Mexicano, los juicios de amparo indirecto subsecuentes, reseñan de forma idónea los hechos que acontecen y acompañan al caso concreto con número de expediente: 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018. Por consiguiente, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.
5. Pues, la previsión y mandato de los artículos 1, 29, 103, 107 y 133 de la Constitución son en sí mismos la regulación de derechos fundamentales en la pertinencia de las garantías que regulan un estado de excepción, más, han sido inobservados en el caso concreto.
6. La violencia de género en el presente caso viene a reforzar las flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la quejosa y mi familia. En este "estado de excepción" de Derecho en abrogación a derechos fundamentales no derogables.
7. El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano que observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos

SIN TEXTO



SECRETARIA C
DE L
SECRETARIA GENERAL

Humanos, no incluyen las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos,

8. Los innumerables juicios de amparo representan hechos notorios de un Estado de excepción como acto formal el estado de excepción en el presente caso, más, obedece a razones espúreas en violación a los preceptos constitucionales y de los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos pertinentes que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado (sistema convencional).
9. Así tenemos, que el derecho a la vida constituye la base esencial de los demás derechos¹, el Estado Mexicano, se conforma de autoridades responsables, que han alentado y formalizado la persistencia de las violaciones para preservar el derecho a la vida; el tiempo que ha durado estos hechos (seis años, tres meses), conforman los juicios de amparo indirecto 1118/2017, 288/2017 (1 Anexo), 349/2017, 545/2017, 627/2017 (tres anexos), 651/2017 (cinco anexos), 74/2018 , 260/2018 y 909/2018.
10. Esto es, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales, pilar normativo ha sido trastocado por actos ejecutivos formales, ésta situación excepcional, **ha sido decretada, acudiendo a la perennización.**
11. Por consiguiente, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.
12. La ausencia de legalidad en este estado de excepción se ve plasmada en los actos ejecutivos formales, el decreto y aceptación de las autoridades responsables de este estado extraconstitucional de derogación de derechos fundamentales no derogables, se prueba y constituye de forma idónea, principalmente, en los juicios de amparo, 909/2018, 260/2018, 74/2018, 651/2017 y 627/2017:
13. Ello es así su Señoría, mi vivienda (habitada por la quejosa y mi familia) intencionalmente está siendo destruida, con aquiescencia del Estado Mexicano, al denunciar está barbarie (Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01), en el caso concreto se suspendió el proceso constitucional democrático, y con la firme finalidad de destruirnos se dictó supresión y/o violación de derechos fundamentales no derogables.
14. En esta guisa, la parte quejosa le reclama al Presidente de los Estados Unidos (juicio de amparo 909/2018), que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ha sido el principal torturador en el caso concreto, el Ejecutivo, perenniza el estado de excepción, afirmando vía informe justificado, que es de la competencia del Gobierno de la Ciudad de México el caso concreto, de forma arbitraria, compara la recuperación de una vía pública, Andador Tabaqueros, al decreto ejecutivo de este estado de excepción de derechos fundamentales no derogables. Por consiguiente, deroga el principio de dignidad inherente en todo ser humano, base de un Estado Constitucional de Derecho: acto ilegal, violatorio de los artículos 1, 29, 87 y 89, fracción X de la Carta Magna, pues afirma en juicio de amparo, que el decreto ejecutivo de abrogación de derechos fundamentales no derogables ha sido motivada por la vía pública Andador Tabaqueros, hecho inaudito, pero es un hecho cierto, tristemente el **nexo causal** entre el estado de excepción de derechos

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 139

fundamentales no derogables, que derivó en crimen de genocidio, es la **Concejal en la Alcaldía la Magdalena Contreras Diana Álvaro Gallegos**, familiar por consanguineidad de los habitantes del Andador Tabaqueros, figura política que tiene su domicilio particular (habita), aproximadamente, a seis cuadras del multicitado Andador, ésta Concejal tiene estrecha amistad, con importantes figuras políticas pertenecientes al Estado Mexicano, hecho notorio es la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción con número de expediente 31/2019:

15. La asociación y complicidad de las figuras políticas con la Concejal Diana Álvaro Gallegos, se demuestra con las advertencias de ésta figura política, que fueron cumplidas el dos de mayo de dos mil catorce y cuatro de diciembre de dos mil quince. En la oficina del ex delegado José Fernando Mercado Guaida², Mario Gallegos Contreras (familiar por consanguineidad de la Concejal), atacó verbalmente a la suscrita y Carolina González Nava, advirtiéndole que ellos también eran Gallegos, "*conocemos al Presidente*".... Por consiguiente, el seis de mayo de dos mil catorce, dirigimos escrito de denuncia de obstrucción a la justicia al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa, como respuesta, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México: citó a Carolina González Nava el veintitrés de mayo de dos mil catorce a lo que denominaron "audiencia" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la Magdalena Contreras, bajo el mando el ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México Rodolfo Fernando Ríos Garza: cinco servidores públicos torturaron a Julio Cesar González Nava y Carolina González Nava, por espacio de hora y media. El cuatro de diciembre de dos mil quince, bajo el mando del ex delegado en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, dos servidores públicos, adscritos al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, acudieron a la vivienda de los quejosos, dejando un "citatorio" con la finalidad de que asistiéramos el nueve de diciembre de dos mil quince a las dos de la tarde a las instalaciones de esta demarcación, en la que según terceras personas, seríamos detenidos por policías, torturados, acusados de homicidio. Al no acudir, policía de investigación, acudió al domicilio de la parte quejosa con la finalidad de detenernos ilegalmente. Se dirigió escrito de denuncia de hechos al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, más los ataques se acrecentaron, con la firme intención de destruir a los quejosos- bajo el mando del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México Rodolfo Fernando Ríos Garza, se prepararon "audiencias" en las que bajo el pretexto de que acudiéramos para poder ver el expediente de "denuncias" que los habitantes del Andador Tabaqueros habían planificado en

² La suscrita acudió por asesoría a estas oficinas, pues con total desconocimiento de los nexos políticos de los probables responsables (habitantes del Andador Tabaqueros) con el ex Delegado José Fernando Mercado Guaida amigo personal de la Concejal Diana Álvaro Gallegos, y el por qué la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la ex Delegada Leticia Quezada Contreras, obstruían descaradamente el acceso a la justicia en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, ya que los maltratos, discriminación, advertencias, es de uso común en el caso concreto. Se desconocía la barbarie que las figuras políticas son capaces de perpetrar por estrecha amistad, con otra figura política, en que se vanaglorian de que con una sola llamada pueden encarcelar a una persona, torturarla, fabricar delitos, destruir una vivienda, y en este estado de excepción implementar la figura de libre tipificación de delitos. Ello es así, los expedientes de los juicios de amparo solicitados por la parte quejosa son prueba plena del estado de excepción de derechos fundamentales no derogables.

Esto es, Diego Arturo Lara Nava probable responsable en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01 y familiar por consanguineidad de la Concejal Diana Álvaro Gallegos, atacando con palabras altisonantes a la suscrita, gritaba desde la azotea de su vivienda: *pendeja, con una llamada de Diana* -refiriéndose a la Concejal- "*los chingamos*"



“pacto criminoso” en contra de los quejosos en asociación y complicidad del Gobierno de la Ciudad de México, para ser humillados, maltratados..., torturados, bajo la figura de fabricación de delitos y libre tipificación de delitos. Logrando intencionalmente, perpetrar lesión grave a la integridad física, mental y moral de la parte quejosa, hechos notorios en los juicios de amparo 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018.

16. Bajo el mando de figuras políticas han perpetrado en asociación y complicidad intencionalmente, lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos, sometiéndolos a condiciones de existencia que han de acarrear nuestra destrucción física, total. Los ex Delegados en la Magdalena Contreras: Leticia Quezada Contreras, José Fernando Mercado Guaida; los Diputados Luis Gerardo Quijano Morales e Israel Betanzos Cortés, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el otrora Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ahora Senador, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa (ahora Senador), ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México: Edmundo Porfirio Garrido Osorio y Rodolfo Fernando Ríos Garza³ (juicio de amparo indirecto 627/2017), entre otras figuras políticas, tales como la ahora Alcaldesa Patricia Jimena Ortiz Couturier, amiga personal de la multicitada Concejal Diana Álvaro Gallegos familiar por consanguineidad de los habitantes del Andador Tabaqueros.
17. Por consiguiente, el expediente de la solicitud de la facultad de atracción, solicitada por la parte quejosa con número de expediente 31/2019, es probanza del por qué se ha denegado el acceso a la justicia en el Estado Mexicano al caso concreto. La estrecha amistad que une a estas figuras políticas con la Concejal Diana Álvaro Gallegos, conjugado con el poder ilimitado que les da la impunidad, les facilita, perpetrar actos de barbarie, como en el caso acontece. El estado de excepción perennizado por seis años, con tres meses, tiene la firme intención de destruir de forma total a la quejosa y a mi familia.
18. El crimen de genocidio es un flagelo para cualquier Estado Constitucional de Derecho, la complicidad y facilidad que han tenido las figuras políticas para perpetrarlo, es en sí y por sí mismo, un acto de barbarie. La intención de destruir ha derivado en lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos.
19. Al vulnerar las limitaciones contenidas en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los actos perpetrados para destruir a los quejosos, esta fuera de todo cause constitucional, la nada jurídica es sinónimo del estado de excepción que acompaña como sombra al caso concreto. El Gobierno de la Ciudad de México invadió y rebasó, la esfera de competencia del ejecutivo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Más esta invasión, ha sido formalizada por el ejecutivo, esto es, en juicio de amparo la omisión se convirtió en acto, se formalizó el decreto de estado de excepción de derechos fundamentales no derogables. Hecho notorio en juicio de amparo 909/2018 y 260/2018.
20. Por consiguiente, se constituye lo dictado en el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

³ Que según fuente: <https://www.jornada.com.mx/2017/12/09/politica/015n3pol>: “Rodolfo Ríos Garza, ex procurador de la Ciudad de México, forma parte del equipo de asesores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación indicaron que su labor se enfocará en apoyar el análisis en materia de seguridad que puedan plantear ante el máximo tribunal”

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

21. Los quejosos en los juicios anteriormente citados, han sido sometidos a castigos, pagando un costo muy alto: por haber solicitado acceso a la justicia: incriminaron a las quejas, daño a la propiedad, de una edificación que ésta asentada en la vía pública denominada Andador Tabaqueros, con la intención de destruir a los quejosos.
22. Ello es así, su Señoría, tristemente, el caso versa sobre el multicitado Andador Tabaqueros, por consiguiente, el Estado de excepción formalizado por el Secretario de Gobernación y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autoridades responsables en los juicios de amparo 260/2018 y 909/2018, respectivamente, formalizan la supresión y/ o violación a derechos humanos no derogables, decretando que el Gobierno de la Ciudad de México, perpetre hasta que se consume el genocidio, total y prosiga torturando, humillando, vejando, fabrique delitos, instaure formalmente libre tipificación de delitos, que se prosiga con el derrumbamiento intencional de la vivienda que habitan los quejosos, hechos fuera de todo cause legal a un Estado Constitucional de Derecho, pero los hechos notorios lo prueban.
23. Un ejemplo claro del estado de excepción de Derecho, que da cabida al absurdo jurídico y a la arbitrariedad, es la resolución que el **Magistrado Presidente e Instructor de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince, Doctor Rubén Minutti Zanatta, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal**, ahora Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, en la que simuló juicio de nulidad V-76315/2015, que a claras vistas violó dolosamente el sistema de impartición de justicia, si éste Magistrado, hubiese aplicado los preceptos constitucionales, el Estado de Derecho, la parte quejosa no hubiese sido torturada a sangre fría, por segunda ocasión, en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues la Representación Social, reclama a la parte quejosa la vía pública denominada Andador Tabaqueros, como un delito oficioso (Unidad de Gestión 11 del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México); sin saber qué delito se nos acusa, dio lugar a una reacción del Gobierno de la Ciudad de México que no tiene precedentes a un “estado de excepción” de los más mínimos derechos fundamentales: la vida, la libertad, la dignidad humana, el derecho a no ser vejado, torturado, incriminado, el derecho a una vivienda digna, a la propiedad, en el que se deduce de forma lógica que figuras políticas, autoridades a los más altos niveles han **“recomendado”** el presente caso, tal como lo manifestó el Agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, en el año de dos mil quince en las instalaciones pertenecientes a la Representación Social, que le había pedido “oportunidad” al Fiscal para arreglar **“amigablemente”** el presente caso, dando cabida a una espiral de impunidad. Cabe aclarar, que a éste juicio de nulidad, la parte quejosa nunca tuvo acceso, ni conocimiento. Otro ejemplo y prueba de “recomendación” y de arreglo “amigable”, es la tortura, llevada a cabo en las Instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, -testimonial/denuncia de Carolina González Nava -, el agente del Ministerio Público, gritaba: “no me han dado un peso por este caso”, aventando papeles en su escritorio de cara a la imputada, hechos ocurridos con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.
24. Este estado de excepción, derivó en los juicios de amparo indirecto: 74/2018 y 260/2018, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, como autoridad responsable Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (juicio 74/2018) y Secretario de Gobernación.

RECEIVED



SUPREMA C
U. S. DE L
SECRETARIA GENERAL

25. La restricción de derechos fundamentales, marca un precedente al violentar el artículo 1o. y 29, de la Constitución, en relación a la prohibición de que a ninguna autoridad del Estado Mexicano, le está permitido suspender, luego, violentar a determinada persona los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la tortura; ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos

26. Las denuncias de las graves violaciones a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el caso concreto, apoyó la persistencia de estas violaciones, haciéndonos más vulnerable al caso concreto.

27. Estado de excepción, en el que se observa de forma lógica la cadena de mando, con grado de asociación y complicidad: Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; exjefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, Director de lo Jurídico y de Gobierno del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México; y ahora el presente caso es del conocimiento del Secretario de Gobernación, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 260/2018; autoridad que en juicio constitucional incumple con las obligaciones que le confiere un Estado de Derecho, como Secretario (garante) del Estado Constitucional Mexicano, perpetuando el estado de indefensión, que deriva en una espiral de impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la falta de debida diligencia ante actos de violencia genera impunidad, y que ésta a su vez propende nuevos incidentes de la misma violencia que debía ser eliminada⁸¹ En particular, cuando los delitos de violencia, tanto aquéllos cometidos por particulares como por agentes del Estado, quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de impunidad. También se ha corroborado que la impunidad que rodea la mayor parte de los actos de violencia contribuye a su repetición.⁸² Esta impunidad es en sí misma una forma de discriminación en el acceso a la justicia⁸³.⁴ Lo subrayado es propio.

28. En esta guisa, ejemplo de ello, los agentes del Ministerio Público y el Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, éste último, con fecha 4 de diciembre de dos mil quince, amenazó por medio de dos subordinados (servidores públicos del Órgano Político Administrativo): que si no acudíamos a una concertación vecinal, con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, en la que seríamos detenidos arbitrariamente por Agentes del Ministerio Público, "que habría problemas", de forma lógica, no acudimos a ésta "concertación vecinal", más, policía de investigación, en misma fecha, acudió en busca de los quejosos a nuestro domicilio, hecho, que hizo que nos "resguardarnos"; tal como acontece a la fecha; no obstante, acudimos a denunciar estos hechos ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ante el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al contrario de proteger los derechos humanos de toda persona, obligación consagrada en el párrafo

⁴Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en México, 2015, página 47, párrafo, 63

OLXEL MIS
SIN TEXTO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA GENERAL

tercero del numeral primero de la Constitución, éstas violaciones, fueron alentadas, la persistencia sistemática de estas vulneraciones, deviene a comprobarlo, robusteciendo esta afirmación, con los anexos e informes justificados de los juicios de amparo indirecto: 651/2017, 627/2017 y 260/2018; un ejemplo de ello, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis: infligieron, de nueva vez a la quejosa Carolina González Nava, en la Agencia del Ministerio Público, tortura psicológica, derivando, que su resistencia física y psicológica, fuera quebrantada por el largo periodo en que a los quejosos nos han privado de derechos fundamentales.

29. De hecho, al solicitar, que se recuperara la vía pública denominada Andador Tabaqueros y/o clausurara el paso vehicular que tiene cabida en ésta vía, propiedad del dominio público, cerrada ilegalmente al libre paso por los probables responsables en la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01, ya que éstos, destruyen intencionalmente, día con día la vivienda que habita la parte quejosa, hecho que constituye crimen de genocidio, con aquiescencia del Estado Mexicano. En esta guisa, el veintitrés de mayo el Gobierno de la Ciudad de México, invadió la esfera de competencia del ejecutivo, decretando de *facto* estado de excepción, esto es, en el caso concreto, de forma sistemática, con un alto grado de planificación, violaron de forma sistemática: el derecho a la integridad personal, a la protección a la familia, los derechos de la niñez, el principio a la legalidad, la prohibición a la tortura, el derecho a la no discriminación, el derecho a la propiedad, a una vivienda digna contrayendo esta excepción de derechos fundamentales a los quejosos, violentando gravemente el derecho a un proyecto de vida, derecho consustancial del derecho de la existencia:

30. La Comisión de Federal de Electricidad, pretende privarnos de energía eléctrica, amenazando que en cualquier momento nos privará de este servicio básico, esto es, los habitantes del Andador Tabaqueros en específico el probable responsable en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, **Diego Arturo Lara Nava** es empleado federal de esta empresa pública (Ref. UT/SAIP/0776/17), que en conjunto con el Lic. Adolfo Acevedo de la Cruz, agente comercial San Ángel 2, modificaron el sistema, generando cobros indebidos. Esto conforme al Oficio No.: ZON-LOMFAC-0033/17⁵

31. Siendo otro ejemplo, de la interrupción del proceso constitucional democrático, en el que permanece el presente caso: juicio de nulidad V-76315/2015, proceso, en el que no se respetó la normas de un Estado de Derecho, aun cuando en este expediente se conforma por denuncias de: tortura, incriminación, obstrucción de acceso a la justicia, violencia institucional, violencia en la comunidad,... ; el Magistrado Dr. Rubén Minutti Zanata, adscrito a la Quinta Sala Ordinaria Ponencia Quince del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal, resolvió en fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, que no se había respetado la garantía de audiencia, que versa sobre una vía pública que permanece cerrada, misma, que es empleada como arma, en contra del derecho a la vida y propiedad de los quejosos. Resolución que no resulta conforme a derecho, incumpliendo con acatar Jurisprudencia: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en la Tesis: 2a. LV/2001, Novena Época, mayo de 2001, tomo XIII, pág. 319, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "**BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, AL ESTABLECER QUE NO PROCEDERÁ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO CUANDO EXISTA OPOSICIÓN DEL INTERESADO O IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LOS QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA**".

⁵ Documental pública en autos del juicio de amparo 909/2018



COI
DE LA
DE

32. Juicio de nulidad: V-76315/2015, que atiende en apariencia a la formalidad. La parte actora fue uno de los habitantes del multicitado Andador Tabaqueros, Odilón Nava de la Rosa, que cabe traer a colación las autoridades y/o figuras políticas que han tenido asociación y complicidad en el crimen de genocidio que acontece, mencionaban mediante el agente del Ministerio Público Alejandro Rangel Arenas⁶ que iban a ejercer acción penal con el probable responsable Odilón Nava de la Rosa a razón de su edad, pues "el juez lo declarara inimputable", por consiguiente, éste probable responsable fungió como parte actora, el Magistrado Dr. Rubén Minutti Zanata, aun a sabiendas que una vivienda está siendo destruida día con día por la reconversión de un andador peatonal a paso vehicular, dictó sentencia de conformidad a la interrupción del proceso constitucional democrático, supresión y/o violación a derechos humanos no derogables. Juicio que fue del conocimiento formal de la quejosa el nueve de enero de dos mil dieciocho, que derivó en solicitud de amparo indirecto con número de expediente 74/2018.
33. Ello es, este caso, surge de una petición de acceso a la justicia formalizada en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01; que está relacionada con el daño a una casa habitación. Vivienda, que ésta en riesgo alto de derrumbarse; por la reconversión de un otrora andador peatonal, (vía pública denominada Andador Tabaqueros) a un paso vehicular, que no cumple con las normas de construcción para los efectos que se le está dando:
34. Las ampliaciones de Dictamen emitidos por perito oficial en Ingeniería y Arquitectura, adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante probanzas científicas, permitieron configurar desde el mes de abril de dos mil dieciséis, la tipicidad y antijuridicidad, el modo, tiempo y lugar; que confirman plenamente las declaraciones que fueron realizadas en forma escrita por algunos de los señalados como probables responsables (habitantes del Andador Tabaqueros familiares por consanguineidad de la Concejal Diana Álvaro Gallegos), declaraciones que fueron vertidas, ante agente del Ministerio Público, con la asistencia de su abogado (figura política, José Máximo Pérez Romero), con fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece (juicios de amparo: 1118/2016, 288/2017, 651/2017)
35. Estas probanzas científicas (dictamen), demuestran que la circulación de vehículos, que tiene cabida en el denominado Andador Tabaqueros (vía pública cerrada ilegalmente al libre paso), hace presión sobre los muros y estructura de la vivienda, que habitan los quejosos, esto es, este paso vehicular, no cumple con muros de contención.
36. En declaración ministerial (27 de noviembre de 2013), los probables responsables, manifiestan que la entrada a su inmueble es por Andador Tabaqueros, que es una

⁶ "por su edad el probable responsable Odilón Nava de la Rosa, el juez lo va a declarar inimputable, ...voy a ejercer acción penal con él ...", hechos ocurridos en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón el quince de septiembre de dos mil dieciséis.



ORTI
A NA
LE AG

vía pública, asimismo, que vibra la vivienda de los quejosos cuando circulan sus vehículos por ésta vía pública.⁷

37. Como consecuencia de esta violación grave a los derechos humanos, la parte quejosa fue narrándolos hechos mediante un número considerable de denuncias, contenidas en los anexos de los juicios de amparo 288/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018 y 909/2018, dirigidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; al Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretario de Gobernación, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto entre otras autoridades, hechos notorios del estado de excepción. Supresión de derechos inderogables de los quejosos.
38. No obstante, la comunidad conformada por el “pueblo”, como lo denomina el agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, habitante de San Nicolás Totolapan, Alcaldía La Magdalena Contreras, agente, que conoce a los habitantes del multicitado Andador, pues en el periodo marzo a octubre del año 2015, tuvo a su cargo la Averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, afirmando que la indagatoria la había *encargado el Procurador*, por lo que le solicitó *al Fiscal* que le *diera oportunidad* que él conocía a las partes, que lo iba *arreglar de manera amigable*, que los probables responsables (habitantes del Andador Tabaqueros) tenían el *conecte con la Delegación*. Es por ello que un considerable de personas que habitan este poblado laboran en el Órgano Político Administrativo de la demarcación territorial la Magdalena Contreras, asimismo, los une estrecha amistad con la Alcaldesa Patricia Jimena Ortiz Couturier, tal como es el caso de la Concejala Diana Álvaro Gallegos, familiar por consanguineidad de los habitantes del Andador Tabaqueros, quien a su vez, a “beneficiado” tanto como a sus familiares y amigos, con “programas sociales de apoyo económico”, trabajo, impunidad, por consiguiente, éstas personas ejercen violencia en la comunidad en contra de los quejosos, hecho notorio en los juicios de amparo: 288/2017, 349/2017, 651/2017, 74/2018, asimismo, expediente de juicio de nulidad V-76315/2015, dando lugar a persecución objetiva del Estado Mexicano, en las que se ha visto alentada la incriminación (las figuras de: fabricación de delitos y libre tipificación de delitos) el temor de volver a ser torturado, discriminación, vejaciones, humillación, amenazas, intimidación, penas infamantes, haciéndonos a los quejosos más vulnerables día con día.
39. Juicio de nulidad V-76315/2015 substanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, bajo la ponencia del Magistrado Rubén Minutti Zanatta. Probanza idónea del estado extraconstitucional de supresión de derechos fundamentales no derogables. Magistrado que tiene plena responsabilidad en éste crimen de genocidio que acontece.
40. En esta guisa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en el transcurso de un proceso se pueden producir hechos independientes que podrían configurar violaciones específicas y autónomas de denegación de justicia⁴.

⁷ “...Debo manifestar, que el acceso al inmueble del suscrito, lo es por andador tabaqueros..., también debo mencionar que el andador que da acceso..., es un andador público porque este andador de acuerdo con los planos de urbanización de la delegación magdalena contreras, se contempla como vía pública...”

Asimismo...la querellante pretenda hacer valer que son las vibraciones que dice se causan por la circulación de los vehículos sobre dicho andador las que causaron los daños a su propiedad...” Anexo V; inciso j, considerando séptimo de la sentencia de amparo, resolución de la Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.

12-31-57

12-31-57

Por ejemplo, la decisión de un juez de no permitir la participación del defensor del acusado en el proceso⁵; la prohibición a los defensores de entrevistarse a solas con sus clientes, conocer oportunamente el expediente, **aportar pruebas** de descargo, contradecir las de cargo y preparar adecuadamente los alegatos⁶; la actuación de jueces y fiscales 'sin rostro', el sometimiento al acusado a torturas o maltratos para forzar una confesión⁸; la falta de comunicación al detenido extranjero de su derecho de asistencia consular⁹, y la violación del principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia¹⁰, **entre otros**.¹ Lo resaltado es propio. (Corte IDH. *Caso Almonacid Arellano y Otros Vs Chile*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

41. En esta guisa, los actos de la autoridad en referencia al caso concreto, han sido intencionales y altamente planificados, penas inusitadas, castigos por solicitar acceso a la justicia, aplicando discriminación, por consiguiente, estado de excepción.⁸ Por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado: "La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima (cf. *Case of Ireland v. the United Kingdom*, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167). Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida (cf. *Case Ribitsch v. Austria*, Judgment of 4 December 1995, Series A no. 336, párr. 36)."⁹

42. Por lo que intencionalmente, el Estado mexicano, ha decretado la nada jurídica, se ha dado a la tarea de destruir intencionalmente la integridad física, moral y mental en el caso concreto, luego, la dignidad; nos han arrastrados a sufrimientos ignominiosos, sin certeza y seguridad jurídica en este estado de "excepción de derechos", en que los quejosos tenemos, dos años, cuatro meses, solicitando acceso a la justicia en el medio de control de la constitucionalidad; ya que, que por un periodo de seis años, con tres meses, que comenzó en el año de dos mil trece, a la fecha del presente escrito de **solicitud oficiosa de revisión de decreto ejecutivo de estado de excepción**: el Estado Mexicano, han contravenido sistemáticamente derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, derechos, que encuentran contestes en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Imponiendo ilegalmente un estado de excepción formal, por consiguiente, se constituye un

⁸Un ejemplo de ello, afirmaban a los quejosos, por medio de la Lic. Fabiola Hernández, Secretaría Auxiliar del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México: "**no podemos hacer nada, tienen calidad de imputados**", asimismo, conformaban "audiencias" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con falsos pretextos, de que teníamos que acudir a las agencias del Ministerio Público, para, "ver si era posible tener acceso a los expedientes", para ratificar escritos, para solicitar acceso a la justicia, para "entrevistarnos" con el Fiscal; "audiencias", en las que planificaron interrogatorios, humillaciones, incriminación, coacción, tortura, vejaciones, amenazas, intimidación, hostigamiento.... Hechos notorios, validados en juicio de amparo 627/2017

⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Loayza Tamayo Vs Perú*. Fondo Sentencia del 17 de septiembre de 1997, párrafo, 57

estado extraconstitucional de suspensión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

43. vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de los quejosos, incumple el Estado Mexicano los preceptos constitucionales. El persistente estado de excepción de Derecho, restringe los derechos humanos que le son relativos tales como el derecho a la vida, a la propiedad, a una vivienda digna, a la integridad personal, a la protección judicial, derecho a la libertad personal, al principio inquebrantable de inocencia; el principio de una defensa adecuada; el derecho de legalidad; derecho a las garantías judiciales; derecho a la protección judicial; derechos del niño.
44. Ilegal desde cualquier punto de vista, tomando en cuenta que el artículo 29 de la Constitución se ve reforzado con el numeral 27.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), **ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**” Lo subrayado es propio.
45. El “estado de excepción” de Derechos y la violación flagrante y sistemática a derechos fundamentales no derogables, en el que persiste la persecución objetiva en que tal como se vive en un estado extraconstitucional: con temor fundado de ser sometido de nueva vea a tortura, incriminado, pérdida arbitraria de la vida, entre otras violaciones a derechos fundamentales no derogables. En un Estado que convalida actos de barbarie en una espiral de impunidad.
46. Los derechos humanos más básicos de los quejosos se han visto trastocados, existiendo un temor fundado de genocidio, total, pues el estado de excepción de Derecho, ha derivado en violación sistemática y flagrante a un debido proceso. Hechos notorios son los juicios de amparo anteriormente citados.
47. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado: “En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.” No así, con nuevos actos que conlleva estado de excepción de Derecho, que faciliten “castigos prohibidos por la Constitución y por normas del *ius cogens*; actos que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos, asimismo, los derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
48. En esta guisa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha pronunciado que “el Estado está obligado a responder *sua sponte* con determinadas medidas de investigación, actos encaminados a sancionar y castigar a los perpetradores, y mecanismos que garanticen el acceso a la indemnización” y, “[a]l mismo tiempo, la víctima tiene un derecho directo a procurarse protección y reparación judicial”¹⁰
49. Aun cuando la normatividad aplicable al caso, es por su propio origen, materia de amplia regulación en el Derecho Internacional y también de regulación en el derecho interno; esto es, de modo importante confluyen normas del orden jurídico internacional vigentes en el Estado Mexicano, esto, con fundamento en el artículo

¹⁰ Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala

SECRET

13

10., 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que deben ser observadas por todas las autoridades mexicanas y en particular por el ejecutivo. **En las que se han violentado sistemáticamente los derechos más básicos de la persona humana, como la integridad, la amenaza constante a la pérdida de la libertad personal, a la vida, luego afectando gravemente el proyecto de vida de los quejosos.**

50. En este sentido, el Estado Mexicano, cuenta con un marco constitucional y convencional vigente: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, así como su Protocolo Facultativo, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; asimismo, el numeral primero de la Constitución, mandata que queda prohibida toda discriminación, al respecto es clarificador la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia¹¹ y la **Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.**

¹¹ CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención:

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

2. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

4. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y

OKEL MIS



51. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana".¹²
52. En referencia, la Corte ha manifestado que el Estado "tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares".¹³
53. Por lo que la obligación del Estado de investigar no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones como prontas, exhaustivas, imparciales e independientes.¹⁴
54. Así mismo, es loable resaltar el pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que, "Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado; abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona, como son: la duración de los tratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto y la vulnerabilidad, entre otros, que deberán analizarse en cada situación concreta".¹⁵
55. En esta guisa, el más Alto Tribunal de la Nación al interpretar el artículo 133 de la Constitución Federal, ha sostenido que sólo el Poder Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, entre otros instrumentos.

De lo anterior, se dilucida, entre otros, dos principios fundamentales del juicio de garantías:

- I. que únicamente procede a petición de parte agraviada, quien debe ser un particular y

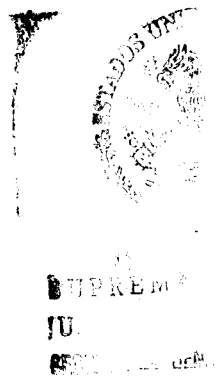
exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

¹² *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) v. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 173; *Caso El Amparo Vs. Venezuela*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de febrero de 2010, Considerando decimoctavo, y *Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2010, Considerando vigésimo primero.

¹³ *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros)*, *supra* nota 5, párrafo 173; *Caso El Amparo*, *supra* nota 5, Considerando decimoctavo, y *Caso Heliodoro v. Portugal*, *supra* nota 5, Considerando vigésimo primero.

¹⁴ *Caso Heliodoro Portugal v. Panamá*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2011, Considerando vigésimo primero y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de 19 de junio de 2012.

¹⁵ Tesis 1a. LVI/2015 (10a.), de la Primera Sala, de rubro y texto: "**TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LAS PERSONAS**", publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1423



- II. que el acto reclamado debe ser considerado por el particular, violatorio de sus derechos humanos.

“Históricamente, las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son un reconocimiento en la norma constitucional de los derechos naturales y fundamentales del hombre. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todos los habitantes de la República contra los actos arbitrarios de autoridad, que dan a sus titulares la potestad de ser exigidos únicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la propia Carta Magna consagra, esto es, la acción constitucional de amparo.”

Esta misma disposición es la que se encuentra en el artículo 1º, fracción I y III, de la Ley de Amparo, que dice:

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
- II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
- III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

Así, el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado.

La acción constitucional de amparo es un derecho público subjetivo que otorga la Ley Suprema a todo individuo que se vea lesionado en sus derechos humanos, puede acudir a juicio de amparo, pues éste es un medio de protección de orden constitucional, en ese aspecto específico. El juicio de amparo es un sistema integral de defensa de los derechos humanos, máxime, que en relación a las fracciones I y III del artículo 103 constitucional se le reclamó al Ejecutivo derechos inderogables de la persona humana en el caso concreto.

Ahora bien, en el presente caso, se violenta lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución, puesto que el Estado Mexicano, sin tener facultades para ello, ha establecido por un periodo de seis años, tres meses, ilegalmente, estado de

CONFIDENTIAL

SECRET
70
BUREAU OF

excepción de derechos fundamentales no derogables, luego, al acudir a instancia constitucional, mediante los juicios de amparo indirecto y sus anexos: 1118/2016, 288/2017, 349/2017¹⁶, 545/2017, 627/2007, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018 hacen hechos notorios, de este estado de excepción de derechos fundamentales, en el que las autoridades, siguen vulnerando en el caso concreto derechos inderogables de la persona humana, en el que no se observa a la fecha que se dé cumplimiento a los preceptos constitucionales conculcados; los perpetradores del delito de genocidio en sí y por sí mismo, tienen total impunidad, hecho notorio en los juicios de amparo citados y sus anexos, que en sí y por sí mismos son pruebas de este estado de excepción de Derecho. No obstante, los preceptos constitucionales y los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano a firmado y ratificado, demarca prohibición expresa para actualizar delito de genocidio, luego, "estado de excepción perennizado: en el que se violenta una serie de derechos protegidos en los artículos 1; 4, párrafo VII y VIII; 14; 16; 17; 22; 27, (derecho a la propiedad); 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la especie, el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones *erga omnes*; precepto constitucional que garantiza que ninguna autoridad puede invadir la esfera jurídica de la autoridad federal su autonomía y determina su competencia exclusiva, entre otros mandatos, solamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que podrá restringir o suspender de manera formal y no de hecho en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Sin embargo, **no podrá restringirse ni suspenderse** el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos, el principio de legalidad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos; que está restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Por lo que si el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formalizara el estado de excepción de derechos fundamentales no derogables conforme a la Constitución, corresponde de manera exclusiva al Máximo Tribunal Constitucional del país, la revisión oficiosa del decreto del ejecutivo, siendo importante mencionar que de conformidad con el principio de interdependencia al ser vulnerado un derecho, se vulneran en el caso concreto los preceptos constitucionales: 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27, 29, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego, "el Estado está obligado a responder *sua sponte* con determinadas medidas de investigación, actos encaminados a sancionar y castigar a los perpetradores, y mecanismos que garanticen el acceso a la indemnización" y, "[a]l mismo tiempo, la víctima tiene un derecho directo a procurarse protección y reparación judicial"¹⁷; violentando a la fecha estas obligaciones que mandatan el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

¹⁶ Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México

¹⁷ Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala

Excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables:

Así tenemos, que la coyuntura en el presente caso, que existe entre el derecho de solicitud de acceso a la justicia y el estado de excepción de Derecho y las violaciones a derechos fundamentales no derogables determina la vulneración al artículo 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27, 29 y 133 de la Constitución.

El artículo 10. párrafo tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos; asimismo queda prohibida toda discriminación.

El artículo 103 Constitucional, menciona que los "Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

- I. *Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"*
- II. *(...)*
- III. *Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.*

El numeral 10. de la Ley de Amparo mandata que: *El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:*

- I. *Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;*
- II. *(...)*
- III. *Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

En este entendido, el artículo 1 de la Constitución menciona que el Estado tiene como obligación prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación; asimismo, el numeral 10., fracción I y III de la Ley de Amparo, mandata que el juicio de amparo resolverá toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad de los Estados o de la Ciudad de México, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 103, fracción I y III, de la Constitución menciona que

Los Tribunales de la Federación resolverán la controversia que se suscite por actos y omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; **y por actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal;**

100 M
S. 100 L
100

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos **que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:**

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. Nota. Lo resaltado es propio

Derivado de éstos mandatos el numeral 1o. de la Ley de Amparo, menciona que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano ha ratificado; asimismo por actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos anteriores, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por actos que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta guisa, **la Suprema Corte de Justicia de la Nación** conocerá de actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

“...solamente **el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión** o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado...”

Asimismo, mandata que los decretos que se expidan de suspensión o restricción del ejercicio de los derechos y garantías, **no debe contraerse a determinada persona**; asimismo, el párrafo segundo de este artículo, menciona, **que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**

El párrafo tercero del numeral que nos ocupa, **prohíbe la suspensión del ejercicio de los derechos y garantías sea arbitraria**, está restricción debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en la Constitución y ser proporcional al peligro que se hace frente, observando en todo momento los

RECEIVED
JUSTICIA 1
L

principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

El último párrafo menciona: **“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”**

Por lo que el artículo 29 de la Constitución, mandata, que solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender mediante decretos en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías, **mismas restricciones que serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, la restricción del ejercicio de los derechos y garantías, no debe contraerse a determinada persona; pero limita esta suspensión, esto es, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Luego, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso concreto, formalizó en juicio de amparo el estado de excepción de derechos fundamentales no derogables, por consiguiente, el acto del ejecutivo suspende formalmente los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el caso concreto.

Esto es, el Gobierno de la Ciudad de México invadió la competencia del ejecutivo, decretando un estado de excepción de *facto*, al vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de los quejosos, incumpliendo con los preceptos constitucionales, invadieron la esfera de competencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más en juicio de amparo con número de expediente el ejecutivo formalizó el estado de excepción, en el que se ha constituido crimen de Genocidio:

Construyendo el presente caso que deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su fuente convencional en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refieren a la obligación de las autoridades de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En esta guisa, las disposiciones de la Ley de Amparo, establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de manera supletoria, y en su defecto, los principios generales de derecho en el entendido de que la interpretación de dicho código adjetivo y los principios generales de derecho debe tomar en cuenta el principio de buena fe, el principio de favorecimiento de la acción (*pro actione*) y el principio de interpretación más favorable (*principio pro personae*) en relación al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y aun recurso efectivo, principios inspirados en el artículo 17 de la Constitución incluyendo *inter alia*, el artículo 25.1 y 25.2 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menciona que *“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus*



SUPREMA
US. CIA DE
SECRETARIA GENERAL

funciones oficiales” y la obligación de “desarrollar las posibilidades del recurso judicial”.

Al respecto la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado tesis aisladas 1a. CCXCIV/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.**

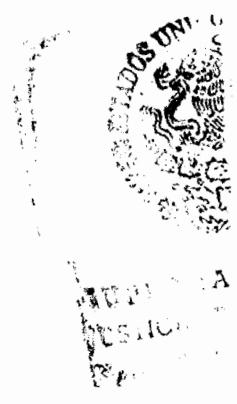
Si bien es cierto que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos gozan de un margen de apreciación para articular la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también lo es que los requisitos y las formalidades establecidos en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia de ese derecho. Así, en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al legislador no sólo la arbitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una desproporción entre los fines que aquellas formalidades y requisitos previstos en la ley preservan para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican. Lo subrayado es propio.

En el presente caso las normas imperativas, relativas a los derechos del hombre, al reconocimiento de la dignidad humana base de los demás derechos: a la no impunidad, a la justicia, al derecho de no ser torturado, el derecho a la vida, el derecho de no ser discriminado, el derecho a no ser amenazado con pena privativa de la libertad o de la vida, el derecho de que no se imponga a los quejosos castigos como penas anticipadas, el de ejercer acción penal ante un Juez Oral con competencia para delitos oficiosos (juicio de amparo 627/2017), como forma de castigo, el derecho a que no se soslaye el interés superior de la niñez, el derecho a la propiedad (juicios de amparo 1118/2016, 288/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018), el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a no vivir con zozobra, que en cualquier momento el Estado Mexicano¹⁸ nos imputará hechos falsos en libre tipificación de delitos, con toda impunidad, en los que no se permita conocer a los quejosos de que se nos acusa (si nos atrevemos a denunciar éstos hechos o a intentar ver el expediente con la intención de saber de qué se nos acusa, seremos torturados, vejados, humillados...), ejerciendo acción penal, como delito oficioso (unidad de gestión once, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)¹⁹, el derecho a no ser privados de seguridad

¹⁸ Juicio de amparo indirecto: 627/2017 y 349/2017.

¹⁹ Ello es así, por ejemplo, la policía; el Ministerio Público en conjunto con algunos habitantes del “pueblo”, como lo llama el agente del ministerio público Manuel Gallegos Guzmán (juicio de amparo 627/2017, 349/2017, 288/2017, 651/2017 substanciados en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México), nos imputan a los quejosos hechos falsos, ejerciendo extrema violencia, haciéndonos saber por terceros, o bien, mediante informes de fecha 26 de octubre de 2017, 09 de noviembre de 2017, rendidos ante el Juzgado de Distrito en la substanciación del juicio 627/2017, en la que la autoridad responsable informa respectivamente, que sigue investigando, sin tener

STANDARD



jurídica, a no ser vejado, a no recibir castigos infamantes, **actualizando crimen de genocidio: basada en motivos políticos y sociales cometida por autoridades y un grupo que ejerce un poder sobre un territorio determinado con objeto de someter a la parte quejosa a una forma de vida en la que se ha negado y se sigue negando de forma permanente el goce de derechos fundamentales de los quejosos, entre otras violaciones graves a derechos humanos, denunciando una y otra vez inacceso a la justicia**; solicitando en el transcurso de seis años con tres meses ante diferentes autoridades (órganos de gobierno de la Ciudad de México y federal) que cesaran éstas graves violaciones, máxime si en el presente caso la sistemática y planificada violación a los derechos humanos que han sido denunciados: al Procurador General de Justicia del Distrito Federal²⁰, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; al Secretario de Gobernación, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos²¹.

Pues, en el caso concreto se ha vulnerado derechos humanos, al tenor del artículo 1º, 29 y 89, fracción X, de la Constitución, en que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de, respetar, proteger y o garantizar los derechos humanos, mandato constitucional que tiene como consecuencia el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. El acceso a la justicia, así como su impacto en el debido proceso, y la defensa de los quejosos, particularmente, se ha conformado un grupo de poder público y privado en contra de los quejosos, que de forma intencional y altamente planificada nos han arrastrado a sufrimientos ignominiosos. Daños que se siguen solidificando como método sistemático; derivando en lesión grave a la integridad física, mental y moral, lesiones presentes y futuras. La corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tienen diversas connotaciones de grado y abarcan desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta²².

Aunado a la excepción de las garantías judiciales y protección judicial indispensables para la protección de tales derechos:

certeza jurídica los quejosos que delito investiga, acudiendo la policía a ejercer castigos infamantes. Por lo que la parte quejosa vive con temor, zozobra; sin derechos fundamentales, sin que la autoridad responsable a la fecha del presente escrito se pronuncie e **instaure una investigación, sanción y reparación del caso concreto**.

²⁰ En fecha 27 de diciembre de 2017, mediante escrito dirigido respetuosamente al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, solicitamos se nos proporcionara copia de las "audiencia públicas" **(que eran concertadas por la licenciada Fabiola Hernández Espíndola, Secretaria Auxiliar del C. Procurador de Justicia de la Ciudad de México)** e informes de las mismas, que tenían verificativo en las Fiscalías Desconcentradas de Investigación en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, etc.; audiencias a las que acudían los quejosos: Julio Cesar González Nava, Martha Patricia González Nava y/o Carolina González Nava, acompañados por Israel González Nava; con la finalidad de presentarlas como prueba de los malos tratos, burlas, interrogatorios, tortura, vejaciones, violencia, humillaciones, intimidación, amenazas; conductas realizadas una y otra vez, en contra de los quejosos por agentes del ministerio público. **Acudíamos de buena fe a estas audiencias a solicitar tener acceso a la justicia, a que se respetaran derechos fundamentales como lo es el de la vida, la integridad psíquica y física, el patrimonio entre otras.** Más deliberadamente en estas "audiencias", una y otra vez como método sistemático perpetraban estas violaciones; **en el presente caso no se tiene acceso al Ministerio Público local ni federal.**

²¹ Juicio de amparo indirecto 260/2018

²² Caso Espinoza González vs Perú, párrafo 142

SIN TEXTO



En esta guisa, los innumerables juicios de amparo indirecto son hechos notorios²³, en sí mismos, son probanzas del estado de excepción de Derecho, y las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los quejosos, la afectación a nuestros derechos más básicos, en las que las autoridades, figuras políticas y particulares, han actualizado crimen de genocidio, pues, la destrucción intencional de mi vivienda, la tortura, persecución u otros actos inhumanos de carácter similar que sean perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo, sometiendo a los quejosos intencionalmente a condiciones de existencia que han acarrear nuestra destrucción física, total o parcial, hechos que han causado lesión grave a la integridad física, mental y moral.

II. Violación al estado de excepción de Derecho y violación a derechos fundamentales no derogables:

Violación al estado constitucional, en el caso concreto la aplicación y formalización del estado de excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables, de forma lógica, ha derivado en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

La garantía constitucional (el derecho a la legalidad, artículo 14 constitucional) para la protección de los derechos conculcados, inmersa en el artículo 103 y 107 de la Constitución, ha sido vulnerada de tal manera que han sido inefectivos a la fecha del presente escrito.

Ha sido vulnerado el artículo 133 de la Constitución, Supremacía Constitucional, garantía objetiva de la Constitución y de los derechos que la consagran.

Hechos que conllevan responsabilidad de los funcionarios públicos, figuras políticas y particulares que han ordenado, ejecutado actos del Poder Público que han derivado en el presente caso en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, delitos que constituyen crimen de genocidio, siendo además violatorio del artículo 108, 128 de la Constitución²⁴. No habiendo eximente la invocación de cumplimiento de órdenes superiores (responsabilidad en la cadena de mando).

El artículo 29 de la Constitución le confiere facultad extraordinaria al Ejecutivo, que sólo procede ser adoptada en circunstancias especiales, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más ésta facultad es limitada, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Estando reforzado este mandato, en el artículo 133 de la Constitución.

Pero esta potestad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ejercer mediante decretos, no está exenta de controles. **El decreto que ordene la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, serán revisadas de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

²³ juicios de amparo indirecto: 288/2017,545/2017,349/2017,627/2017,651/2017, 260/2018, substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, excepto el juicio 349/2017, substanciado por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito

²⁴ Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud **sobre su constitucionalidad y validez:**

La garantía para la defensa de los derechos fundamentales, consagrado en el artículo 103 y 107 de la Constitución, como derecho de toda persona a ser amparado, no podrá suspenderse.

El Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por **actos ejecutivos formales**, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Los derechos fundamentales no forman parte de la suspensión o restricción

A la parte quejosa se le ha negado la protección judicial efectiva, en vía de amparo

En el presente caso se encuentra un absurdo jurídico, de formalidad Ejecutiva, sin soporte *de iure*, existe plena inseguridad jurídica ("*habeas corpus*"²⁵) que ha afectado el Estado de Derecho, lo cual configura un cuadro sistematizado de crimen de genocidio. Dando una informalidad jurídica de estado de excepción de Derecho, suspensión de derechos fundamentales por un periodo de seis años, tres meses (enero de dos mil trece al mes de marzo de dos mil diecinueve), sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado que los quejosos tenemos acceso a juicio de amparo, a la fecha no se ha dado de forma mínima un establecimiento al orden jurídico, limitación a la ilegalidad o régimen relativo al ejercicio de los derechos que han sido suspendido. En un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico, en el presente caso, se ha "suspendido el Estado de Derecho", ateniéndonos la parte quejosa a la inseguridad jurídica.²⁶

El acto formal del presidente de los Estados Unidos Mexicanos es hecho notorio en juicio de amparo 909/2018, decreto formal de suspensión de los derechos fundamentales no derogables, incidiendo sobre diversos derechos fundamentales: a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y regularse ejecutivamente al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la impunidad: a la permisón de ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso",

²⁵ En el sentido que el "habeas corpus" tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

²⁶ Siendo un ejemplo de ello, en días pasados, autoridades pertenecientes a seguridad pública (policías auxiliares abordó de patrullas) y al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras en conjunto con particulares, María Dolores Espinoza Bassoco (habitante de Andador Tabaqueros), acudieron al domicilio de la parte quejosa golpeando sus muros con mazos (dañándolos, a su vez, rompiendo tubería de drenaje), "mencionado que en cuanto salgan los detienen", observando, Carolina González Nava, que venían servidores públicos y particulares con herramientas (mazos) a bordo de un automotor con número de unidad ECO 366.



100
101



han actualizado delitos que constituyen crimen de genocidio. Más nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

formalidad jurídica insólita, se ha suspendido el orden jurídico en el presente caso, con resoluciones clandestinas, fantasmas y/o, llevadas de *facto* (no formales) o formales; basta ver las resoluciones que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha hecho del presente caso, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal, ahora, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación del Estado Mexicano.

En más de una ocasión a la parte quejosa: nos han torturado, la Representación Social ha hecho acusaciones insólitas, en el catálogo penal, no existe el tipo penal de solicitud de acceso a la justicia; “¿de homicidio por otras causas?!” (juicio de amparo 627/2017), ... o bien legalizar la aplicación de tortura por solicitar que no se permita que se derrumbe la vivienda que habitan los quejosos. Los expedientes de los juicios de amparo: 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018 lo demuestran; ello es así, en el presente caso se ha suspendido formalmente el Estado constitucional de derecho.

La informalidad jurídica, el atropello de derechos fundamentales y al orden constitucional que el Estado Mexicano ha formalizado, ejemplo de ello: el Gobierno de la Ciudad de México y del Secretario de Gobernación, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 260/2018, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, éste alto funcionario, no ha hecho otra cosa que propugnar en el presente caso por el estado de excepción de Derecho, la impunidad jurídica de la arbitrariedad.

Pues sin el menor respeto al Estado Constitucional, la parte quejosa ha sido arrastrada a sufrimientos ignominiosos por un periodo de seis años, tres meses, hechos que no han cesado, en que se nos ha denegado la protección judicial en los términos que mandata el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La previsión y mandato del artículo 1; 29; 89, fracción X, 103, 107 y 133 de la Constitución en el presente caso, que son en sí mismos la regulación de derechos fundamentales en la pertinencia de las garantías que regulan el estado de excepción han sido inobservados en el presente caso.

El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano que observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (1 y 133 de la Constitución), no incluyen los efectos de solicitud de acceso a la justicia, en oposición con el poder del Estado arbitrario que en “pacto criminoso” y connivencia con el poder particular en acciones incompatibles con la intención de someter a persona alguna a la acción de la justicia por crimen de genocidio, como circunstancia excepcional que autoriza formalmente la puesta en vigor de medidas de “emergencia” en el presente caso.

Causales que son ilegítimas, el estado de excepción en el presente caso obedece a razones espúreas en violación a los preceptos constitucionales y de los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos pertinentes que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado (sistema convencional).



CC
L.
GENERAL

El estado de excepción en el presente caso no es justificado, obedece a razones espúreas, que hace del presente caso un precedente que debe ser analizado en instancia constitucional, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional²⁷

Así tenemos, que los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos en relación al artículo 29 de la Constitución, permiten clarificar y diferenciar las causales que autorizan la suspensión de ciertos derechos humanos, de aquellas situaciones que no permiten o no prevén suspensión alguna:

El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las observaciones generales que de él han derivado por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Para el efecto, estos instrumentos genera obligaciones erga omnes, inmerso en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En efecto, la obligación principal que el Estado Mexicano ha asumido como Estado Parte de los instrumentos mencionados en párrafos anteriores, es la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.²⁸); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27²⁹), prevén

²⁷ Hernán Montealegre Klerner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial: Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

²⁸ Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva

la posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los estados partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional, sin discriminación alguna.

Mas, existen derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los cuales son normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29, 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Suprema de toda la Unión)

Convenciones Internacionales que no admiten ninguna posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales que protegen, Instrumentos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado, que le exigen obligaciones *erga omnes*: Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.

29 Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.



SUPREMA
COURT OF THE
SECRETARIA GENERAL

De modo que el Estado que declara, ya sea de hecho o formal, el estado de emergencia para suspender el estado de Derecho y derechos fundamentales no derogables, su decisión no esta ajena a un control internacional, y al control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 29, párrafo quinto, in fine, de la Constitución). Por ello, la carga de la prueba de la gravedad de la situación recae en el Estado Mexicano que ha impuesto las medidas de excepción de derechos y violentado flagrante y sistemáticamente derechos inderogables a la parte quejosa y a nuestra familia.

En concreto el estado de excepción que acontece es un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico; suspendido el estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica; en la ahora aplicación formal del estado de excepción de derechos fundamentales ha derivado en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, en el que existe denegación de control judicial, (hecho nulo) que hace preciso un control judicial efectivo.

Por consiguiente, al estar formalizado este estado de excepción, se ha violado el principio de notificación, de proclamación inmerso en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Las garantías de fondo: principio que debe tratarse de una amenaza excepcional, principio de proporcionalidad; principio de no discriminación; principio de intangibilidad de derechos humanos fundamentales y principio de compatibilidad con las obligaciones impuestas por el Derecho Internacional.

Principio de proclamación. Establece la necesidad que la existencia del estado de excepción debe ser proclamado oficialmente. Su propósito es evitar reducir las garantías de excepción de facto, mediante una norma de publicidad en el Derecho Interno.

Principio de notificación. Este principio establece la obligatoriedad a todo Estado Parte que haga uso del estado de excepción, de informar inmediatamente al Secretario General de la ONU, quien a su vez deberá comunicar a los demás Estados Partes los siguientes extremos (artículo 4.3):

- I. Las razones o motivos alegados
- II. La naturaleza de las medidas adoptadas
- III. Las disposiciones contenidas en el Pacto suspendidas

El presente caso tristemente es una "patología" de un estado de excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables:

Se han vulnerado las Garantías de fondo:

Debe tratarse de una amenaza excepcional (artículo 4.1)

Principio de Proporcionalidad en relación al principio de estricta necesidad - principio basado en la teoría de la legítima defensa-, la relación entre las medidas adoptadas debe ser proporcional a la amenaza.

Luego, el Estado, en el caso concreto debe demostrar que su actuación es legítima.

Principio de No Discriminación (artículo 4.1 in fine), las medidas adoptadas no deben ser dirigidas a un grupo para su exterminio como en el caso acontece, lo que hace ilícita toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un grupo de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Principio de Intangibilidad de derecho fundamentales:

ORIGINAL

RECEIVED
OFFICE OF
GENERAL

Bajo este principio los Estados Parte les está restringida la suspensión de derechos humanos intangibles o inalienables, (artículo 4.2), pues revisten carácter de normas del *ius cogens*, pues se trata de normas imperativas de Derecho Internacional que no admiten acuerdo en contrario (artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados)

En el presente caso se han vulnerado de forma sistemática derechos de carácter imperativo en el que prevalece el principio de no suspensión bajo ninguna circunstancia que pudiera alegar el Estado Mexicano. Ello es así, durante las situaciones excepcionales, los derechos humanos fundamentales de toda persona no son materia de suspensión.

Por tanto, las actuaciones y omisiones que se han realizado en el presente caso son ilícitas (que no están permitidas ni siquiera en conflictos armados, Convenios de Ginebra), actos que se han ejecutado con la intención de destruir, total o parcialmente la integridad física, psíquica y moral de los quejosos. Aunado a la persecución objetiva por un grupo de poder público y privado que incluye figuras políticas que han hecho del presente caso una espiral de impunidad derivando en denegación de justicia.

Por lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a sus Estados Partes la de respetar y garantizar la totalidad de los derechos y garantías en él reconocidos, siendo una protección internacional. Asimismo, los artículos 40 al 43 de éste Pacto prevé los mecanismos de queja entre Estados o conforme al Protocolo Facultativo, toda persona que alegue una violación de los derechos que protege el Pacto Internacional podrá someter a la consideración del Comité de Derechos Humanos una comunicación escrita. En el cumplimiento de las garantías formales y materiales, exigidas por el artículo 4 del Pacto Internacional.

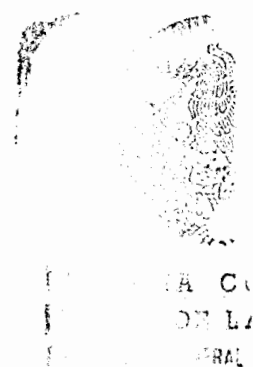
En este entendido, no existe justificación alguna para la suspensión de los derechos no derogables, amparados en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego el presente caso es una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. La inderogabilidad de derechos humanos fundamentales, aun durante situaciones de excepción de hecho, pueden constituir crimen de genocidio como el caso acontece.

Lo que representa un cuadro grave, persistente y manifiesto de violaciones a los derechos humanos. en el que se ha violentado, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un ejemplo son los múltiples juicios de amparo indirecto interpuestos por la parte quejosa: 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018 y 909/2018, más, son hechos notorios del Estado de excepción, en la que la parte quejosa solicita el respeto y vigencia real de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación; que conlleva reparación integral y sanción a los perpetradores de las graves violaciones flagrante y sistemática de los derechos humanos que acontecen en el presente caso.

Un ejemplo que clarifica la situación de esta inderogabilidad de derechos fundamentales es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

“...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad

SIN TEXTO



absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 27 párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia en Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."³⁰

Asimismo, menciona:

"Estos derechos inderogables -y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"³¹

Cita de párrafos anteriores, que dan luz al presente caso:

En el caso concreto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos mínimos que por su misma naturaleza deben reconocerse y garantizarse, en cualquier situación y en todo momento. Derechos que existen con independencia de las obligaciones convencionales del ejecutivo, se imponen imperativamente *erga omnes*, a la Comunidad Internacional.

Ahora bien, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 27, prevé que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, podrá adoptar disposiciones limitadas de suspensión de determinados derechos

Más, igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza la suspensión de derechos inderogables de la persona humana, entre las que se cuentan las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos (artículo 27.2 *in fine*).

La Garantías de forma prevista en el artículo 27.3 del Pacto de San José de Costa Rica, expresamente obliga al Estado Parte el principio de notificación el uso del derecho de suspensión en el que deberá informar inmediatamente a los demás Estados Parte de la Convención, por Conducto del Secretario de Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Las garantías de fondo previstas en el artículo 27.1 de la Convención, en cuanto a las situaciones que pueden ameritar la adopción de un Estado de emergencia o

³⁰ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

³¹ Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.



CORTE
LA NAC
DE AGU

excepción son la "guerra", "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado"

A este tenor, cabe citar a Harry E. Groves:

"...la importante distinción entre emergencias que no alcanzan a llegar a la guerra no puede ser desestimada. En el primer caso, las condiciones externas imponen cambios rápidos y con frecuencia totales, en la sociedad y en las instituciones. En el último caso, el tiempo está fundamentalmente del lado de la forma existente de gobierno; y ese gobierno, si es democrático, debería operar dentro del marco democrático prevaleciente por la razón, entre otras, de que el sacrificio de las garantías constitucionales es un precio muy alto a pagar por la supuesta seguridad que supone comprar³²

Asimismo, las causales de "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su estudio al Anteproyecto de Convención Americana:

"...esta expresión cubre exclusivamente las siguientes situaciones: un peligro real e inminente para la existencia del país como nación; para la sobrevivencia del Estado como entidad política soberana e independiente; para la integridad del territorio; para el respeto por la constitución política vigente; para el ejercicio de poderes legítimos por las autoridades constitucionales. También incluye la situación de peligro serio e inminente de alteración profunda de la paz social o del orden público de tal carácter que ponga en peligro la seguridad interna del Estado."

El análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte ". Aun entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello " en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación ". Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar " discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social ". Párrafo 19³³

Luego, el estado de excepción solo es autorizado y permisible en ciertos derechos que no son derogables, ante situaciones excepcionales que se aplica en caso de guerra, de peligro público que amenace la independencia o seguridad del Estado. Las medidas que se adopten para ser lícitas, no deben violar obligaciones internacionales, ni entrañar discriminación alguna, no como acontece, que son "medidas" que conllevan exterminio en contra de la parte quejosa.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos distingue tres tipos de derechos humanos:

- i. Derechos que pueden ser objeto de limitaciones o restricciones, siempre y cuando se cumplan condiciones que exige la propia Convención

³² Harry E. Groves, "Emergency Powers", Journal of the International Commission of Jurist. Vol. III. N. 2. P.2

³³ La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87

7

TIC

- ii. Derechos que pueden ser suspendidos en la medida que se dé el cumplimiento a los requisitos de forma y de fondo que exige el numeral 27 de la Convención
- iii. Derechos inderogables que de ninguna manera pueden ser objeto de suspensión (artículo 27.2)

Por otra parte, la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, que no son objeto de suspensión, enumerados en el artículo 15 son:

- i. Derecho a la vida
- ii. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratamientos inhumanos o degradantes
- iii. Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre
- iv. Principio de irretroactividad de la ley y de la pena más favorable.

La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87 del treinta de enero de mil novecientos ochenta y siete, menciona: "que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición":

El artículo 27 contiene determinadas locuciones que merecen ser destacadas a los fines de la presente consulta. Así, el título es "Suspensión de Garantías"; el párrafo primero habla de "suspend(er) las obligaciones contraídas "; el párrafo segundo de " suspensión de los derechos "; y el párrafo tercero de " derecho de suspensión ". Cuando la palabra "garantías" se utiliza en el párrafo segundo, es precisamente para prohibir la suspensión de las " garantías judiciales indispensables ". Del análisis de los términos de la Convención en el contexto de éstos, resulta que no se trata de una " suspensión de garantías " en sentido absoluto, ni de la " suspensión de los derechos " ya que siendo éstos consustanciales con la persona lo único que podría suspenderse o impedirse sería su pleno y efectivo ejercicio. La Corte estima útil tener presente esas diferencias terminológicas a fin de esclarecer los fundamentos conceptuales sobre los cuales responde la presente consulta, sin perjuicio de las cuales la Corte utilizará la expresión empleada por la Convención de " suspensión de garantías ".
Párrafo 18

Resulta claro que ningún derecho reconocido por la Convención puede ser suspendido a menos que se cumplan las condiciones estrictas señaladas en el artículo 27.1. Además, aun cuando estas condiciones sean satisfechas, el artículo 27.2 dispone que cierta categoría de derechos no se puede suspender en ningún caso. Por consiguiente, lejos de adoptar un criterio favorable a la suspensión de los derechos, la Convención establece el principio contrario, es decir, que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de algunos, en tanto que otros nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia. Párrafo 21

El artículo 27.2 dispone, como se ha dicho, límites al poder del Estado Parte para suspender derechos y libertades, al establecer que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia y al incluir " las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos ". Algunos de estos derechos se refieren



ON
FEB
1964

a la integridad de la persona, como son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3); el derecho a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art. 5); la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 6) y el principio de legalidad y de retroactividad (art. 9). Está, además, prohibida la suspensión de la libertad de conciencia y de religión (art. 12); de la protección a la familia (art. 17); del derecho al nombre (art. 18); de los derechos del niño (art. 19); del derecho a la nacionalidad (art. 20) y de los derechos políticos (art. 23).
Párrafo 23

La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32). Párrafo 24

Ahora bien, el **principio de temporalidad**, previsto en el artículo 27.1, menciona que las suspensiones son válidas "por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación," por tanto, en el presente caso, es la suspensión del Estado de Derecho que **se ha prolongado ad infinitum**, por un tiempo de seis años, tres meses, en violación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El principio de proporcionalidad, regulado en el artículo 27.1 de la Convención Americana, establece que las disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas, deben ser sólo en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Por tanto, es ilegal todos aquellos actos que representan una respuesta excesiva por parte del gobierno, **el presente caso es un ejemplo de ello**, en el que se ha suspendido derechos inderogables por un tiempo *ad infinitum* injustificadamente, que de forma objetiva, en absurdo jurídico, el Estado de Derecho ha desaparecido, para dar paso a la arbitrariedad.

Por tanto, la suspensión de un derecho si y solo si es justificable en ausencia de otra alternativa para resolver una emergencia que ponga en peligro al Estado de Derecho, **no para derogarlo a favor de la impunidad**, de ahí que estas medidas no pueden tomarse en abstracto, debe ser un hecho real que está viviendo un Estado Parte en un momento concreto; el Estado parte debe demostrar que las medidas ordinarias no son suficientes para hacer frente a la situación.



SUPREMA (
 No. DE 1
 SUPREMA GENERAL

Aunado, a que el principio de no discriminación (artículo 27.1), dispone que las medidas de excepción o de emergencia no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

En el presente caso la restricción de derechos inderogables de la persona humana entraña discriminación contrayéndose a la parte quejosa.

El estado formal de excepción ilegítimo de derechos inderogables (**vacío jurídico**), lesiona ostensiblemente la observancia de los derechos humanos más fundamentales creando un fenómeno de inseguridad y temor que ha lesionado el proyecto de vida, mismo que es consustancial al derecho a la vida. Aplicando penas de carácter indefinido, sin proporcionar el Estado, las razones jurídicas que justifiquen este **vacío jurídico**, en el que a los quejosos les quepa otro recurso que más que la **solicitud de revisión oficiosa de decreto de estado de excepción de derechos inderogables.**

La violación a los derechos no derogables, extremo respecto del cual los estándares son claros y absolutos, la denegación de justicia deriva de la fuerte presencia de consideraciones a figuras políticas que han hecho del caso un enorme vacío jurídico.

El Estado mexicano no ha respondido a la altura de las responsabilidades que la dignidad y el respeto a los derechos humanos imponen.

Los extremos para declarar una emergencia de tal gravedad que amenace la vida de la nación, están muy lejos del presente caso

Las medidas de emergencia ahora formales adoptadas en el presente caso bajo la medida de las exigencias, vulnera el principio de estricta necesidad y de proporcionalidad

La investigación de los hechos (fact-finding) en el presente caso se observa en los innumerables juicios de amparo y sus anexos, que son hechos notorios de la suspensión del Estado de Derecho (vacío jurídico) que acontece en el presente caso.

La ilegalidad de la suspensión del Estado de Derecho desaparece todo ordenamiento jurídico. Lo que no resulta lícito ni aceptable que autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, los límites legales a la actuación del poder público en el caso concreto son inexistentes, en el que el Estado está investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada por el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos, la negación a la aplicabilidad de éste en el presente caso. Conlleva una violación al principio de legalidad, por consiguiente, al Estado Constitucional de Derecho Democrático y la vigencia de los derechos más fundamentales.

Las garantías de forma y de fondo reguladas en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos humanos en relación al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza un régimen de excepción de ciertos derechos, en ambivalencia jurídica, **encuentra oposición por estos Instrumentos con el exclusivo fin de la defensa del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos más fundamentales.**

Como bien señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la suspensión de garantías, no significa, "...que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación



CORTE D
A NACIO
E DE ACUER

del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables”

Asimismo, la Corte sostuvo que en los términos de la Convención en el contexto de éstos, la suspensión de garantías, no se trata de una suspensión en sentido absoluto, ni de la suspensión de derechos ya que siendo éstos circunstanciales con la persona lo único que podría suspenderse o impedirse de manera formal sería su plenos y efectivo ejercicio. OC-8/87, párrafo 18

El debido proceso legal en el acto formal de estado de excepción:

La vulneración al debido proceso legal, en violación al artículo 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8.1³⁴ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La Corte ha señalado, “que el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención.”³⁵

Por lo tanto, el artículo 8 de la Convención, reconoce el llamado “debido proceso legal”, mismo que es aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, éste no puede suspenderse aún bajo situaciones de excepción:

En esta guisa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que **“En ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene derecho merece protección”**³⁶

Asimismo, la vulneración de los artículos 14º, 16º y 17º de la Constitución Federal, en los preceptos constitucionales en cita se reconocen las garantías de debido proceso legal, seguridad jurídica, igualdad y audiencia, lo que se traduce e implica que toda norma adjetiva debe ser acorde y congruente con tales garantías en relación con los hechos, por lo que en consecuencia:

La garantía de audiencia y legalidad se refiere al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados, un acto que conlleve un menoscabo en la esfera jurídica del

³⁴ El artículo 8 de la Convención en su párrafo 1 señala que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

³⁵ Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 27, *in fine*

³⁶ Tesis: 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), Décima Época, Primera Sala, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, noviembre de 2014, Página: 719, Registro: 2007923



SUPREMO
CANCIA
CANCIA

particular **o un impedimento para el ejercicio de algún derecho**. Asimismo, el cuarto párrafo mandata que la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Dicha garantía está regulada en el artículo 14 de la Constitución Federal, el cual, señala:

“Artículo 14. ...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Sirve de apoyo las tesis siguientes:

Tesis aislada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 871, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: **“SENTENCIA DEFINITIVA, EN JUICIO CIVIL”**:

“Deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley; y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales de derecho.”

Con apoyo en la jurisprudencia anterior, el acto privativo de estado de excepción de Derecho y la vulneración a derechos no derogables, es ilegal, esto es, la parte quejosa ha solicitado ante varios órganos del Estado, (en el transcurso de este periodo de seis, tres meses), incluyendo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los hechos (fact-finding), la cesación de la violación y una reparación adecuada de la lesión grave a la integridad física, mental y moral, en que las resoluciones en el medio de control de la constitucionalidad son hechos notorios de esta privación de derechos, al resolver contrario a la letra o la interpretación jurídica de la ley en relación con los hechos, lo que clarifica el estado del vacío jurídico:

Así tenemos, que La garantía de audiencia se compone de cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, que son:

- a) Un juicio previo al acto privativo, en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional.
- b) Que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos.
- c) Que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y
- d) Que la sentencia respectiva se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho.

En lo tocante, la primera, segunda tercera y cuarta garantía, referida a las formalidades esenciales del procedimiento, se integra por los derechos de defensa, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento en éste pueda ofrecer y se reciban las pruebas públicas -hechos notorios- y lo más importante sean tomadas en cuenta, que la sentencia respectiva se dicte conforme a las leyes existentes que dirima las cuestiones debatidas:

01/21/18



Esto es, los juicios de amparo indirecto: son probanzas (expedientes) del estado formal de excepción de derechos fundamentales no derogables, figura que ha sido empleada en asociación y complicidad con la intención de perpetrar Genocidio, total. Que clarifica el estado de excepción de Derecho y las violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos inderogables de la parte quejosa, esto es, se vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, los razonamientos, fundamentos y falta de estos han sido ilegales, denegando el acceso a la justicia, razonamientos jurídicos contrarios al bien vulnerado, que no dirime las cuestiones debatidas, con nula oportunidad de alegar, sin la oportunidad de ofrecer pruebas en que se finque la defensa, por lo que la parte quejosa está en total estado de indefensión:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pronunciado que los requisitos esenciales del debido proceso legal que resultan necesarios para garantizar la garantía de audiencia se traducen en los siguientes:

- 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
- 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
- 3) La oportunidad de alegar; y
- 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas”..:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. **De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado**”.³⁷. Lo resaltado es propio

En el presente caso se ha vulnerado el principio de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, en que el estado de excepción de Derecho, deriva en “vacío jurídico”, contrario a razones constitucionales, por consiguiente, a un Estado Constitucional de Derecho:

- a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima;
- b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido;
- c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y
- d) estar justificada en razones constitucionales:

“GARANTÍAS INDIVIDUALES, EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y

³⁷Tesis: P./J. 47/95, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, diciembre de 1995, Página: 133, registro: 200234.

SM TEXT

STIC

PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados".³⁸

Por consiguiente, el medio de control de la constitucionalidad, no puede interpretarse como un simple juicio en el que se debe respetar el debido proceso y/o leyes secundarias. Es la solicitud de defensa a las autoridades jurisdiccionales como garantes del máximo ordenamiento en el Estado Mexicano. En esta medida, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene obligaciones y facultades constitucionales exigibles, plasmadas en los artículos 29, 87, 89, fracción X, del máximo ordenamiento constitucional.

Si bien es cierto, **existía** en el caso concreto un estado de excepción de *facto*, **esto ya no es así**, el Presidente de los Estados Unidos ha formalizado en el medio de control de la constitucionalidad- juicio de amparo con número de expediente 909/2018-: Estado de excepción de derechos fundamentales no derogables.

Se ha ~~int~~terrompido el proceso constitucional democrático en supresión y/o violación de derechos fundamentales no derogables.

En esta guisa, el estado de excepción que acontece fue de su conocimiento formalmente, con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, tal como consta en el expediente del juicio de amparo 74/2018, turnándole al Secretario de Gobernación el caso en particular.

Más el Secretario de Gobernación, reafirmó la continuidad del estado de excepción, turnándole el caso al torturador que incrimina a la quejosa (juicio de amparo 627/2017): Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Hecho notorio en autos del juicio de amparo 260/2018.

De manera similar el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, convalidó y formalizó éste estado de excepción de derechos fundamentales no derogables. Hecho notorio en el expediente del juicio de amparo 909/2018.

Ahora bien, tal como se desprende de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas reconocidos por el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Entonces, en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico, tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República.

³⁸ Tesis: P./J. 130/2007, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, diciembre de 2007, página: 8, registro: 170740.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Formalizando que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.

Pues los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Presidente de la República que estén de acuerdo con la Constitución, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Luego, si el Presidente de la República formaliza el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso, este es ilegal, a pesar de cualquier Ley, Reglamento o Constitución Local que se pueda invocar:

En el ordenamiento interno el artículo 29 de la Constitución regula la Suspensión de Garantías, confiriéndole obligaciones y facultades solamente al "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona."

"En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."

"La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación."

En esta guisa, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos **que sólo pueden ser trastocados por actos ejecutivos formales**, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Más, el estado de excepción de derechos fundamentales inderogables es severamente inaceptable a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos fundamentales que tienen calidad de normas de derecho imperativo.

Al respecto, el artículo 89 fracción X de la Constitución, se desprende que son facultades y obligaciones del Presidente de la República **denunciar**, suspender, **retirar reservas**, en el que observará en lo concerniente la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

En consecuencia, el Presidente de los Estados Unidos al contrario de actuar en plena legalidad, denunciando y retirando las reservas del estado de suspensión de derechos fundamentales no derogables, lo formaliza, acto ejecutivo, luego entonces, emite decreto de estado de excepción, constituyendo lo mandado en

el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

En esta medida el artículo 89 fracción X de la Carta Magna en relación al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados, la necesidad del respeto, la protección y promoción a los derechos humanos inderogables, derechos que existen con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado mexicano que imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional, los Estados Partes “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”³⁹, hecho que se clarifica en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

“Estos derechos inderogables –y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes –, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran”⁴⁰

Asimismo, el artículo 89 fracción X de la constitución, menciona que el **Presidente de la Republica observará los** principios normativos de denunciar y retirar reservas, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”⁴¹

Luego, **es procedente la solicitud de revisión oficiosa del decreto ejecutivo de estado de excepción en el caso concreto**, pues de conformidad con el ordenamiento interno y convencional, le imponen imperativamente al Máximo

³⁹ Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.

Artículo 27 El derecho Interno y la observancia de los Tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46

⁴⁰ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981, nota 76 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁴¹ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial: Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

Tribunal Constitucional del país, por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, **obligaciones, siendo parte de sus funciones, ser garantes que el Estado Mexicano respete, proteja y promueva los derechos humanos de las personas**, esto con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta que las probanzas del estado de excepción son los juicios de amparo: 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018. Hechos notorios de un Estado formal de excepción de Derecho, y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Pues, la aplicación ilegal de los estados de excepción trae aparejadas graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, en el caso concreto la excepción de un Estado Constitucional, ha sido la "normalidad":

La suspensión de un Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, ilegalmente pretende conformar un "engaño", en el medio de control de la constitucionalidad, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las "garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos", esto con fundamento en el artículo 8.1 y 25 de la misma Convención.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."⁴²

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión⁴³

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que en el presente caso, por un periodo de dos años, cuatro meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁴² Párrafo 25, página 9.

⁴³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

Luego, en el caso concreto se vulnera los artículos 1.1, 8.1, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos; los artículos 1, 14, 16, 17, 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado tiene límites a su actuar pues La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba en su artículo 4 que:

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

Esto es, "el sentido de la palabra **leyes** dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal."

En este contexto, sigue diciendo la Corte que, "no es posible interpretar la expresión **leyes**, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual " los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos ".⁴⁴

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la obligación que está a cargo de todo Estado Parte en la Convención de " respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción " (art. 1.1). De esa obligación general se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el artículo 25.1, " a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención ".⁴⁵

Pues la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención, lo establece como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales, que igualmente, en términos amplios, menciona la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas

⁴⁴ Opinión Consultiva OC-6/86, Corte interamericana de Derechos Humanos, "La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", párrafo 26

⁴⁵ Opinión Consultiva OC-9/87, "Garantías Judiciales en Estados de emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos) párrafo 22.

sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde concluye, **a fortiori**, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia⁴⁶

La invocación de los preceptos Constitucionales y los tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos en el presente caso, han sido insuficientes para evitar que prosigan las graves violaciones a derechos humanos, luego el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables ha sido formalizado *ad infinitum*, estas medidas en el presente caso han sido exitosas, el estado de represión es abrumador, la parte quejosa ha sido torturada, intimidada, coaccionada, incriminada, amenazada con pérdida de la vida y de la libertad, vejada, humillada, en innumerables ocasiones con aquiescencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, de la Contraloría General de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal de Defensoría Pública (Licenciada Yasmín Rosales Muñoz...) que en asociación y complicidad con figuras políticas,⁴⁷ y ahora con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que ha formalizado: la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos fundamentales no derogables.

De manera lógica, esta perennización de seis años y tres meses de estado de excepción, de forma alguna, ha sido local, las Instituciones y las autoridades federales han coadyuvado (en asociación y complicidad) a ésta excepción con aquiescencia hacia las autoridades locales y/o federales que se han conducido con total ilegalidad (destruyendo el Estado de Derecho) en espiral de impunidad, es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Federal de Electricidad⁴⁸, el Instituto Federal de Defensoría Pública...

⁴⁶ Párrafo 23, *idem*

⁴⁷ La ex Delegada Leticia Quezada Contreras en la Magdalena Contreras y el también ex Delegado José Fernando Mercado Guaida, que tiene estrecha amistad (nexo causal) con la **Concejal Diana Álvaro Gallegos**, asimismo, del titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de abogados particulares con nexos políticos tales como José Máximo Pérez Romero, Leopoldo Guijosa Salas, Javier Guijosa Rubio (familiares estos dos últimos abogados de ex delegado periodo 2006-2009 en Magdalena Contreras Héctor Guijosa Mora.

Asimismo, cabe hacer mención que según información de Acceso a la información Pública con No. de folio 0109000020318, con fecha 29 de enero de 2018, el Licenciado Javier Guijosa Rubio con cédula profesional 7623998, expedida por la Secretaría de Educación Pública en el año de 2012, es Policía en activo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Información que viene a colación, misma que está relacionada con el juicio de amparo 627/201, Anexo I, fojas 205-245, hechos que derivaron en delitos de lesa humanidad: tortura, persecución objetiva, etc.

⁴⁸ **En escrito de fecha 13 de marzo de dos mil dieciocho, la parte quejosa declara que no sólo las autoridades pretenden que se derrumbe la vivienda de la parte quejosa, los habitantes del multicitado Andador Tabaqueros, específicamente el empleado federal de la Comisión Federal de Electricidad Diego Arturo Lara Nava (juicio de amparo 288/2017 y 651/2017, 627/2017, 260/2018), con connivencia de esta Empresa del Estado mexicano pretenden privarnos de energía de luz.**

Ahora bien, en referencia al principio de temporalidad, previsto en el artículo 27.1, menciona que las suspensiones son válidas "por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación," por tanto, en el presente caso, es la suspensión del Estado Constitucional de Derecho que se ha prolongado *ad infinitum*, por un tiempo de seis años, con tres meses, en violación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4.2 y 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 29, párrafo segundo y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, es necesario mencionar probanzas idóneas de este "pacto criminoso", con la finalidad de reseñar a groso modo la supresión/violaciones graves a derechos humanos, acaecidos en el caso concreto, en la que acontecido hechos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, no se han controlado por la actitud del Gobierno de la Ciudad de México, y ahora, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales inderogables de la parte quejosa. **Las propias autoridades que gobiernan, son la que han actualizado de forma directa e indirecta estas graves violaciones a derechos humanos que constituyen en sí y por sí mismos delito de genocidio.**

La afirmación -hecha a Carolina González Nava- del agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince en las instalaciones pertenecientes a la Representación Social, que los habitantes del Andador Tabaqueros, *tenían el conecte en la Delegación, y que esto lo hacía primero, porque este caso lo había encargado el Procurador, después por su trabajo y por último porque nos conocía*⁴⁹, denuncia dirigida al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México con fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince. (fojas 758 a 761 del Anexo I del juicio de amparo 288/2017, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.)

Siguiendo en este orden de ideas, con fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, en hechos que tienen conexión con el juicio de amparo 627/2017, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, personal adscrito del Órgano Político en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México⁵⁰, se presentó en la vivienda de la

⁴⁹ Negándose llanamente a llevar a cabo diligencias.

⁵⁰ En días posteriores (sábado veinticinco de agosto de dos mil dieciocho) a este escrito los habitantes del Andador Tabaqueros, golpearon los muros y estructura de la vivienda de la parte quejosa, subiendo a las lozas para gravar con una cámara al interior de la vivienda de la parte quejosa, al reportar estos hechos al número telefónico 911, el operador contestó que acudiera al Ministerio Público, cortando la llamada, hechos que se han repetido una y otra vez, otro ejemplo de ello, las autoridades pertenecientes a seguridad pública (policías auxiliares abordó de patrullas) y al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras en conjunto con particulares, María Dolores Espinoza Bassoco (habitante de Andador Tabaqueros), acudieron al domicilio de la parte quejosa golpeando sus muros con mazos (dañándolos, a su vez, rompiendo tubería de drenaje), "mencionado que en cuanto salgan los detienen", observando la quejosa Carolina González Nava, que estos servidores públicos (del Órgano Político) y particulares con herramientas (mazos) llegaron al lugar de los hechos a bordo de un automotor con número de unidad ECO 366, hechos que se denunciaron a seguridad pública con número de folio 518962. Asimismo, los anexos del juicio de amparo 651/2017, demuestran que la parte quejosa denunció ante el Gobierno de la Ciudad de México, detonaciones de armas de fuego provenientes del Andador Tabaqueros. Asimismo, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hechos que sólo son un ejemplo, mas, demuestra el estado de excepción de Derecho en el presente caso.

STY 10110

parte quejosa para amenazarnos con la finalidad de que acudiéramos a las instalaciones de éste Órgano Político, en la que según terceras personas afirmaron que seríamos detenidos por Policía de Investigación, hechos que se corroboran en el juicio de amparo anteriormente citado, pues los días 9, 10 y 11 de diciembre acudieron a tratar de detenernos al “pueblo⁵¹” arbitrariamente, por lo que tuvimos que resguardarnos como en múltiples ocasiones han tratado de detenernos en las inmediaciones de nuestro domicilio⁵² (hecho notorio es el juicio de amparo 349/2017⁵³, 651/2017, 74/2018.)

En contexto con el párrafo anterior, el juicio de nulidad V-76315/2015 sustanciado en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, constante de 409 (cuatrocientas nueve) fojas, es un hecho notorio de Estado de suspensión de derecho y de suspensión de derechos fundamentales inderogables, pues a éste juicio la parte quejosa tuvo acceso a las actuaciones⁵⁴ por medio de solicitud de acceso a la información pública, en la que se proporcionó copia simple con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, en consecuencia la parte quejosa intento tener acceso a la justicia mediante juicio de amparo indirecto 74/2018 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, más, se nos denegó este acceso, está probanza es certeza plena del Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

En este juicio altamente planificado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, juicio de nulidad⁵⁵ de recuperación del bien del dominio público Andador Tabaqueros en el que se tachó de ilegal el procedimiento administrativo PARA/LMS/20GJG/010/2015 (hojas 259 a 264 de este juicio de nulidad V-76315/2015) que ilegalmente nunca pretendió la autoridad demandada⁵⁶ llevar a cabo, pero sirvió para tener los motivos suficientes para planificar castigos que ni siquiera en conflictos armados está permitido (Convenios de Ginebra)⁵⁷, hechos notorios del juicio de amparo indirecto 627/2017.

JPRESIDENTE, o bien, “pueblo”, tal como es denominado por el Agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, para dirigirse a la suscrita de forma peyorativa, al relatarle de viva voz una tentativa de homicidio que el señor Alfredo Nava Gallegos (habitante del Andador Tabaqueros), planeó y ejecutó en contra de uno de los quejosos, tratándolo de arrollar con el vehículo que conducía), burlándose, “en el pueblo no pasa nada”.

⁵² En días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (María Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habita la parte quejosa, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.

⁵³ substanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito

⁵⁵ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la institución de la “cosa juzgada fraudulenta” utilizada en el caso *Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala*⁵⁵ y en el caso *Gutiérrez Soler Vs Colombia*. En este último caso, el juez Sergio García Ramírez, en voto razonado, refiere a **sentencias que fueron dictadas de manera engañosa y que en realidad no pretenden hacer justicia sino simularla.**

⁵⁶ Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, y Director General Jurídico y de Gobierno en la Magdalena Contreras.

⁵⁷ Castigos altamente planificados, tortura, denigración, humillación, incriminación, amenazas que en cualquier momento podemos perder la vida o la libertad, ejercieron acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos en el que con toda impunidad la Representación Social le mencionaba al Juez de Control que vinculara a proceso por un daño a ésta vía pública en comento, presentándola en juicio como propiedad privada⁵⁷, diciéndole que presentaba daños por filtración de agua, por un monto de seis mil ocho cientos pesos, entre otras violaciones procesales graves, pretendían que el Juez le arrebatara la libertad a los quejosos (pues han amenazado que al entrar a nuestro domicilio van a encontrar (fabricar) delitos graves), tal como la suscrita fue torturada en interrogatorio que le denominaron “preguntas especiales de esta Representación Social⁵⁷”, con fecha

SIN TEXTO

BUREAU
OF THE
SECRETARY OF THE ARMY

Es propicio en este punto, traer a colación el juicio de amparo indirecto 74/2018, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, uno de los actos reclamados fue el juicio de nulidad en comento, del que se tuvo acceso a los autos por medio de solicitud de información pública con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, más el Juez a quo, resolvió en conjunto con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 28/2018), no tener por presentada la solicitud de demanda de amparo a pesar de que existía como uno de los actos reclamados la omisión de dar contestación al derecho de petición⁵⁸.

Luego, poco a poco, tal como acontece en la tortura de la "gota de agua", hasta que sobreviene la muerte de la víctima, es como el Estado Mexicano ha despojado a la parte quejosa de derechos fundamentales inderogables, que se cuenta entre uno de estos derechos al medio de control de la constitucionalidad.

Las hojas enumeradas como 97 a 373 del juicio de nulidad V-76315/2015, fue entregado, previo pago de copias simples a la suscrita por la Oficina de Información pública del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, conforman el expediente administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015, en la que se emitió Resolución Administrativa y Orden de Ejecución Para la Recuperación de Vía Pública del Distrito Federal (Andador Tabaqueros), prueba idónea de la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables.

Es de resaltar las hojas con número 103 a 115; 121 a 122; 137 a 138; 160 a 165 169 a 175 del juicio de nulidad en comento, escritos de denuncia dirigidos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el que en conjunto con los autos que conforman, Anexos I y V de los juicios de amparo indirecto 288/2017 y 651/2017⁵⁹, son hechos notorios de la responsabilidad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el presente caso, luego causa un gravoso agravio que el Presidente de la Republica, ejecute el acto formal de interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables, pues la actitud del Estado Mexicano dista *ad infinitum* a un Estado Constitucional de Derecho, pues ha planificado con un rotundo éxito graves violaciones a derechos humanos que conllevan exterminio de la parte quejosa, hechos notorios de la ilegalidad en su más puro vertiente son los innumerables juicios de amparo solicitados por la parte quejosa. El Ejecutivo decreta que la parte quejosa acuda de nueva vez a las Instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, aun cuando éste gobierno se niegan rotundamente a observar un Estado Constitucional de Derecho, daría como resultado, *ad infinitum*, bajo la figura procesal de impunidad: aplicación de tortura, privación de la vida o de la libertad, asimismo, aun cuando existe so pena al acudir a estas Instituciones, entre las que se cuentan a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, es

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis en la que me interrogaban "que personas más habitan con usted el inmueble materia de los hechos...", a sabiendas que en todo momnto los habitantes del Andador Tabaqueros nos gravan con cámaras de video al interior del domicilio de la parte quejosa,⁵⁷, diciéndome que me declarara culpable, que pagara o declaraba culpable a la quejosa Martha Patricia González Nava, iban a entrar a nuestro domicilio....(juicio de amparo 627/2017)

⁵⁸ Los actos reclamados conllevaban la causa y efecto del estado de excepción de Derecho y la suspensión de derechos fundamentales inderogables, no obstante que se señaló a las autoridades que tienen responsabilidad ineludible en el presente caso, autoridades responsables locales y federales, siendo una de ellas el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de los actos reclamados En derecho de petición se le solicitó al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad responsable en el juicio de amparo 627/2017), que diera parte al Presidente de la República, la persecución política, tortura, actos preconcebidos, que buscan el exterminio de la parte quejosa, hechos que constituyen crimen de genocidio.

⁵⁹ el expediente de la averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01

colaborar la propia víctima, a que en esta ocasión se de una desaparición forzada, lo cual de ninguna manera pasará, si el Presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene ese decreto, es necesario que el presente caso sea expuesto a nivel Internacional, **de conformidad con el artículo 89 fracción X de la Constitución, bajo el Principio de notificación, inmerso en el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se expongan los hechos del presente caso, tomando en cuenta que el Estado de excepción aplicado a la parte quejosa, no es justificado**, obedece a razones espúreas, con la finalidad de **exterminio, total**, que hace del presente caso un precedente que debe ser analizado por el Máximo Tribunal Constitucional del país, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”⁶⁰

El Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Resaltando que los derechos fundamentales no forman parte de la suspensión o restricción, más existe plena inseguridad jurídica (“*habeas corpus*”⁶¹).

Las amenazas de tortura, incriminación y por consiguiente pérdida de la libertad o de la vida son el pan de cada día, sin derechos la parte quejosa se atiene a la nada jurídica.

La gravedad de la supresión/violación sistemática a los derechos humanos consiste en los acuerdos entre órganos de gobierno, mediante los cuales comprometen el ejercicio de sus obligaciones y facultades jurídicas para afectar a la parte quejosa. Hechos notorios en los juicios de amparo indirecto 260/2018 y 909/2018.

Las probanzas públicas, demuestran plenamente que el origen de suspensión de derechos fundamentales inderogables, derivaron del escrito firmado por Carolina González Nava, dirigido al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa en fecha, seis de mayo de dos mil catorce, con número de folio 023636. (juicios de amparo 288/2017, 651/2017, 74/2018)

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el presente caso, ha ratificado la misma supresión/violación al derecho humano de acceso a la justicia, en que se ha formalizado el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, prueba de ello, como ahora

⁶⁰ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial, Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

⁶¹ En el sentido que el “*habeas corpus*” tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

acontece, es la denuncia de las graves violaciones a ésta Institución en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis; asimismo, existen múltiples denuncias de violaciones graves a derechos humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la que en comparecencia directa y vía telefónica, con Carolina González Nava, se le informó, que no pasaba nada, en insólita respuesta el Director de Quejas, se burla: *"sólo están enojados porque no les hacen caso"*.

Las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos no han sido controlados y encauzados por los órganos del Estado, a través de los procedimientos ordinarios establecidos en la Constitución para proteger los derechos fundamentales de la parte quejosa, hecho que prueba el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁶², clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho:**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien haciendo caso omiso de su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, ha violentado a la parte quejosa, pues su gobierno ha planificado graves agresiones sistemáticas en el presente caso, por un periodo de seis años, con tres meses.

El Tribunal Pleno en la solicitud de ejercicio de facultad de investigación 2/2006⁶³, fallada en sesión de dieciocho de abril de dos mil seis, que clarifica los hechos antes expuestos, en la que se adujo lo siguiente:

- 1) Que se trate de hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinados.
- 2) Que se trate de acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas no se logren controlar por la actitud de la propia autoridad.
- 3) Que las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, sean las que producen o propician actos violentos, pretendiendo obtener de ellos una respuesta disciplinada.

⁶² **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

⁶³ Interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado, en ejercicio de la facultad de investigación prevista, en el artículo 97 constitucional antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011

1

2

3

4

5

4) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encausar las relaciones pacíficas de la comunidad o que sean indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

5) Que se intenta lograr la impunidad de las autoridades a través de la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento que propicia la propia autoridad. Es preciso enfatizar que estos criterios son de orden estrictamente orientadores, pues se han venido definiendo casuísticamente con base en la problemática que ha atendido el tribunal y, como también puede apreciarse de lo descrito páginas atrás, los casos no han sido muchos en número, de manera que no podrían fungir como parangón abstracto y rígido para todo caso futuro.”

“Especificar cuándo se está ante una situación grave, al ser una cuestión de orden valorativa y sujeta a innumerables e indefinidas variables, no podría darse a priori o en abstracto, sino que habría de realizarse en función de los casos puestos a consideración del propio tribunal. Por ello la insistencia de que los criterios que en los últimos años ha sentado el Pleno de este tribunal son, más que hipótesis exactas a las que los casos futuros deban encuadrarse, referentes orientadores de lo que puede o ha sido considerado grave, en un momento histórico determinado. Junto a los supuestos de violaciones graves sobre los que las tesis de este tribunal bordan, mismas que fueron apuntadas en el capítulo considerativo anterior, cabría agregar o puntualizar otras hipótesis, también de orden referencial u orientador, como serían:

- 1) La violación perpetrada por la autoridad estatal a las garantías individuales de un grupo de individuos,
- 2) La violación a garantías individuales, sin atender al número de personas a las que se les profirió directamente tal violación, sino a la manera sistemática en que la violación se realizó, mediando la existencia de un plan o intención específica de las autoridades; y
- 3) Una violación a garantías individuales de una persona en particular, a través de una acción concertada de las autoridades estatales, encaminada a romper los principios del federalismo, división de poderes, o estructura democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional.
- 4) Hechos que, generalizados o no, por sí mismos impliquen una amenaza al orden social al estado de derecho, a la convivencia misma de la sociedad”

Por consiguiente, en el caso concreto, las supresión/violación de derecho humanos inderogables, en el contexto de una denuncia de fecha seis de mayo de dos mil catorce ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México⁶⁴, de obstrucción de acceso a la justicia, allanamiento y daños que presenta muros y cimentación de la vivienda que habitan los quejosos provocada por un otrora andador peatonal reconvertido ilegalmente a un paso vehicular (vía cerrada ilegalmente al libre paso) que no cumple con las mínimas normas de construcción para el uso que se le está dando.⁶⁵

⁶⁴ Hoja 103 del juicio de nulidad V-76315/2015 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Anexo V juicio de amparo 651/2017; Anexo I, foja 578 a 585 juicio de amparo 288/2017.

⁶⁵ Los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, sin garantías judiciales reconocidas como

Denuncia que con fecha seis de mayo de dos mil catorce la suscrita le dirigió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que fue la justificación perfecta para ejecutar de *facto* Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables por un periodo de seis años, con tres meses, que ahora el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formaliza estado de excepción, más pretende que sea *ad infinitum*, hasta que en seguimiento al delito de genocidio se acarree la destrucción, total de la parte quejosa, hechos que ni siquiera en conflictos armados está permitido.

El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (artículos 1 y 133 de la Constitución), no incluyen los efectos de solicitud de acceso a la justicia, en oposición con el poder del Estado arbitrario que en aquiescencia y connivencia con el poder político y particular en acciones incompatibles con la intención de someter a persona alguna a la acción de la justicia por delitos que pueden constituir crimen de genocidio, como circunstancias excepcionales que autorizan la puesta en vigor de medidas de "emergencia" en el presente caso.

En el presente caso en seguimiento a un plan intencional preconcebido, realizaron torturas, vejaciones, humillaciones públicas, amenazas, incriminaciones (fabricación de delitos y libre tipificación de delitos), la suspensión de derechos fundamentales inderogables no está sujeto a control legal alguno, más ha sido formalizo, mediante acto del ejecutivo- la indefensión es *ad infinitum*, en vulneración a los mínimos establecidos en la legislación interna, así como los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos suscritos por México.

En este contexto el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pretende que la parte quejosa acuda ante el perpetrador que ha actualizado supresión/violación a derechos humanos no derogables en el caso concreto.

Al encontrarnos en el presente caso en un Estado de suspensión de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, no importan las pruebas aportadas, las denuncias, o procesos iniciados, el derecho que no es materia de probanza, el acto formal del Presidente de la República son contestes al vacío jurídico⁶⁶.

indispensables no se han establecido, hasta el día de hoy las denuncias de tortura, tentativa de privación ilegal de la libertad, incriminación (denuncias de hechos falsos), ante el Gobierno de la Ciudad de México, ante el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras denuncias, tales como tentativa de homicidio, violación al derecho a una vivienda digna, atentado en contra de la integridad física y psíquica; en este punto, vale la pena traer a colación a los habitantes del Andador Tabaqueros⁶⁵, día con día ejecutan la misma conducta antijurídica⁶⁵ que los dictámenes en materia de Ingeniería y Arquitectura, elaborados por perito oficial, demuestran de forma científica, el modo, tiempo y lugar de los hechos delictuosos, juicios de amparo indirecto, hechos notorios en lo expedientes, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, en el que buscan que la vivienda de la parte quejosa se derrumbe, aun a pesar que éste Andador es una vía pública reconvertido ilegalmente de andador peatonal, a paso vehicular, vía que permanece cerrada por una puerta y una edificación que prohíben el libre paso, por **esta edificación ilegal el Gobierno de la Ciudad de México construyó delitos falsos a la parte quejosa, ante un Tribunal de Delitos officiosos**, siendo uno de los motivos para demostrar odio manifiesto e instaurar suspensión de derechos fundamentales inderogables, imponiendo castigos prohibidos, penas infamantes e inusitadas, violación flagrantes y sistemáticas a normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos; actos que busca por todos los medios el exterminio de la parte quejosa.

⁶⁶ Comparable a la tortura a la que fue sometida la suscrita por el agente del Ministerio Público y el defensor de oficio, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en interrogatorio, el defensor atacaba verbalmente diciendo "**el término fabricación de pruebas, ni siquiera lo he escuchado en Estados Unidos...**"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pueden actuar a petición de parte o de oficio, han tenido complicidad lo que configura complicidad en el genocidio: tortura, vejaciones, humillaciones, incriminación, violación al debido proceso, privación de la vida, ... violación a un Estado Constitucional, a pesar de haber constatado las vulneraciones anteriormente reseñadas, de las que han tenido constancia indirecta (por las denuncias y peticiones) y directa pues simplemente con tener conocimiento y certeza que el Estado Mexicano pretende y lleva a cabo todas las acciones conducentes para que se derrumbe la vivienda de la parte quejosa, con la consabida pérdida de vidas, lo que prueba que se busca el exterminio de la parte quejosa, afectando deliberadamente y de forma sistemática derechos fundamentales inderogables.

La parte quejosa se encuentra oprimida a la incertidumbre e inseguridad jurídica, así, esta solicitud de revisión oficiosa de estado de excepción es representativo del alivio para el reconocimiento del derecho vulnerado ilegalmente nulificado, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida, las violaciones procesales cubren con un manto de oscuridad al caso concreto, la nada jurídica se plasma de forma idónea en el acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables. Hecho notorio lo conforma el juicio de amparo 909/2018.

El alto grado de violencia y discriminación institucional y en la comunidad imperante hacia las mujeres por su condición de género, es en sí mismo denigrante, insultos, discriminación, tratos vejatorios, persecución política, hostigamientos, las graves situaciones sistemáticas de tortura, tentativa de homicidio, destrucción del proyecto de vida, intimidación, la existencia de señalamientos y acusaciones falsas, denegación en la procuración de justicia, con campañas de odio en la comunidad e institucional, violación constatada al derecho a la vida, la impunidad con la que se actúa en los hechos descritos, la incitación a la violencia se ejemplifica en el Estado Mexicano, obstáculos jurídicos, dilación administrativa en los juicios jurisdiccionales, los juicios de amparo son hechos notorios que el Estado no puede negar⁶⁷, son prueba a la ausencia de legalidad⁶⁸:

⁶⁷ Juicios de Amparo Indirecto 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 260/2018 substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito; 74/2018 substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de la misma Materia y Circuito

⁶⁸ Ello es así, los hostigamientos, atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, las amenazas, intimidación, los atentados contra la dignidad personal, discriminación, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, comenzaron con amenazas de intervención de figuras políticas de los habitantes del Andador Tabaqueros, hechos que en posterior fecha fueron incentivados y con aquiescencia del Gobierno de la Ciudad de México, hechos que tienen un pleno objetivo que por grado de planificación cometido a sangre fría, intencionalmente nos arrastró a grandes sufrimientos que vulneraron gravemente la integridad física, la salud mental y física en que la parte quejosa se ha visto superada, nuestra resistencia física y psicológica, fue quebrantada, los interrogatorios elaborados en las instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, son prueba de los castigos ejecutados por haber solicitado acceso a la justicia. Ahora incriminadas la parte quejosa se atiene a la arbitrariedad, sin seguridad jurídica en cualquier momento podemos perder la vida o la libertad, las amenazas son constantes y objetivas, tal como se puede probar, los hechos notorios contenidos en los anexos de los juicios de amparo citados en párrafos anteriores, no obstante es válido traer a colación el juicio de amparo 349/2017, sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en el que la parte quejosa y nuestra familia nos vimos en la necesidad de



SECRET
SECRET
SECRETARIA GENERAL

Supresión/violación sistemática de derechos humanos no derogables, específicamente el derecho a la libertad, a la propiedad y a la posesión, a la integridad y seguridad personal, a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica; Las violaciones acreditadas en este rubro comprenden atentados en contra de la integridad corporal y tortura.

La formalidad del estado de supresión de derechos fundamentales no derogables decretado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos viola en detrimento de la parte quejosa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, 17, párrafo segundo, tercero, octavo, 22, párrafo primero, 29, párrafo primero, segundo y tercero, 89, fracción X y 133:

Así tenemos que el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones *erga omnes*; luego actuar en contrario hace del presente caso una flagrante y sistemática violación al debido proceso con las debidas garantías.

Como se advierte, nuestra Constitución Federal contempla derechos humanos, que constituyen límites de actuación para las autoridades, el derecho a no ser afectado en sus personas, a fundamentar y motivar la causa, por la que busca que a la parte quejosa *ad infinitum* le sean aplicados "castigos prohibidos, que ni siquiera en conflictos armados están permitidos" hasta que sobrevenga el ~~terminio~~ de ésta, hechos que deben ser expuestos mediante la solicitud de revisión oficiosa de decreto de excepción o supresión de derechos fundamentales no derogables, el caso concreto justifica la causa del procedimiento; y, sobre todo, prohíbe expresamente que autoridad alguna actualice penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

También prohíbe el Estado de excepción de Derecho, y la suspensión de derechos inderogables, pues el artículo 29 sólo le da facultades al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para suspender derechos y garantías en un Estado de emergencia, sin que la restricción se contraiga a determinada persona, más no podrán restringirse derechos fundamentales inderogables, el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción de derechos debe estar fundada y motivada observando "en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación."

Pero, además de lo anterior, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha ratificado instrumentos internacionales que protegen derechos fundamentales, el derecho a la integridad personal que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, y establecen obligaciones específicas a los Estados Parte, en cuanto a un estado de excepción, que prohíbe la inderogabilidad a un recurso efectivo ante las autoridades jurisdiccionales, recurso, que es indispensable para hacer valer los derechos no susceptibles de derogación como son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas,

resguardarnos, pues policía de investigación acudió a intimidarnos sin saber a la fecha de qué delito se nos acusa, o bien de acudir en días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (María Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habita la suscrita y mi familia, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.

ORIGINALS

INTER
J. A. C.
B. J. C.

el derecho de acceso a la justicia, etcétera (derechos que revisten carácter de *ius cogens*), **luego, el acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, violenta normas del *ius cogen*.**

En efecto, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, México ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y seis, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y tres, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación Racial, el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, la Convención sobre los Derechos del Niño, veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", ratificó el veintidós de julio de mil novecientos cincuenta y dos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, citando algunos de éstos instrumentos:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que:

Artículo 2.3.a). "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;"

Artículo 4.1. "En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social."

Artículo 4.2. "La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18."

Artículo 4.3. "Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación."

Artículo 7. "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

Artículo 14.1. "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil..."

Artículo 17.1." Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo 17.2. "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

Artículo 26. "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda

SIN TEXTO

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, menciona que:

Artículo 1.1. "En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública."

Artículo 5. "En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:"

Artículo 5.a) "El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;"

Artículo 5.b) "El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;"

Artículo 5.e). iii) "El derecho a la vivienda;"

Artículo 6. "Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación."

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3.1. "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", dispone en sus artículos:

Artículo 1. "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado."

Artículo 2. "Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:"

Artículo 2. b. "que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y"

Artículo 2.c. "que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra."

Artículo 3. "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado."

Artículo 4. "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:"

Artículo 4. a. "el derecho a que se respete su vida;"

Artículo 4. b. "el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;"

Artículo 4. c. "el derecho a la libertad y a la seguridad personales;"

Artículo 4. d. "el derecho a no ser sometida a torturas;"

Artículo 4. e. "el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;"

Artículo 4. f. "el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;"

Artículo 4. g. "el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;"

Artículo 6. "El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:"

Artículo 6. a. "el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y ..."

Artículo 7. "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:"

Artículo 7. a. "abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;"

Artículo 7. b. "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;"

Artículo 7. c. "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;"

Artículo 7. d. "adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;"

Artículo 7. e. "tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;"

Artículo 7. f. "establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;"

Artículo 7. g. "establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y"

Artículo 7. h. "adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención."

Como se advierte, los instrumentos internacionales citados, que constituyen norma interna en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, prevén el derecho absoluto que tiene toda persona a que se respete su integridad personal, su libertad, su vida, su dignidad, su vivienda, derechos básicos, lo que implica una protección contra la destrucción total o parcial, la tortura y cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante, entre otros. En suma, el derecho de no suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Así, la autoridad responsable, al suscribir y ratificar los instrumentos internacionales en cita, asumió un conjunto de obligaciones tendentes a garantizar cada uno de los derechos humanos contenidos en dichos instrumentos; lo que implica el deber de abstenerse de conculcar esos derechos.

Es decir, nuestro Estado tiene el deber de garantía, el cual implica obligaciones de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales

Convenios de Ginebra, el artículo 3⁶⁹, prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

La suspensión de los derechos fundamentales, ha incidido sobre diversos derechos fundamentales a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; las garantías judiciales efectivas indispensables para la protección de tales derechos.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, menciona (artículo 4) que los Estados Parte podrán adoptar en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente disposiciones que, en la medida estrictamente limitada sin discriminación alguna suspender ciertos derechos, más no autoriza suspensión alguna a derechos fundamentales inderogables.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone (artículo 27) que, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, suspender obligaciones en virtud de esta Convención y no entrañen discriminación alguna, ésta disposición no autoriza suspensión de derechos inderogables, más al hacer uso del derecho suspensión deberá informar, de las disposiciones, los motivos que haya suscitado la excepción de los derechos a los demás Estados Partes de la Convención, inmediatamente por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Así tenemos que las causales de "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su estudio al Anteproyecto de Convención Americana:

"...esta expresión cubre exclusivamente las siguientes situaciones: un peligro real e inminente para la existencia del país como nación; para la sobrevivencia del Estado como entidad política soberana e independiente; para la integridad del territorio; para el respeto por la constitución política vigente; para el ejercicio de poderes legítimos por las autoridades constitucionales. También incluye la situación de peligro serio e inminente de alteración profunda de la paz social o del orden público de tal carácter que ponga en peligro la seguridad interna del Estado."

El análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte ". Aun entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello " en la medida y por el

⁶⁹ Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra

SECRET

tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación ". Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar " discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social ". Párrafo 19⁷⁰

Y no es el caso de estimar que ésta afectación de derechos humanos inderogables obedece al derecho de reacción de un Estado que conforma un Pacto Federal ante un ataque.

Ello es así, por consecuencia lógica jurídica, la supresión o estado de excepción de derechos fundamentales no derogables, vulnera los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos, sus obligaciones y funciones *erga omnes* de respeto, protección y promoción de los derechos humanos observando la gravedad de los hechos, esta afirmación lógica jurídica es la naturaleza *erga omnes* de las obligaciones del Presidente de la Republica, que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos, que deberán ser aplicadas sin discriminación alguna, las mismas Convenciones lo prohíben. Además, el artículo 89 fracción X de la Constitución reconoce la obligación de cumplirlas y la de denunciar si otros Estados Partes no lo hacen, reconociendo el compromiso de la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, que enfatiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la dimensión ética que esos instrumentos han incorporado a las relaciones internacionales, luego el acto formal del ejecutivo viola las obligaciones que en materia de derechos humanos lo obligan en el presente caso.

Pues, como se dijo anteriormente, invocando la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁷¹ que, clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.** Pues se considera que una violación de (garantías individuales) es grave cuando tiene un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas

No se puede dar visos legalidad a lo que es arbitrario, la aplicación lisa y llana de un estado de excepción ilegal de derechos fundamentales no derogables:

Por consiguiente, el estado de excepción es una institución del Estado de Derecho, como tal, debe reunir determinadas condiciones y requisitos, garantías

⁷⁰ La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87

⁷¹ **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.** Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

SEP
21ST
1961

jurídicas para preservar los derechos humanos, luego, este estado de excepción de derecho es una patología en el que ha desaparecido el Estado Constitucional de Derecho, luego es ilegal que Presidente de los Estados Unidos Mexicanos mediante acto en el medio de control de la constitucionalidad, hecho que no puede explicarse dentro de una lógica jurídica, en lugar de denunciar, y retirar reservas, por el contrario, alejado de sus obligaciones *erga omnes*, formalice el estado de excepción o supresión de derechos fundamentales no derogables. **La prueba de esta afirmación es la naturaleza *erga omnes* de las facultades y obligaciones que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos, que deberán ser aplicadas sin discriminación alguna, las mismas Convenciones lo prohíben. El artículo 89 fracción X de la Constitución reconoce la obligación de cumplirlas y la de denunciar si otros Estados Partes no lo hacen, reconociendo el compromiso de la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, que enfatiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la dimensión ética que estos instrumentos han incorporado a las relaciones internacionales, luego, el Presidente de la Republica viola las obligaciones que en materia de derechos humanos lo obligan en el presente caso.**

Resultando que los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos no regulan relaciones entre los Estados Partes, el centro de la protección es la persona humana que crea un "orden público internacional"

El estado de excepción en el presente caso responde a la causa de un exterminio (violación al derecho a la vida) a favor de intereses de figuras políticas, particulares, el Estado con aquiescencia denotan odio manifiesto, luego, es loable mencionar, el Presidente de la Republica vulnera, la denuncia de estos actos ante la comunidad internacional de Estados de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva OC-9/87, ha establecido que la suspensión de garantías constituye una excepción, más no significa que la misma "comporte la supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad, a la que en todo momento deben ceñirse". Asimismo, menciona que "el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables"

Las violaciones graves a derechos humanos trascienden a la vida, el proyecto de vida queda destruido, la autoridad responsable sin cumplir el mandato constitucional y el compromiso internacional de respetar los derechos así como la integridad física y emocional de las personas un estado de incertidumbre emocional y jurídica, con la consecuente afectación a su forma de vida, ya que resulta lógico que la parte quejosa viva en la zozobra ante un Estado, que desconoce los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico. luego si la autoridad responsable considera que no puede intervenir en el presente caso, que de forma sistemática se han suspendido/violado derechos humanos inderogables, máxime cuando las Instituciones Federales se han conducido con ilegalidad, es loable afirmar, que el acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, vulnera el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos en relación a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículos 26, 27, 29, 53 y 64.

En esta guisa, con apoyo del artículo 53 y 64 de esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que a la letra menciona:

Artículo 53. “Es nulo todo Tratado que, en el momento de su celebración, este en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”) ...”

Artículo 64. “Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo Tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.”

Ello es así, las normas imperativas de derecho internacional (“*ius cogens*”) se oponen a cualquier norma que la autoridad responsable pueda anteponer ante estas graves violaciones sistemáticas a derechos humanos, pues el acto formal del presidente de los Estados Unidos Mexicanos niega sus obligaciones y facultades en materia de derechos humanos.

Luego, la formalización del estado de excepción en el caso concreto es ilegal desde cualquier punto de vista.

La formalización del estado de excepción, viola el artículo 133 de la Constitución, pues establece la llamada supremacía constitucional y una escala jerárquica de las diversas disposiciones que deben regir al país.

De acuerdo este precepto constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, en los términos del artículo 76, fracción I, y 89, fracción X, “serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Las leyes emanadas del Congreso de la Unión son fundamentalmente las leyes federales. El párrafo *in fine* del 133, dispone que los jueces de cada estado se conformarán a la Constitución, leyes y tratados, consigna el principio de la supremacía de derecho federal sobre el derecho local.

Así, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el monopolio constitucional en relación a al desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, efecto que se dilucida perfectamente en el artículo 1o., 29, 87, 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, el Estado Mexicano en el presente caso ha abrogado derechos universales reconocidos en la Constitución Federal, este hecho lo constituye en un acto tiránico sin justificación y sin legitimación alguna, un Estado que no respeta las disposiciones por las que fue creado, en el caso concreto ha detenido el funcionamiento de los derechos reconocidos por la Constitución, destruyendo cualquier posibilidad de certeza jurídica.

Es preciso traer a colación: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de una lógica formal, en abuso del derecho⁷² han empleado a las instituciones como medio para

⁷² Al respecto, se citan las consideraciones sobre el tema realizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Diccionario Jurídico Mexicano, página 39, tomo I, el cual señala: “ABUSO DEL DERECHO. I. La voz abuso del derecho no tiene una raíz etimológica propia. Sin embargo, algunas frases del derecho romano recogen la idea: *summum jus summa injuria*: la aplicación ciega de la regla de derecho conduce a consecuencias injustas; o bien a contrario se puede citar la frase del Digesto “*neminem leadit qui suo iure utitur*”: aquel que usa de un derecho no perjudica a nadie. La teoría del abuso del derecho tiene como problema central el considerar que el ejercicio sin control del derecho, representa una amenaza para la justicia que es el fin esencial del sistema jurídico. - II. El instrumento de control por excelencia es la teoría del abuso del derecho. El tema más discutido en esta teoría es la determinación del límite que establezca que más allá de él, el ejercicio del derecho es abusivo y por tanto reprochable. El sistema para la determinación del límite varía según algunos autores: unos opinan que lo determinante es la intención de dañar a otro; otros afirman que lo importante es la desviación del derecho de su función social. Los elementos que se señalan como constitutivos de la teoría del abuso de derecho son: a) Culpen el ejercicio del derecho; b) Intención de causar un daño; c) El desconocimiento de la función social del derecho

destruir intencionalmente a la parte quejosa. Hechos que son del conocimiento del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

En este orden, analizando el caso concreto desde una lógica formal: por qué, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos declara en juicio de amparo 909/2018: *“mediante el cual solicita apoyo para la recuperación del bien del dominio público andador Tabaqueros ubicado en la Ciudad de México. Le informamos que dada su naturaleza es injerencia y competencia del Gobierno de la Ciudad de México”*.

Esto es, la formalización de estado de excepción deviene en interrumpir formalmente el proceso constitucional democrático en decreto ejecutivo de supresión/violación de derechos humanos no derogables.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos conoce el derecho, lo que evidencia un abuso del derecho, en violación al derecho humano al acceso a la justicia⁷³, pretende un engaño en desviación a la legalidad; el escrito de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho es clarificado en un Estado de excepción de interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos fundamentales inderogables, en el que se solicita de forma pacífica y respetuosa se revindique el derecho al acceso a la justicia con el fin de obtener el reconocimiento de la violación a derechos humanos, la cesación de la violación, sanción y reparación adecuada de la lesión grave a la integridad física, mental y moral; cesen los ataques sistemáticos en contra de la parte quejosa, que se respete el derecho humano a la vida, exponiendo que con fecha seis de mayo de dos mil catorce, la suscrita, dirigió el seis de mayo de dos mil catorce, escrito de denuncia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hecho que detonó el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso.

Luego, es patente que el acto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en abuso del derecho en igual magnitud y desviación del derecho de su función social, hace uso abusivo del derecho. En consecuencia, lógica y jurídica, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formaliza por decreto estado de excepción supresión/violación de derechos humanos no derogables. Decretando que el Gobierno de la Ciudad de México prosiga destruyendo a los quejosos: en semejanza a la tortura de la *gota de agua*, **hasta que se consume intencionalmente de forma total, crimen de genocidio.**

Por otra parte, debe señalarse que el retardo, o incumplimiento de las facultades y obligaciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen un hecho que da lugar a la existencia de supresión/violación grave a derechos humanos no derogables.

Pues, el ejercicio oportuno de las obligaciones y facultades de la autoridad responsable para mantener el Estado de Derecho constituye una garantía de democracia de los gobernados por lo que el incumplimiento de tal ejercicio, **en condiciones extremas, implica una violación grave de derechos humanos**. Al negar retirar reservas supresión/violación de derechos humanos mínimos inderogables. Por el contrario, decreta que el Gobierno de la Ciudad de México

⁷³ “...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...”. Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

está facultado para seguir perpetrando actos que constituyen crimen de genocidio.

Es obligación de los órganos del Estado velar por la seguridad pública y por la protección del orden público, los cuales son fundamentales para la vigencia de los derechos humanos, derechos que se consagran claramente en el artículo 1o., 29, 89, fracción X y 133 de la Constitución Federal.

Las garantías judiciales instituidas para las personas no pueden defenderse sino por mandato constitucional, pues ninguna persona puede tomarse la justicia por su propia mano ni ejercer la violencia para reclamar su derecho, como lo señala el artículo 17 constitucional. Por tanto, nadie tiene legitimidad para usar su propia fuerza en contra de los demás, de manera que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el único que puede utilizar el estado de excepción cuando es necesario para mantener el Estado de Derecho, por ende, conservar las condiciones necesarias para la vigencia de los derechos humanos que establece la Constitución, por lo que la protección de los derechos humanos se encuentra a cargo principalmente de la autoridad responsable, y como garante el Máximo Tribunal Constitucional del país.

En ese orden de ideas, los derechos de protección son derechos constitucionales encaminados a que el Estado organice y maneje el orden social de una determinada manera por lo que respecta a la relación de sujetos jurídicos con el poder público; por ende, si el Estado no evita los decretos en casos concretos de supresión/violación de derechos fundamentales inderogables de gobiernos locales particulares con nexos políticos, figuras políticas, autoridades federales y locales sin sustento legal en bienes protegidos, entonces no solo los formaliza, decreta la interrupción del proceso constitucional democrático. Autorizando que prosiga, hasta consumir delito de genocidio, total.

El Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado estado de excepción o supresión de derechos fundamentales no derogables. Formulando decreto en el medio de control de la constitucionalidad. Hecho notorio en el expediente del juicio de amparo 909/2018.

De forma discriminatoria, y es jurídico, decir, que en clara política de apartheid el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos compara la supresión/violación flagrante y sistemática a derechos fundamentales no derogables, equiparándolos, a éste multicitado Andador Tabaqueros, bien público, que da explicación dentro de una lógica formal, que en sí y por sí mismo, se ejecute tortura de forma sistemática, destrucción de la vivienda propiedad de la quejosa, imputaciones falsas, atentados en contra de la vida, detonaciones de arma de fuego, vejaciones, violencia de género, violencia institucional, asociación y complicidad de figuras políticas para perpetrar intencionalmente crimen de genocidio. Violencia de un Estado mexicano que discrimina a ciertos grupos como en el caso acontece. Formalización y decreto de un Estado de excepción de Derecho suspensión de derechos fundamentales inderogables

Ello es así, de manera formal el Ejecutivo ha decretado la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables, el Presidente de los Estados Unidos, le da vida jurídica a un bien público, en el que sus habitantes (Andador Tabaqueros) perpetrar delitos apoyados en asociación y complicidad con figuras políticas, de un Estado mexicano que formaliza sistemáticamente la violación a instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La autoridad responsable viola el derecho de acceso a la justicia, pues no permite que las autoridades que en asociación y complicidad han perpetrado supresión/violación de derechos humano no derogables sean investigadas por

SECRET

SECRET
SECRET

conductas que constituyen crimen de genocidio, por el contrario, formaliza y decreta estado de excepción, hechos que se clarifican en el artículo 17.2.a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que a la letra dice:

"17.2.a) ... o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;"

En esta guisa, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos viola el artículo 89 fracción X de la Carta Magna y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados, la necesidad del respeto, la protección y promoción a los derechos humanos inderogables, derechos que existen con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado mexicano que imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional, los Estados Partes "no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado"⁷⁴, hecho que se clarifica en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

"Estos derechos inderogables -y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes-, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran"⁷⁵

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."⁷⁶

Luego, con fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4.3⁷⁷, el artículo 27.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la República facultades y

⁷⁴ Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados
Artículo 27 El derecho Interno y la observancia de los Tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46

⁷⁵ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981, nota 76 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁷⁶ Párrafo 25, página 9.

⁷⁷ **Artículo 4.3.** "Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.

SIN TEXT

obligaciones, tales como, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos en consecuencia lógica y jurídica la autoridad responsable está obligada a informar este estado de excepción, no hacerlo, vulnera sus obligaciones que le impone imperativamente *erga omnes* a la comunidad internacional de los Estados Partes, que **implica una violación grave de derechos humanos.**

Por lo que existe un mandato normativo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiere de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes;

El incumplimiento de las obligaciones expuestas en las normas citadas, recae en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien al haber omitido acatar dichas disposiciones y teniendo competencia para ello, han provocado una afectación a nuestro interés legítimo y a nuestra esfera de derechos, como se señala en los conceptos de violación.

En este sentido es importante señalar que ninguna de las disposiciones aludidas y que han sido incumplidas, imponen una carga de solicitud o excitativa a nuestra parte, ya que al tratarse de obligaciones Constitucionales y legales de carácter general no necesitan de una acción primigenia para poder ser invocada, **esa conducta vulnera por acción formal y decreto los derechos fundamentales inderogables y el derecho al acceso a la justicia⁷⁸, y las garantías para su protección, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional, a un tratado o convenio y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado.**

La proyección de la dignidad de toda persona, se ve reflejado en el reconocimiento al proyecto de vida sin discriminación o segregación alguna.

Tomando en cuenta que el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, es un principio de las normas imperativas de Derecho Internacional (*ius cogens*)⁷⁹.

A
DE Los derechos humanos tienen como base el derecho a la existencia, al reconocimiento integral de los derechos inherentes a toda persona, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna: certeza y seguridad jurídica, integridad física, psicológica y moral.

Por consiguiente, a toda persona le es inherente todos los derechos y libertades que corresponden al ser humano sin que sea admitida distinción o segregación alguna por razón de género, social, económico, o cualquier otra condición. La vulneración al principio de no discriminación constituye un caso del *ius cogens*, pues es un elemento constitutivo del concepto de los Derechos Humanos.

El respeto de los Derechos Humanos es un caso del *ius cogens*, de consiguiente, la violación sistemática a derechos fundamentales inderogables protegidos por Convenciones, Convenios, tratados en materia de Derechos Humanos firmados y

⁷⁸ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones *erga omnes*...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
METROPOLITAN MUSEUM OF ART
1000 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10028

ratificados por el Estado mexicano, hace del presente caso una violación sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Al violentar gravemente de forma sistemática los derechos fundamentales inderogables en el caso concreto se actualiza la negación del derecho a la existencia de un grupo familiar, la separación de derechos, segregación por discriminación basada en motivos económicos, sociales, de género. Con consecuencias inmediatas de sometimiento intencional a condiciones de existencia que han acarreado lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos.

Los actos formales de decreto de estado de excepción del Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, están apartados del principio de supremacía constitucional, pues los actos de autoridad para ser legales deben ser acordes a los ordenamientos jurídicos de la Constitución y tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por la autoridad responsable.

La supresión/violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales inderogables que acontecen en el presente caso, tienen como objetivo la segregación de una familia a un Estado de Derecho, que tiene como principio de Supremacía Constitucional la Constitución y Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos⁸⁰, normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*).

El acto de segregación en sí y por sí mismo, representa el objetivo de anular el derecho a la vida, la amenaza constante de volver a ser torturado, o detenido arbitrariamente, sin certeza y seguridad jurídica⁸¹.

El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin discriminación alguna, en el presente caso está muy lejos de ser reconocido, retirando el ejecutivo la reserva de interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables que formalmente decreto en el medio de control de la constitucionalidad con número de expediente 909/2018

Los actos de la autoridad vulneran el principio de igualdad jurídica, combatiéndolo con la violación al principio de no discriminación, que a su vez vulnera el principio de igualdad de derechos, por consiguiente, vulnera los derechos humanos más básicos en el presente caso.

La violación de normas imperativas de Derecho Internacional, normas que, el Estado mexicano ha firmado y ratificado que le genera obligaciones *erga omnes*, al Ejecutivo, que en el caso concreto se pretende que aplicando la política de discriminación, despojándonos de derechos protegidos por normas del *ius cogens*, la parte quejosa sea segregada por todas las Instituciones del Estado mexicano, para seguir aplicando impunemente la técnica semejante a la tortura de la "gota

⁸⁰ del artículo 133 Constitucional, se puede deducir los aspectos que caracterizan al principio de supremacía constitucional:

- a) La Constitución Federal es la Ley suprema y fundamental; y
- b) Los ordenamientos jurídicos derivados de ella, sean leyes federales, tratados internacionales o leyes locales, **inclusive los actos de autoridad**,
- c) deben estar acordes a lo preceptuado por la Constitución, para que resulten válidos.

⁸¹ Sin saber que delito se ha cometido y por consiguiente ser juzgado ante un Tribunal de delitos oficiosos (carpeta judicial 011/0384/2017, la Representación Social no hizo del conocimiento a la imputada por qué se le estaba investigando), juicio de amparo indirecto 627/2017, que derivó en recurso de revisión 157/2017, asimismo, en recurso de reclamación. A la fecha, la Representación Social, sólo afirman que nos están investigando, acusándonos de delitos oficiosos, sin saber la parte quejosa qué delitos y cómo cometimos esos delitos oficiosos.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

de agua" con el objetivo de sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen destrucción física, mental y moral, total, y esto no produzca necesariamente consecuencias jurídicas, pues el Estado mexicano tiene deberes ineludibles e irrenunciables como sujeto de Derecho Internacional, que forma parte de la Comunidad Internacional.⁸²

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura⁸³, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, la destrucción al derecho a la vivienda⁸⁴, entre otros, hacen del caso una vulneración sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional, una radical negación a normas del *ius cogens*. Constituyendo crimen de genocidio.

Lo que hace del presente caso una segregación. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total; ello es así, el caso concreto presenta métodos semejantes a la técnica de tortura de la *gota de agua* en violación a los artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en consecuencia lógica en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales⁸⁵

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6), a la letra dicen:

"Artículo 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades

⁸² Estado Miembro de las Naciones Unidas.

⁸³ En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza⁸³ la tortura, castigos, fabricación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.

⁸⁴ Juicio de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

⁸⁵ **Artículo primero**

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

Artículo 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;

c) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

iii) El derecho a la vivienda;

Artículo 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación."

La segregación ha tenido por resultado desconocer los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera de los quejosos.

El acto formal del Presidente de los Estados Unidos fomenta la discriminación racial practicada en el presente caso.

Los Estados partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

El acto de autoridad en discriminación racial en contravención en el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley; veda el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, el derecho a la seguridad personal, a la vivienda y a la protección del Estado contra los actos de violencia y contra la integridad personal cometido por Instituciones, funcionarios públicos, figuras políticas, particulares que conforman un grupo de poder público y privado.

El acto de decreto formal de estado de excepción del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos vulnera como Estado Parte que le genera obligaciones *erga*

omnes ante la Comunidad Internacional, como Estado Democrático, asegurar en el presente caso, protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra los actos de discriminación racial que, contraviniendo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, viola derechos fundamentales inderogables y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a los tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo el daño de que hemos sido víctimas como consecuencia de tal discriminación y cese la suspensión del proceso constitucional democrático. El sometimiento intencional a condiciones de existencia que pretenden acarrear la destrucción física, total, de los quejosos.

El acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es ilegal, pues todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

La autoridad responsable no puede legitimar (**¡más, lo ha formalizado!**) ni en derecho ni de facto ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de segregación que en el caso concreto constituye una forma extrema del racismo, sin derechos, pues todo acto u omisión que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

Porque como bien lo dice el artículo segundo de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, "El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento."

Los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos asumen responsabilidades primordiales al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

En el presente caso el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no solo se niega a retirar reservas de *facto*, formaliza y decreta la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables, por consiguiente, vulnera sistemáticamente y reiteradamente los principios y normas del *ius cogens*, por lo que no es legítimo que a la parte quejosa se le considere inferior, sin plena igualdad de dignidad y derechos por causa de diferencias económicas y sociales, justificando esas desigualdades destruyendo el principio de Supremacía Constitucional en relación al principio de no discriminación, con razonamientos desprovistos de fundamento, pues la negación de sus obligaciones y facultades que le genera obligaciones *erga omnes* como Estado Democrático hace del presente caso una permisión ilegal.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, "Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen"⁸⁶ ello es así la protección de un Estado de Derecho, esta en

⁸⁶ **Artículo 87 Constitucional.** "...El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido,

proteger el principio de Supremacía Constitucional, que va unido al principio de no discriminación, considerando, que la segregación a la que se le somete a la parte quejosa hace del caso una violación reiterada a normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), afectando la legitimidad como Estado Democrático.

En el presente caso la segregación en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que por consiguiente desconoce las condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos, en violación al artículo 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales.

En este orden de ideas la parte quejosa dirigió escrito de petición de forma respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la Oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la Republica, en fechas seis de septiembre de dos mil diecisiete y trece de marzo de dos mil dieciocho, en el escrito, se denuncia la segregación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, alcanzando su plena realización en violaciones procesales, en que el engaño y discriminación es manifiesto. "El proceso ha sido "a modo" y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia", no se pretende hacer justicia solo simularla, los juicios están viciados y, por consiguiente, a la fecha no existe un auténtico proceso⁸⁷, por lo que la sentencia que éste produce no es genuina, acompañada de violencia y destrucción del estado de derecho, el escrito signado por la parte quejosa, fue el de hacer ver que el presente caso se le ha sometido intencionalmente a condiciones de existencia en la que pretenden acarrear la destrucción física, mental y moral, total, siendo esto objetivo, pues se puede probar de forma lógica y jurídica con la violencia institucional, violencia de género, humillación, segregación, tortura, incriminación, amenazas de pérdida de la libertad, de pérdida de la vida, de violación al derecho de vivienda, pues en el transcurso de seis años los suscritos hemos acudido a todas las Instancias en el Estado mexicano, un ejemplo de ello, es el Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros defensores públicos, son partícipes de la segregación manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, después de haber elaborado un amparo a la parte quejosa, que distó por mucho de ser un escrito efectivo, resultó, con condicionamientos dependientes hacia el Estado, en violación a los derechos humanos⁸⁸, deponiendo la justicia a la merced de la ficción.

Al acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros asesores jurídicos pertenecientes a ésta defensoría, en segregación manifiesta (afirmaban lo que ahora la juez a quo⁸⁹ resuelve en juicio constitucional contrario al artículo 1 y 217 de la Ley de Amparo), que a la parte

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande..."

⁸⁷ Juicio de amparo indirecto 260/2018, Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del primer Circuito, autoridad responsable Secretario de Gobernación.

⁸⁸ La dignidad humana de la parte quejosa fue pisoteada, ni siquiera nos proporcionaron el número de amparo que fue interpuesto por ésta licenciada

⁸⁹ Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, cabe traer a colación, que el licenciado Héctor Molinero Orduña, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, preguntó en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, si existía abogado, al responder la parte quejosa..., mencionó "**aun así, no se les ha negado el servicio**", prosiguiendo en actitud discriminatoria, que no entendíamos, diciendo, qué cómo nos explicaba..., en este punto, es válido traer a colación, que es por nuestra apariencia que consideran que no tenemos derechos, que somos ignorantes, con absoluta malicia.

quejosa no se le ha vulnerado ningún derecho, a pesar de la tortura, que ha derivado en lesión grave a la integridad física, mental y moral. Con absoluta malicia, nos vejaba, se burlaban que no podíamos hacer nada, que sólo se veía que había afectado a nuestra salud⁹⁰, haciéndonos esperar cerca de cuatro horas, para después de ese tiempo, mencionar que no teníamos nada que hacer ahí, que ellos no podían hacer nada por nuestro caso, que acudiéramos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Asimismo, acudimos como último recurso a instar las garantías judiciales para la protección y reconocimiento del derecho vulnerado en diciembre de dos mil dieciséis con el juicio de amparo 1118/2016 y subsecuente 288/2017, 349/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017, 74/2018, 260/2018.⁹¹

Por consecuencia lógica y jurídica la ilegalidad del estado formal de supresión de derechos fundamentales no derogables causa total estado de indefensión, el acto formal de decreto del Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, infringe en perjuicio directo el principio de no discriminación, en el estado de excepción de suspensión/violación de derechos fundamentales inderogables. Fomenta la discriminación racial que han hecho del presente caso sin que a la fecha del presente escrito, la autoridad responsable condene la segregación de derechos fundamentales inderogables y la destrucción del Estado Constitucional de Derecho que han hecho del caso una vulneración a las normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Los diversos juicios constitucionales referidos han sido substanciados en los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, de ahí que, la parte quejosa solicita atentamente a su Señoría, el derecho humano de acceso a la justicia: Revisión Oficiosa de decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de supresión de derechos fundamentales no derogables. ofreciendo como hechos notorios los expedientes de los juicios de amparo indirecto: 909/2018, 260/2018, 74/2018, 651/2017, 627/2017, 545/2017, 349/2017, 288/2017 y 1118/2016, y, en consecuencia, los recursos que han derivado de éstos expedientes.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁹²,

⁹⁰ **Llegando a mencionar a Carolina González Nava, que seguiríamos solicitando acceso a la justicia, mencionando que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que respondían burlescos los asesores jurídicos pertenecientes al Instituto Federal de Defensoría Pública: "creo que apoyan con recursos para transportarse", que al parecer se encontraba en Costa Rica (refiriéndose a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).**

⁹¹ Cabe hacer mención que los juicios de amparo ("Habeas Corpus") 349/2017 y 74/2018, fueron en relación a las graves amenazas de policía de investigación que acuden armados a tratar de detenernos arbitrariamente, sin que la parte quejosa haya cometido ningún injusto, vulnerando derechos fundamentales inderogables de certeza y seguridad jurídica. Por consiguiente, la parte quejosa se ha visto obligada a auto salvaguardarse.

⁹² **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes

clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

En este orden de ideas, la segregación racial, dentro de una lógica formal, clarifica el presente caso, el por qué las autoridades responsables en abuso del derecho, con la intención de dañar a la parte quejosa, en violación a la función social del derecho, ha planificado graves violaciones sistemáticas, los motivos inaceptables que implica un abuso de las Instituciones como medio para destruir el proyecto de vida, con el objetivo de exterminio, la parte quejosa ha sido torturada, humillada, con la amenaza constante de pérdida de la libertad o de la vida, en violencia institucional y de la comunidad, precedente que solicitamos atentamente, sea analizado por su Señoría, con el objetivo de que no se vuelva a repetir esta supresión/violaciones sistemáticas y flagrantes de derechos humanos no derogables a un caso similar, por un largo periodo de seis años con tres meses que se advierte *ad infinitum*, a alguna persona por considerar que se encuentra en desigualdad estructural o discriminación estructural, que el Presidente de los Estados Unidos así como decretó formalmente éste estado de excepción debe reconocer la vulneración que el Estado mexicano ha hecho del presente caso y retirar las reservas que acontecen a derechos humanos no derogables.

Teniendo en cuenta la situación la segregación en la que se enmarcan los hechos ocurridos por un periodo de seis años con tres meses: supresión y/o violaciones sistemáticas y flagrantes a derechos humanos no derogables, que conforma una historia de torturas, vejaciones humillaciones, fabricación de delitos y libre tipificación de delitos, erigiéndose en un Tribunal que ha impuesto penas inusitadas, castigos. Hechos perpetrados a un grupo determinado con la intención de someterlos a condiciones de existencia que forzosamente han de acarrear su destrucción, total. El Estado obligado a garantizar, las condiciones jurídicas para la no vulneración del Derecho imperativo, más lo permite y determina formalizar decreto de estado de excepción, destruyendo el Estado de Derecho, contraviniendo todo ordenamiento en materia de los Derechos Humanos, tratados, convenios, suspendiendo derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso... en el caso concreto. Es válido mencionar el principio de la carga de la prueba es dependiente del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales del país a que está sea impartida con perspectiva de género, a observar la desigualdad estructural del actor frente al Estado, que al destruir el derecho, ha impuesto segregación racial, pues no importa las pruebas aportadas, la invocación de Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, es como si estos no existieran, pues la parte quejosa ha sido despojada de derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso...

o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

SMITH
TENT

Considerando que a la fecha la parte quejosa ha sido segregada de derechos y garantías que son inherentes al ser humano. El derecho al pleno y efectivo ejercicio a las garantías judiciales han sido suspendidas, acudiendo ante su Señoría para el reconocimiento y restablecimiento del derecho vulnerado. Solicitando la revisión oficiosa de decreto del Presidente de los Estados Unidos de éste estado de excepción.

Hechos notorios son los innumerables juicios de amparo que en el presente caso han resultado fallidos, más conforman las probanzas idóneas de la interrupción formal del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables. Resoluciones contrarias a la intención de proteger, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, derechos implícitos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los resolutivos que engrosan los juicios de amparo indirecto en materia penal, son contradictorias a un Estado de Derecho; mas nada se puede hacer, cuando se simula juicio de amparo en el caso concreto, con sendas violaciones procesales, dilación en el proceso, es el pan de cada día, actuaciones que conforman un "engaño", es en sí mismo violencia en juicio constitucional, formalizando segregación de derechos fundamentales inderogables⁹³.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que "los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia."⁹⁴

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión⁹⁵

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que, en el presente caso, por un periodo de dos años, con cuatro meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.⁹⁶

⁹³ Juicio de Amparo Indirecto 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018. Las disposiciones que se han adoptado en juicio de amparo son ilegales, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las "garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos". La suspensión del Estado de Derecho a autorizado a las autoridades responsables a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, en el que se han investido de poderes absolutos, se han extralimitado *ad infinitum* de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada.

⁹⁴ Párrafo 25, página 9.

⁹⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

⁹⁶ En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la violación al artículo 8.1 de la CADH, en los casos en los que no se ha respetado el debido proceso.

OLXET MIS

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder y de la Instituciones desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

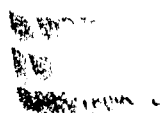
El presente caso se encuentra en la inefectiva igualdad ante la ley, el inacceso a la justicia carece de justificación objetiva y razonable de conformidad con el actual marco constitucional de protección, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene obligaciones *erga omnes* específicas en materia de derechos humanos; protección y garantía, noción de igualdad, principio de no discriminación que es inseparable de la dignidad de la persona, ello es así, el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, por consiguiente, el acto formal de decreto de estado de excepción es contrario al principio de igualdad y no discriminación, respecto al ejercicio y reconocimiento de los derechos inderogables, acción que es incompatible con los derechos reconocidos en la Constitución, pues a la parte quejosa se nos considera inferiores, hecho, que ha afectado el reconocimiento y goce a los derechos inderogables de los quejosos, las cuales han sido definidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, de la manera siguiente:

IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS⁹⁷

El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la **noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona;** sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables,

Los hechos notorios en el que no se ha respetado en debido proceso, lo conforman los innumerables juicios de amparo indirecto, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017⁹⁶, 74/2018, 260/2018⁹⁶, la Juez a quo y los recursos que han derivado de éstos, han sido substanciados en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se han negado a tener las pruebas por vertidas, de amenazas, hostigamientos, por solicitar acceso a la justicia, no obstante, las probanzas de las penas de castigos prohibidos, en connivencia con las autoridades responsables: defensor público y particular torturas⁹⁶, coacción, penas infamantes, falsas acusaciones, procedimientos ilegales del Ministerio Público, de la fuerza pública, del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México humillaciones públicas, vejaciones, etcétera) que las autoridades responsables han ejecutado con un alto grado de planificación, es notorio que el proyecto de vida ha sido destruido, sin certeza y seguridad jurídica ("*habeas corpus*"), atenidos a la nada jurídica.

⁹⁷ Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.), Décima Época, Primera Sala del Alto Tribunal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2016, Tomo I, Página: 370, registro: 2012715



proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, **combatir las prácticas de este carácter** y establecer normas y otras medidas **que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas**. Nota. Lo resaltado es propio.

Por consiguiente, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, **por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos** que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el **trato hacia** una persona o **grupo de personas es discriminatoria**, la segregación tiene por objetivo el exterminio, lo constituye un acto **arbitrario que redunde en violación de los derechos humanos inderogables**:

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL⁹⁸.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de **los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta**. Es contraria toda situación **que, por considerar superior a un determinado grupo**, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, **por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos** que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el **trato hacia** una persona o **grupo de personas es discriminatoria**, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una **diferencia arbitraria que redunde en detrimento de los derechos humanos**. En tal sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.

Nota. Lo resaltado es propio.

En el presente caso, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de tener las atribuciones legales, derivadas de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar nuestros derechos fundamentales inderogables, se ha negado llanamente a ejercer actividades tendientes a lograr garantizar el ejercicio de tales derechos fundamentales. **Esto es, en lugar de retirar reservas a derechos fundamentales no derogables. Decreta formalmente estado de excepción.**

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH⁹⁹) con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos

⁹⁸ Tesis: P./J. 9/2016 (10a.), Décima Época, El Tribunal Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2016, libro 34, Tomo I, Página: 112, registro: 2012594

⁹⁹ Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la pena ver el criterio jurisprudencial

Humanos (en adelante CADH), establece que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad¹⁰⁰.

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la —adopción de medidas positivas—, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal, la segregación o por la situación específica en que se encuentre¹⁰¹.

Por tanto, ante una conducta o violación indirecta administrativa, la Justicia Federal puede tutelar a las personas gobernadas por la vía del juicio de amparo o bien aceptar a trámite la solicitud de revisión oficiosa de decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de supresión de derechos fundamentales no derogables, con fundamento en el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sirva de apoyo el criterio judicial siguiente:

Siguiente: **JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.** Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

¹⁰⁰ Cfr. CoIDH. Caso *Tribunal Constitucional vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Caso *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso *de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37.

¹⁰¹ Cfr. CoIDH. Caso *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205

OMISIÓN LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA. EL MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO, CONSISTENTE EN QUE NO PROCEDE EL JUICIO EN SU CONTRA, NO ES NOTORIO, MANIFIESTO NI INDUDABLE, PORQUE IMPLICA UN ESTUDIO EXHAUSTIVO SOBRE EL TEMA QUE NO ES PROPIO DE UN ACUERDO, SINO DE LA SENTENCIA¹⁰².

Tomando en consideración que para analizar si existe una inconstitucionalidad omisiva el operador jurídico debe revisar que: i) exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; ii) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, iii) **esa conducta vulnere un derecho o garantía**, lo que se sífa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado, así como que para hacer efectivos los derechos fundamentales existen dos principios a colmar: el de legalidad y el jurisdiccional; en atención al nuevo bloque de constitucionalidad y a la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el motivo de desechamiento de una demanda de amparo, consistente en que no procede el juicio contra omisiones legislativas o administrativas, no es notorio, manifiesto ni indudable, porque implica un estudio exhaustivo sobre el tema que no es propio de un acuerdo, ya que no es posible hablar de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, al no derivar de los argumentos de la demanda o de las pruebas, sino del estudio e interpretación que lleve a cabo el Juez de Distrito en la sentencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

En el caso que nos ocupa, se configuran los tres elementos necesarios para actualizar la conducta administrativa:

- i) **exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes;**

En este sentido, es pertinente revisar el contenido de los artículos 1º, y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte conducente y tocante a lo relacionado con las obligaciones en materia de derechos humanos fundamentales:

"ARTICULO 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

¹⁰² Tesis: XI.1o.A.T.33 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2014, Tomo III, Página: 1861, registro: 2007189

SM TEXTD

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ARTICULO 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, **solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, **podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.** Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, **no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la y niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

[...]

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez

Adicionalmente a la obligación general impuesta en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la obligación de todas las autoridades para promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecen atribuciones específicas al Presidente de la Republica, entre las que se encuentra las siguiente:

SM TEXT

13TH
SECRET

Artículo 6o.- Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República.

En este empalme, el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la República facultades y obligaciones, tales como, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

Pues el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen (artículo 87 Constitucional)

En efecto, la obligación principal que la autoridad responsable protestó guardar y hacer guardar el principio de Supremacía Constitucional, asimismo ha asumido como Estado Parte de los instrumentos convencionales mencionados en párrafos anteriores, la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27), prevén la posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los estados partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional (normas imperativas del Derecho Internacional, *ius cogens*) **sin discriminación alguna.**

Circunstancias excepcionales que están muy lejos del presente caso: segregación manifiesta, pues la tortura, humillación, penas infamantes, incriminación, destrucción del proyecto de vida, violencia de género, violencia Institucional, amenaza de pérdida de la vida y de la libertad¹⁰³, pérdida al derecho humano a una vivienda, la negación de garantías para su protección y el reconocimiento del derecho vulnerado, negación de la existencia de obligaciones *erga omnes* en relación al principio de no discriminación en vulneración a Derechos Humanos, hacen del presente caso la destrucción del Derecho, la nada jurídica, en violación a los artículos 1.1.2, 2.1.a).b).d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en consecuencia lógica en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales¹⁰⁴, hacen del presente caso actos ilegales que están en oposición a normas imperativas de Derecho Internacional.

¹⁰³ "habeas corpus"

¹⁰⁴ **Artículo primero**

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1.El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura¹⁰⁵, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos y libre tipificación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, entre otros, hacen del caso una radical negación a normas del *ius cogens*.

En este orden, se explicar dentro de una lógica formal y jurídica: el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos determina y formaliza, el decreto, radical de negación a normas imperativas de Derecho Internacional e interrumpe formalmente el proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos fundamentales no derogables. En clara práctica de apartheid, resuelve que el Gobierno de la Ciudad de México, sea el encargado de consumar el crimen de genocidio, total, hechos que ni siquiera en conflictos armados ésta permitido.

Contrario al acto Ejecutivo de autoridad, existen derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los cuales son normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Derechos reconocidos en Convenciones Internacionales que no admiten ninguna posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales que protegen, Instrumentos que la autoridad responsable ha firmado y ratificado, que le exigen obligaciones *erga omnes*: Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ...

Que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que la violación al principio de no discriminación hace que cualquier acto que sea contrario al mismo ilegal.

La destrucción física, mental y moral, parcial o total, son actos contrarios a los derechos humanos inderogables, implícitos en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado, y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁰⁵ En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza¹⁰⁵ la tortura, castigos, fabricación de delitos, libre tipificación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.

De lo anterior es factible concluir que el Presidente de la Republica tiene mandatos Constitucionales y legales expresos que le irrogan retirar las reservas: supresión/violación de derechos humanos inderogables, que el mismo Ejecutivo formalizó y decretó en el medio de control de la constitucionalidad con número de expediente 909/2018, en contravención a sus obligaciones *erga omnes*, vulnerando el principio de no discriminación, esto, de conformidad como Estado Parte de la Comunidad Internacional que ha firmado y ratificado Tratados, Convenciones en materia de los derechos humanos¹⁰⁶ que lo convierten en un Estado Legítimo. Máxime que protestó guardar y hacer guardar el principio de Supremacía Constitucional (artículo 87 Constitucional)

ii) se configura el incumplimiento de tal obligación por el funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y,

La negativa del cumplimiento de las obligaciones expuestas en las normas citadas, recae en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien al haber omitido acatar dichas disposiciones y teniendo obligaciones y facultades para ello, han provocado una gravísima afectación a nuestro interés legítimo y a nuestra esfera de derechos.

En este sentido es importante señalar que ninguna de las disposiciones aludidas y que han sido incumplidas, imponen una carga de solicitud o excitativa a nuestra parte, ya que al tratarse de obligaciones Constitucionales, Convencionales y legales de carácter general no necesitan de una acción primigenia para poder ser invocada, **esa conducta vulnera los derechos fundamentales inderogables y el derecho al acceso a la justicia¹⁰⁷, y las garantías para su protección, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado.**

En síntesis:

Con fundamento en el principio de dignidad de la persona humana y el principio de no discriminación, principios básicos del artículo 29, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos que a la letra dice:

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

En relación a estas garantías judiciales indispensables a que alude el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos en relación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción¹⁰⁸.

Con apoyo del párrafo anterior, la parte quejosa solicita atentamente al Máximo Tribunal Constitucional del país, **la revisión oficiosa de decreto de restricción**

¹⁰⁶ Artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

¹⁰⁷ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia “...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones *erga omnes*...”. Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22

¹⁰⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86

SECRET

o suspensión de derechos, con fundamento en el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La violación a la dignidad, hace del presente caso, que el decreto dictado o bien derivados de resoluciones, sean hechos nulos que ilegitiman tales decretos o resoluciones.

La naturaleza *erga omnes* de las obligaciones que engendran los tratados y convenios de derechos humanos, sus normas deben aplicarse sin discriminación alguna. Derechos que contienen una doble dimensión la obligación del Estado de cumplirlas y el derecho de reclamar su violación, máxime si ésta es sistemática y flagrante.

El estado de excepción de Derecho y de violaciones a derechos humanos fundamentales, derechos protegidos por normas del *jus cogens*¹⁰⁹; en relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.¹¹⁰ han sido expuestos ante el Presidente de la Republica, representado por la Secretaria de Gobernación en juicio de amparo indirecto 909/2018, solicitando ésta responsable, se le niegue a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión y decretando formalmente la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos fundamentales no derogables.

Esté decreto Ejecutivo perenniza el Estado de Excepción, que obedece a factores políticos que ha implicado la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes a apartar su conducta de la legalidad. Pues la noción de un Estado Democrático es inherente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Ello es así, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables.

Las normas y principios que regulan los Estados de Excepción se han inobservado en el presente caso, los requisitos que los estados de excepción deben reunir para que su regulación se ajuste a las exigencias de las normas internacionales, la parte quejosa solicita atentamente a este Máximo Tribunal Constitucional del país su revisión oficiosa, por las razones siguientes:

El principio de legalidad es consustancial a la naturaleza de la institución del Estado de Derecho, la inexistencia de normas y control, tanto internos como internacionales que lo regulen.

El principio de proclamación, la inexistencia de este principio, hace de éste Estado de excepción *de facto*. Aun cuando el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado el decreto de estado de excepción.

Hecho que ha redundado en la permisión a la supresión del Estado de Derecho, autorizando a los Gobernantes, instituciones a apartar su conducta de la legalidad.

El impacto directo e ilegal a la en el presente caso ha derivado en la nulidad al derecho al principio de dignidad y no discriminación, la suspensión de derechos fundamentales inderogables, situación que *de facto* vive la parte quejosa, obedece a razones ilegales.

¹⁰⁹ artículo 53 de la Convención de Viena de fecha 23 de mayo de 1969, ratificándola el Estado Mexicano en misma fecha, menciona que "*es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter.*"

¹¹⁰Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

SM TEXTD

La vulneración al principio de proclamación del estado de excepción apunta a la condición indispensable para su validez, aun cuando ha sido proclamado en juicio constitucional, su temporalidad es incierta, pues a la fecha conlleva un periodo de seis años con tres meses, que comprende una temporalidad de dos años con cuatro meses en juicio de amparo en el que existe la proclamación *de facto*. Más el Estado Mexicano ha omitido con la debida formalidad de proclamación del estado de excepción:

La circunstancia que lo justifica, el periodo por el cual se implanta, las medidas que autoriza, los mandatos de la Constitución, los tratados y convenios que se han de desaplicado en el presente caso por las medidas de excepción.

El no cumplimiento de la comunicación oficial, que cabe decir, debe ser inmediata ante el Secretario General de las Naciones Unidas en lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en cuanto a las Convenciones regionales, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y el Secretario General del Consejo de Europa, respectivamente, debe señalar expresamente las medidas que autoriza, las razones que motivaron este largo periodo de suspensión.

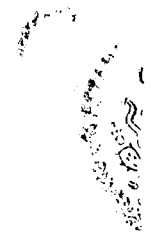
La notificación formal juega un papel sumamente importante, en tanto prerequisite cuyo cumplimiento habilita a los Estados Parte a prevalecerse de las cláusulas de derogación.

La parte quejosa siendo la afectada por las medidas de suspensión que el Estado mexicano ha impuesto, y formalizado el decreto de excepción en el medio de control de la constitucionalidad por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando lo haya hecho de conformidad a alguna norma nacional, como bien nos lo han comunicado en juicio de amparo, el Ministerio Público, la Secretaría de Gobernación, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, actuando en Pleno, la juez A quo (Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal) o bien, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal Instituto Federal de Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Contraloría General de la Ciudad de México, que, *somos ignorantes, que no tenemos para el pasaje, que no entendemos, que no es competencia de las Instituciones, que la tortura, vejaciones, humillaciones, intimidación, amenazas de pérdida de la libertad, atentado en contra de la vida... no causa daño a nuestra esfera jurídica, más, no han mostrado la comunicación y/o notificación oficial de la excepción frente al orden internacional, cuyo cumplimiento habilita a los Estados a prevalecerse de las cláusulas de derogación, máxime si se han desaplicado tratados y convenios en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado. Por consiguiente, los suscritos presumimos que éste Estado de excepción de derechos es de facto.*

La información jurídica que sustenta lo anterior son los juicios de amparo indirecto siguientes: 1082/2016, 1118/2019, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018 todos substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, a excepción de los juicios 349/2017, 74/2018 y 909/2018 que fueron substanciados en el Juzgado Quinto y Tercero de Distrito, respectivamente. Aunado al juicio 909/2018 que fue del conocimiento del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En éste estado de suspensión *de facto*, la responsable Secretaría de Gobernación en juicio de amparo con número de expediente 260/2018 y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en juicio de amparo 909/2018, solicitó se nos negara el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

SIN TEXTO



GRUPPO
FOL. 1
SECRETARIA GE

Asimismo, formaliza la interrupción del proceso constitucional democrático, en supresión/violación de derechos fundamentales no derogables. Hecho que hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera oficiosa manifieste lo conducente. Las probanzas son la consecuencia lógica y jurídica de los amparos promovidos, las resoluciones son acuerdos al estado de excepción, que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha convalidado (el grueso de las decisiones, han recaído en éste tribunal). No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Dificilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, **sin que se añada otro motivo de injusticia**; o bien, **ilegalidad o ilegitimidad** con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), **sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia**. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -- formalmente-- atiende a la seguridad jurídica."¹¹¹

Por consiguiente:

En el caso concreto la supresión y/ o violación a derechos humanos no derogables, derivó de una denuncia de fecha seis de mayo de dos mil catorce. Formalizada por el Presidente de los Estados Unidos mexicanos

La Comisión de Derechos Humanos que pueden actuar de parte o de oficio, han tenido complicidad en el caso concreto.

El estado de excepción en el presente caso responde a causales -intención- de exterminio (violación al derecho a la vida).

Al violentar gravemente de forma sistemática los derechos fundamentales no derogables en el caso concreto se actualiza la denegación al derecho humano a la vida.

La supresión y/o violación flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales constituyen en el caso concreto segregación manifiesta e indudable. Esta segregación ha tenido como resultado desconocer los derechos humanos más básicos

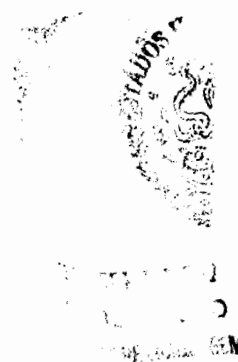
El presente caso se encuentra en la inefectiva igualdad ante la ley: inacceso a la justicia.

Dando como resultado, impacto directo e ilegal en nulidad al principio de dignidad.

Pues, La destrucción del Estado de Derecho y de los principios más básicos, como es el reconocimiento de la dignidad que es inherente al principio de no discriminación, fundamento de las normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), aunado a la destrucción intencional de la vivienda de la parte quejosa.

¹¹¹ Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia*, Sentencia De 12 de septiembre De 2005.

SIN TEXTO



A la luz de estas consideraciones, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, pág. 1533, ha manifestado que la autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garantías individuales; por tanto, se necesita que pruebe que existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga no sea considerada como violatoria de garantías, por consiguiente, la carga de la prueba, incuestionablemente, le corresponde a la autoridad, porque el que destruye un estado jurídico, es el que debe probar los hechos, ya que, si la autoridad no rinde esa prueba, como en el caso acontece, "no puede fallarse en su favor":

GARANTIAS INDIVIDUALES.

La persona jurídica no tiene que probar que se encuentra en el goce de las garantías individuales, porque éste es el estado natural y general de toda persona en la República Mexicana y el acto que restringe o afecta esas garantías, sí debe ser objeto de prueba, porque hay que hacer patente si la restricción se realizó en las condiciones que la Constitución ha previsto. La autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garantías individuales; por tanto, se necesita que pruebe que existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga no sea considerada como violatoria de garantías. La carga de la prueba, incuestionablemente, toca la autoridad; porque el que destruye un estado jurídico o el que alega una excepción, es el que debe probar los hechos; si la autoridad no rinde esa prueba y se limita a afirmar que obró con justificación, no puede fallarse en su favor, ni negarse el amparo, sino que, por el contrario, debe concederse.


Amparo penal en revisión 459/34. Rosado García Carlos. 25 de julio de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Con fundamento con lo descrito en el cuerpo del presente ocurso, si bien es cierto que la quejosa suscrita carece de legitimación para formular la solicitud de la facultad de atracción ante el Máximo Tribunal Constitucional del país, es más cierto que los juicios de amparo citados a lo largo del éste escrito son hechos notorios que el caso concreto es un estado de restricción de derechos decretado formalmente por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a su Señoría **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**; actualmente Ocurro y pido:

ÚNICO. – Tomar en cuenta, encarecidamente, el principio pro persona, ya que, si bien es cierto, procede recurso de reclamación, contra las providencias o acuerdos del Presidente del Alto Tribunal del país, la quejosa se permite respetuosamente ante su Señoría, solicitar: **revisión oficiosa de decreto de restricción o suspensión de derechos, con fundamento en el artículo 29, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

Protesto lo necesario


Martha Patricia González Nava

Ciudad de México a 15 de marzo de 2019.

011760

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

523 2019/

2019 FEB 15 AM 11 35

OFICINA DE
CERTIFICACION JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido de un envase en (81) pgs
cm:
— Cho copia del mismo

Cryptol.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA

VARIOS NÚMERO: 1240/2018-VRNR

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Escrito original con firma autógrafa de Martha Patricia González Nava , con número de registro 000961 , recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y anexos.	Original en 8 fojas y anexos en copia simple.

Las constancias referidas anteriormente se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día nueve de enero de dos mil diecinueve. Conste.

Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Agréguese el escrito de la promovente y anexos al expediente varios respectivo. **Ahora bien**, del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como del escrito de mérito, se advierte por una parte, que la promovente desahoga la prevención efectuada por proveído presidencial de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente en que se actúa en los siguientes términos: **"...solicito la Facultad de atracción del juicio de amparo 909/2018 substanciado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito... Facultad de atracción del recurso de Queja con**

número de expediente 1/2019 (la A quo desechó la denuncia de repetición del acto reclamado) y Recurso de Inconformidad 1/2019 (la A quo declaró como cumplimentada la ejecutoria de amparo)... Asimismo en el juicio de amparo 909/2018 y 260/2018... "(SIC). Ante ello, tanto de su análisis como de la consulta del Sistema de Informes de este Alto Tribunal, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se advierte que por lo que respecta a su solicitud para que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo 260/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, su pretensión es la misma a lo acordado por proveído dictado por el Presidente de este Alto Tribunal el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018, a través del cual se determinó desechar la solicitud planteada por la parte promovente citada al rubro; por lo que se refiere a su solicitud para que este Alto Tribunal conozca del recurso de queja 1/2019, así como del recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del mismo modo, es de concluirse que su pretensión es igual a lo acordado por proveídos dictados por el Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal los días once y veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en autos de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 7/2019 y de la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, a través de los cuales se sometió a consideración de la Ministra y de los Ministros integrantes de la Primera Sala, a fin de que determinen si alguno de ellos decide hacer suya las solicitudes de referencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción II, de la Ley



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **debe estarse a lo que se determine en esos expedientes**; en cuanto a su solicitud para que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **procede desechar por notoriamente improcedente la petición que se formula**, toda vez que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 85 de la Ley de Amparo vigente, **la referida promovente carece de legitimación para formular tal solicitud**, ya que ésta corresponde hacerla, en todo caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento o al Procurador General de la República. En mérito de todo lo anterior, y con apoyo, además, en los artículos 10, fracción XII, y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **se acuerda:**

I. Dígasele a la parte promovente que debe estarse a lo determinado en los expedientes de solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018 y 7/2019, así como en el diverso expediente de solicitud de reasunción de competencia 10/2019.

II. Se desecha, por notoriamente improcedente la petición de solicitud de ejercicio de facultad de atracción que formula la promovente citada en la cuenta.

III. La parte —no los autorizados de ésta en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrá solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí

o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

IV. Únicamente la parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para ello, podrá solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

V. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala la **parte promovente** en su escrito de agravios; en la inteligencia de que si acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se les tendrá como autorizadas con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas ya tienen reconocida expresa o implícitamente, dentro del juicio de amparo el aludido carácter en los términos amplios antes descritos, dicha autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia.

VI. **Notifíquese por lista;** y personalmente a la promovente, en el domicilio que se encuentra señalado para tal efecto en el escrito que se provee, en la Ciudad de México, de conformidad con lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo de este Alto Tribunal como asunto concluido.**

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

A

C

U

E

R

D

Esta hoja corresponde al expediente VARIOS 1240/2018. Conste.

RCC/EMA/aysh

En **13 FEB 2019** por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al interesado de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe



SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VARIOS NÚMERO: 1240/2018-VRNR.

CITATORIO.

PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA.

DOMICILIO: CALLE TABAQUEROS NÚMERO 43, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO.

AUTORIZADO:

Para la práctica de una diligencia judicial de carácter personal, ordenada por el **Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, se servirá(n), usted(es) acudir al local que ocupa la Actuaría de este Máximo Tribunal, ubicado en la calle Pino Suárez número 2, primer piso, puerta 2010, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, de esta Ciudad, **dentro del horario de atención al público, esto es, de las nueve a las quince horas**, a fin de que se le notifique el proveído de **veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en el VARIOS: 1240/2018-VRNR (000961)**, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha en que se deja el presente citatorio, apercibido(s) que de no comparecer en el plazo indicado, se notificará el proveído en mención, por medio de lista que se fijara en los Estrados de este Máximo Órgano Jurisdiccional; y por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Alto Tribunal, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

Hago constar que siendo las once horas con quince minutos del día cinco del mes de marzo de dos mil diecinueve, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, dejo el presente citatorio en virtud de no haberlo (s) encontrado (s), que fue entregado a: Julio Cesar González Nava

quien manifestó ser: Familiar de la promovente

se identifica con: Credent para votar con clave de elector: GNMYSU903310PH200, expedido por el Tribunal Nacional Electoral

haciéndole (s) saber, que dicha diligencia tiene por objeto notificarle (s), de manera personal el acuerdo de **veintinueve de enero de dos mil diecinueve**, dictado por el **Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**.

Ciudad de México a cinco de marzo de dos mil diecinueve.

ACTUARIO JUDICIAL

LIC. BENJAMÍN CAMACHO VELÁZQUEZ.

Recibi citatorio
Julio Cesar González Nava

05/Marzo/2019



**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EXPEDIENTE: VARIOS NÚMERO: 1240/2018-VRNR

En la Ciudad de México, siendo las **once horas, con quince minutos, del cinco de marzo de dos mil diecinueve**, el que suscribe licenciado Benjamín Camacho Velázquez, Actuario Judicial, adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar que me constituí en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, ubicado en **CALLE TABAQUEROS NÚMERO 43, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO**; en busca **DE LA PARTE PROMOVENTE AL RUBRO CITADA**, y no encontrándola pero cerciorado de que ahí puede ser notificada, en virtud de haberlo indicado Julio César González Nava, quien manifestó ser familiar de la promovente, asimismo, se identificó con credencial para votar con clave de elector GNNVJL9083109H200, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que contiene una fotografía, misma que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha persona, el cual se devuelve en el momento; a quien procedí a dejar citatorio, con el objeto de que a la promovente, se le practique la diligencia judicial de carácter personal, ordenada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se sirvan acudir al local que ocupa la Actuaría de este Máximo Tribunal, ubicado en la calle Pino Suárez número 2, primero piso, puerta 2010, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, de esta Ciudad, a fin de que se le notifique el proveído de **veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en el VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR**, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha en que se deja el presente citatorio, apercibidos que de no comparecer en el plazo indicado, se notificara el proveído en mención, por medio de lista que se fijará en los Estrados de este Máximo Órgano Jurisdiccional, y por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Alto Tribunal, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; que recibe de conformidad dicho citatorio y sí firma para constancia legal. Doy fe.

ACTUARIO JUDICIAL

LIC. BENJAMÍN CAMACHO VELÁZQUEZ.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

NOTIFICACIÓN POR LISTA RELATIVA AL VARIOS NÚMERO: 1240/2018-VRNR.

PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA.

En la Ciudad de México, a **once de marzo de dos mil diecinueve**, el suscrito licenciado Benjamín Camacho Velázquez, Actuario Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar que con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo a la promovente el apercibimiento ordenado en la razón que antecede, toda vez que, no se presentaron ante este Alto Tribunal a notificarse personalmente del acuerdo de fecha veintinueve de enero del dos mil diecinueve, dictado por el Presidente del Máximo Tribunal en el expediente en que se actúa; por tanto, el término de dos días hábiles siguientes concedido a la promovente, transcurrió del seis al siete de marzo del presente año; en consecuencia, **se procede a notificar por medio de lista el acuerdo de referencia**, dictado en los autos del expediente citado al rubro, lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Doy fe.

Lic. Benjamín Camacho Velázquez.
Actuario Judicial

RAZÓN: En la Ciudad de México, **siendo las ocho horas del día once de marzo de dos mil diecinueve**, por las razones anotadas y con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la promovente el proveído de **veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por medio de lista** que se fija en lugar visible y de fácil acceso en los estrados del Alto Tribunal, así como en el portal de internet de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy Fe.

Lic. Benjamín Camacho Velázquez.
Actuario Judicial

El **doce de marzo de dos mil diecinueve**, surtió todos los efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden, en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor. Doy Fe.

Lic. Benjamín Camacho Velázquez.
Actuario Judicial



LISTA DE NOTIFICACIONES

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN	EXPEDIENTE	PARTES	FECHA Y EXTRACTO DEL ACUERDO
	1240/2018-VRNR-QUEJA (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO) VARIOS EMA	SOLICITANTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA	29/enero/2019 CITATORIO I. Dígasele a la parte promovente que debe estarse a lo determinado en los expedientes de solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018 y 7/2019, así como en el diverso expediente de solicitud de reasunción de competencia 10/2019. II. Se desecha, por notoriamente improcedente la petición de solicitud de ejercicio de facultad de atracción que formula la promovente citada en la cuenta. III. La parte —no los autorizados de ésta en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrá solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable. IV. Únicamente la parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para ello, podrá solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos. V. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala la parte promovente en su escrito de agravios; en la inteligencia de que si acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se les tendrá como autorizadas con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas ya tienen reconocida expresa o implícitamente, dentro del juicio de amparo el aludido carácter en los términos amplios antes descritos, dicha autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia. VI. Notifíquese por lista; y personalmente a la promovente, en el domicilio que se encuentra señalado para tal efecto en el escrito que se provee, en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento. Cumplido lo anterior, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo de este Alto Tribunal como asunto concluido.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019.

SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE
ACTUARIA

LIC. SANDRA ILIANA REYES CARMONA

BOLETA DE RADICACIÓN Y TURNO**RECURSO DE RECLAMACIÓN****573/2019****/03/2019****1) TIPO DE TURNO.**DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ASUNTO, ÉSTE DEBE TURNARSE EN¹:**PRIMERA SALA** ☒**SEGUNDA SALA** ☐

LOS RECURSOS DE RECLAMACIÓN, SE TURNARÁN ATENDIENDO A LA MATERIA EN QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN, TOMANDO EN CUENTA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS QUE PARA EFECTO DEL TURNO ENTRE LAS SALAS DE ESTE ALTO TRIBUNAL DERIVA DE LO PREVISTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL 5/2013, DEL PLENO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL TRECE Y LOS ARTÍCULOS 37 Y 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

1.1 TURNO CRONOLÓGICO (**X**)

1.2 TURNO RELACIONADO

1.3 TURNO POR DETERMINACIÓN DEL PLENO ()

1.4 EL ASUNTO PERTENECE A ALGUNA COMISIÓN ()

Tema de la Comisión:

OBSERVACIONES:

SECRETARIO AUXILIAR	SUPERVISOR
LIC. ELIZABETH MARQUEZ ALEJANDRÉ	LIC. RAFAEL COELLO CETINA

2) TURNO.

TOMANDO EN CUENTA LO ANTES PRECISADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDICADOS, EL TURNO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE ASUNTO, CONSIDERANDO EL QUE SE ASIGNÓ A LOS DOS ANTERIORES DEL MISMO TIPO DE ASUNTO, ES EL SIGUIENTE:

ANTERIORES	INSTANCIA	MINISTRO
508/2019	1a. Sala	González
571/2019	1a. Sala	Pineda

TURNO QUE SE OTORGA	INSTANCIA	MINISTRO
573/2019	1a. Sala	González Akánkiri

LIC. MONICA FERNANDA ESTEVANE NÚÑEZ

¹ MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN SELECCIONADA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

91
FORMA A-54

RECURRENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA

RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚMERO:
573/2019 DERIVADO DEL VARIOS
1240/2018-VRNR

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo siguiente:

Contenido	Presentado en:
Escrito original de expresión de agravios con firma autógrafa de Martha Patricia González Nava, registrado con el número de folio 011760 , recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.	Original y copia simple en 81 fojas.

Las constancias referidas en la cuenta se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día quince de marzo de dos mil diecinueve. Conste.

Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil diecinueve.

Visto lo señalado en la certificación de esta fecha, dictada en el **expediente varios número 1240/2018-VRNR** y en términos de la normativa aplicable, con el original del escrito de la parte recurrente señalado en la cuenta, copia simple del acuerdo impugnado y de su constancia de notificación, **fórmense y registrense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al recurso de reclamación 573/2019**. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar al que deberán agregarse los documentos que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes atendiendo a la normativa aplicable. **Ahora bien** del análisis de las constancias de mérito se advierte que **Martha Patricia González Nava**, hace valer un

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR**

recurso de reclamación en contra del proveído dictado por esta Presidencia el **veintinueve de enero de dos mil diecinueve**, en el expediente varios número **1240/2019-VRNR**, a través de la cual determinó se desechar, por notoriamente improcedente su petición de solicitud de ejercicio de facultad de atracción y, además, se le comunicó que en relación con sus diversas peticiones debía estarse a lo determinado en los expedientes de solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018 y 7/2019, así como en el expediente de solicitud de reasunción de competencia 10/2019; y como el presente asunto se encuentra debidamente integrado tórnese a la **Primera Sala de este Alto Tribunal**, atendiendo a la materia en que incide el acto reclamado, el cual consiste en los actos del **Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, tomando en cuenta la distribución de materias que para efecto del turno entre las Salas de este Alto Tribunal deriva de lo previsto en el Punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, así como en el artículo 37 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, instrumentos normativos modificados por última vez mediante los diversos de nueve de septiembre y diez de junio, ambos de dos mil trece, respectivamente. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 80 y 104 de la Ley de Amparo vigente, así como 10, fracción V y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **se acuerda:**

I. Con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie puedan existir, se tiene por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer la parte recurrente citada al rubro.

II. Con fundamento en el artículo 81, párrafo primero del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR

túrnese el expediente para su estudio, al **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Presidente de la Primera Sala, de este Alto Tribunal**, por ser a quien corresponde el turno por **estricto decanato**, conforme al registro que al efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, y radíquese en aquélla, en virtud de que el presente expediente incide en la materia de su especialidad, y envíense los autos a dicha Sala, a fin de que como Presidente dicte el acuerdo de radicación respectivo. **En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador de la penencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.**

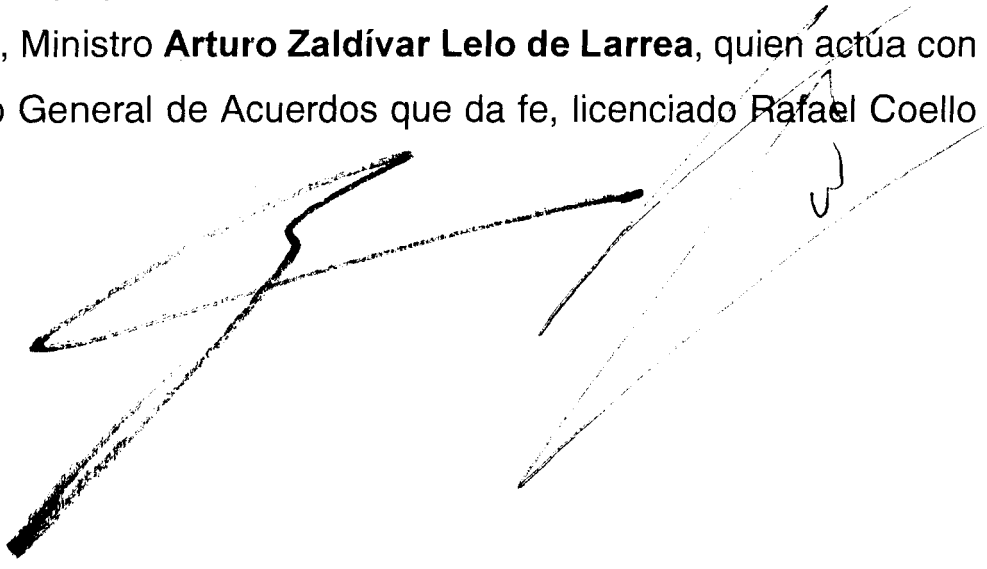
III. La parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

IV. Únicamente la parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para ello, podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR**


V. Notifíquese; y, por medio del MINTERSCJN, al **Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, en la inteligencia de que en los términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo general Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro **Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado **Rafael Coello Cetina**.



RCC/EMA/aysh

En 10 ABR 2019 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al interesado de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe





Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Fecha de envío: 10/04/2019 8:51:45

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

Núm. de oficio en SCJN: MI/PL/SSGA/VIII TER/3175/2019

Fecha de ingreso de acuerdo: 08/04/2019 23:44:13

Fecha de acuerdo: 20/03/2019

Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo: ...se tiene por interpuesto el recurso de reclamación...túrnese el expediente para su estudio, al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá...La parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico...Notifíquese...

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. en órgano destinatario	Constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo	0/0 NINGUNO		(6) ORIGINAL
Fecha de acuerdo: 20/03/2019			

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Generico125871_-610_833662.pdf
Secuencia: 2542560

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO FERNANDEZ MORALES	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	FEMM700902HDFRRR02			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000eb5	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/04/2019T13:51:48Z / 10/04/2019T08:51:48-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	10 ce 46 03 94 b2 94 8b 40 c7 01 f4 b5 85 6e 56 46 e2 99 94 7d 8c f6 0a cd 5e 9a 18 37 5f 78 16 66 f2 2b 7c f3 5b dd de 7d 06 30 88 8b 72 1f 93 56 51 bf 71 e9 79 5a d0 08 ee e8 7e 40 cb d3 09 cc 48 71 fd 7e 58 5d 2d ac df 10 d2 b5 e1 1c 6d 33 34 d9 f0 82 6e 62 9b 28 e3 4e 19 5f c6 d8 a0 af af 0c d9 27 2d e3 11 b8 f8 cf cb d7 5c e6 50 8a f0 04 16 a5 b0 2a 50 57 42 5a 34 c0 77 8e 8b 90 bc ac 39 17 83 5f 0d 4f 39 5e 5f 84 4e b9 2f 49 4f e7 bd 9c 6d 15 e2 10 40 d4 ab 53 02 7e 85 97 55 72 91 6e 45 a6 f0 b6 10 b3 51 70 2c 90 b0 d4 cd 5a 3d 46 41 9b dd 29 f8 f4 42 a9 9a ba 02 73 b5 c6 7d 69 7d b0 8b 13 c8 e9 5a 0b 95 b0 db 6a 44 08 30 13 31 21 aa 7a 38 85 84 a9 6e 8e 3b 69 92 cd eb cc b4 66 bc 3e 54 fb 29 23 49 63 de ad 57 dd c2 db 94 36 39 a9 86 ff 92 88 4e c4 5d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/04/2019T13:51:50Z / 10/04/2019T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000eb5			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	10/04/2019T13:51:48Z / 10/04/2019T08:51:48-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2545722			
	Datos estampillados:	BDFB7E6E546DED27E119C5DEA79F0CD76F5B4BBE			

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2019 FEB 26 PM 17 22

PRUEBA SALA SECRETARIA DE ACUERDOS



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 24100/2019

Fecha de envío de la SCJN: 10/04/2019 08:51

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, PARA CONOCIMIENTO

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/VIII TER/3175/2019

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción del órgano remitente: 10/04/2019 11:20

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	(6) ORIGINAL	6 FOJAS

Fecha de acuerdo: 20/03/2019

*En el cómputo del número de fojas se incluye la hoja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion125871.pdf
Secuencia: 2543356

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOAQUIN NEYRA DENICIA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	NEDJ790620HMCYNQ04			
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000b325	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/04/2019T16:21:25Z / 10/04/2019T11:21:25-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	92 ac 4d ae 9d f2 f3 fd e5 03 a4 4d 0f 7f df b2 1c 53 f5 c3 47 44 f4 e7 e4 7c 2a 3d 0a d2 a6 d0 4e a4 28 2a 0b e0 fc a8 a3 87 e1 99 1b 0b ce 3f 07 f9 d3 50 b5 ba 46 40 76 28 72 70 99 bc 23 e9 37 f7 5e 71 a6 b0 79 23 0a 04 5b 33 f7 c2 16 ae de f4 a9 f5 d7 d7 e0 9d e0 1a 1b ff d8 c0 b1 d5 ff be ae 12 5d d9 27 c4 e7 46 ee c3 fb 9e 68 84 0f db 1b f3 c8 5f 7b 17 1e 1d 39 63 34 46 49 fc 54 8c 4a 87 47 f5 a3 e6 ff f8 55 a6 e6 0f cf 1c 8f ed 3c 64 90 ac 8c 89 e9 b9 e3 c9 c3 a9 a0 dc 51 c4 a7 6c fe b0 3d 78 0a 60 9d 06 33 ae b0 de c6 c6 72 70 7b 9e 94 3d 38 87 4a 42 ba 5a 6e d1 f6 b4 c0 35 61 86 40 d3 99 83 44 76 05 7f 1b fc d8 01 47 63 e5 c8 db 34 67 68 2c 3b 98 84 58 0b 26 88 85 0f d7 e2 9e 1b 84 76 c2 41 d4 ac 98 d7 01 19 14 ac 06 80 23 ce 4f 9b 6d 29 5c 50 64 82			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/04/2019T16:20:44Z / 10/04/2019T11:20:44-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000000b325			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	10/04/2019T16:21:25Z / 10/04/2019T11:21:25-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2546519			
	Datos estampillados:	4B01C185D6FE51CC2078EDECB37AF6264B3920ED			

OFFICE

1911

1911



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO

Fecha de envío a la SCJN: 10/04/2019 11:20:00

Tipo y núm de exp. en SCJN: RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

Ciudad de México, a 10/04/2019

Por acuerdo presidencial, la(e) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 22446-MINTER**, constante de 3 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA.

MVS/EBF

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

2019 ABR 10 PM 2 30

Suprema Corte de Justicia de la Nación

FIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
SECRETARIA
PREFECTURA



REFERENCIA
011760

RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
EN EL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En treinta de abril de dos mil diecinueve, la Subsecretaria de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el proveído de veinte marzo del año en curso, dictado por la Presidencia de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a treinta de abril de dos mil diecinueve.

Visto el acuerdo de la Presidencia de este Alto Tribunal con el que se da cuenta, ténganse por recibidos los autos del recurso de reclamación citado a rubro.

Con fundamento en el Punto Tercero del Acuerdo 5/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los artículos 81, primer párrafo, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; 21, fracción XI y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SE AVOCA al conocimiento del presente asunto; por ende, hágase el registro de ingreso del mismo como corresponda.

Envíense los autos a la Ponencia del **MINISTRO** que **suscribe**, a fin de que elabore el proyecto de resolución que corresponda y con él dé cuenta a esta Sala.

Notifíquese.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA

RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
EN EL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Subsecretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada Elsa Gutiérrez Olguín.



MVS/EBF

El 22 MAY 2019, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR
RECURRENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA**

**PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO
COLABORÓ: JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**

ÍNDICE

	PÁGINAS
SÍNTESIS	I
I. ANTECEDENTES	2
II. TRÁMITE	2
III. PRESUPUESTOS PROCESALES	3
IV. ESTUDIO	4
V. DECISIÓN	10

ANEXOS

- I. SOLICITUD DESECHADA**
- II. ACUERDO IMPUGNADO**
- III. RECURSO DE RECLAMACIÓN**

4789

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR
RECURRENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA**

**PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO
COLABORÓ: JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**

S Í N T E S I S

Antecedentes: Martha Patricia González Nava interpuso un escrito al que denominó "recurso de queja", en el cual hizo diversas manifestaciones a este Alto Tribunal. Ante la falta de claridad del escrito, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación previno a la persona para que aclarara la finalidad de su escrito. La promovente solicitó la facultad de atracción de dos juicios de amparo indirecto, un recurso de queja y un recurso de inconformidad. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por notoriamente improcedentes, las referidas solicitudes de atracción.

Acuerdo recurrido: El emitido el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el expediente Varios 1240/2018-VRNR, por medio del cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las solicitudes de atracción intentadas, al considerarlas notoriamente improcedentes.

El proyecto propone: Declarar infundado el presente recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido.

El proyecto indica que son infundados los argumentos que afirman la ilegalidad del acuerdo impugnado, pues fue correcto que el Presidente de este Alto Tribunal no acordara favorablemente la solicitud de atracción del juicio de amparo indirecto 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ello, en razón de que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, la cual refiere que este Alto Tribunal puede atraer amparos directos y amparos en revisión, mas no amparos indirectos en primera instancia.

Por otra parte, se observa que esta Primera Sala al resolver el recurso de reclamación 1734/2018, confirmó un acuerdo dictado el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018. En la resolución de dicho asunto, se determinó no atraer el juicio de amparo 260/2016, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (siendo uno de los asuntos que se decidió no atraer en el acuerdo impugnado), en virtud de que no existía supuesto constitucional para que este Alto Tribunal ejerciera la facultad para conocer de un juicio de amparo indirecto en primera instancia. En ese sentido, se considera que respecto de dicha solicitud, ya existe pronunciamiento en el que esta Sala ha decidido no atraer el referido asunto.

De igual forma, el acuerdo recurrido estuvo en lo correcto al no dar trámite a las solicitudes de atracción del recurso de queja 1/2019 y del recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En efecto, esta Primera Sala observa que dichas peticiones recayeron en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019 y de la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, las cuales estaban pendientes de ser consideradas por los Ministros que integran la Primera Sala, a fin de que alguno de ellos decidiera hacer suya o no las solicitudes de referencia.

Sin embargo, mediante acuerdo plenario de la Primera Sala de seis de marzo de dos mil diecinueve, se determinó que ninguno de los ministros hizo suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019; asimismo, se desechó la solicitud, ya que la promovente carecía del legitimación para solicitarla, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal. En los mismos términos, se resolvió la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, ello mediante acuerdo plenario de la Primera Sala dictado el trece de marzo de dos mil diecinueve.

Aunado a lo anterior, a partir de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), se observa que el recurso de queja 1/2019 y el recurso de inconformidad 1/2019, ya fueron resueltos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al respecto, el recurso queja 1/2019, fue resuelto en sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y; el recurso de inconformidad 1/2019, fue resuelto en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve.

Por todo lo anterior, esta Sala considera que el acuerdo recurrido estuvo en lo correcto al no dar trámite a ninguna de las solicitudes de atracción que la recurrente pretendía que este Alto Tribunal conociera. Lo anterior, porque por una parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede atraer un amparo indirecto en primera instancia; por otra parte, el otro amparo indirecto ya fue objeto de estudio en un diverso recurso de reclamación y; finalmente, los recursos de queja e inconformidad, ya fueron desestimados para su atracción, por los ministros integrantes de esta Primera Sala.

Finalmente, el proyecto considera inoperantes el resto de los agravios del recurso de reclamación, en virtud de que no combaten de manera alguna las consideraciones y fundamentos que sustentan el acuerdo recurrido.

Puntos resolutivos:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación 573/2019, a que este expediente se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el expediente Varios 1240/2018-VRNR.

Tesis que se cita en el proyecto:

“FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA”.

“AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO”

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES”.

SIN-TEXTC

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR
RECURRENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA**

**PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCA
SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO
COLABORÓ: JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**

11 Páginas

SUMARIO

Una persona interpuso un escrito al que denomino "recurso de queja", en el cual hizo diversas manifestaciones a este Alto Tribunal. Ante la falta de claridad del escrito, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación previno a la persona para que aclarara la finalidad de su escrito. La promovente solicitó la facultad de atracción de dos juicios de amparo indirecto, un recurso de queja y un recurso de inconformidad. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por notoriamente improcedentes, las referidas solicitudes de atracción. Este último acuerdo constituye la materia de análisis en el presente asunto.

CUESTIONARIO

¿Los agravios de la recurrente desvirtúan la legalidad del acuerdo de trámite impugnado?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de _____ de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente al recurso de reclamación 573/2019, interpuesto por Martha Patricia González Nava en contra del acuerdo dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 1240/2018-VRNR.

I. ANTECEDENTES

1. Martha Patricia González Nava interpuso un escrito al que denomino “recurso de queja”, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual hacía una serie de manifestaciones.
2. Por lo anterior, mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la previno para que precisara la finalidad de su escrito, pues no se advertía con exactitud el medio de defensa que pretendía hacer valer, el acuerdo que impugnaba, la autoridad y la fecha de la emisión, así como el expediente del que surgió.
3. La promovente desahogó la prevención y manifestó que solicitaba la facultad de atracción para que este Alto Tribunal conociera de dos juicios de amparo indirectos, un recurso de queja y un recurso de inconformidad.
4. Las solicitudes fueron desechadas por el Presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, al considerarlos notoriamente improcedentes.¹

II. TRÁMITE

5. Martha Patricia González Nava interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo arriba precisado, mediante escrito presentado el

¹ Expediente Varios 1240/2018-VRNR, páginas 43 a 45.

quince de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.²

6. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el recurso de reclamación 573/2019 y, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran existir, turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y lo remitió a esta Primera Sala para el trámite de avocamiento.³
7. Finalmente, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto que ahora se resuelve mediante acuerdo dictado por su Presidente el treinta de abril de dos mil diecinueve.⁴

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente⁵ para conocer el presente recurso de reclamación que fue interpuesto en forma oportuna⁶ y por parte legitimada.⁷

² Cuaderno en que se actúa, páginas 2 a 82.

³ *Ibíd.*, páginas 91 y 92.

⁴ *Ibíd.*, página 97.

⁵ Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Tercero en relación con el Segundo del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia el trece de mayo de dos mil trece.

⁶ El acuerdo impugnado fue notificado por lista el lunes once de marzo de dos mil diecinueve, surtió sus efectos el martes doce del mismo mes y año. Así, el plazo de tres días para la interposición del recurso de reclamación transcurrió del miércoles trece al viernes quince de marzo de dos mil diecinueve. Luego, si el recurrente interpuso el recurso de reclamación el quince de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación resulta oportuna.

⁷ En virtud de que fue suscrito por Martha Patricia González Nava, quien interpuso las solicitudes de atracción que fueron desechadas en el auto recurrido.

IV. ESTUDIO

9. **Acuerdo impugnado.** El Presidente de este Alto Tribunal determinó que respecto a la solicitud de atracción del juicio de amparo indirecto 260/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, se tenía que observar lo acordado el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018, en la que se desechó la solicitud planteada por la promovente.
10. Asimismo, indicó que en lo referente a la atracción del recurso de queja 1/2019, y el recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se tenía que acatar lo acordado en los acuerdos de once y veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en los autos de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 7/2019 y la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, a través de los cuales se sometió a consideración de la Ministra y los Ministros integrantes de la Primera Sala, a fin de que determinaran si alguno de ellos hacia suyas las solicitudes de referencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debía estarse a lo que se resolviera en esos expedientes.
11. Finalmente, en lo concerniente a la solicitud de atracción del juicio de amparo 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se desechó por notoriamente improcedente, en razón de que la promovente carecía de legitimación para formular la solicitud, ello de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Federal; 40 y 85 de la Ley de Amparo.

12. **Agravios.** La recurrente expone, esencialmente, los siguientes argumentos:

- a. Alega que en diversas ocasiones ha denunciado violaciones flagrantes y sistemáticas sus derechos humanos, en virtud de que se han realizado diversas obras que están provocando el derrumbamiento de su domicilio, ello con la aquiescencia del Estado Mexicano. En ese sentido, dice que es un hecho notorio la promoción de múltiples amparos en los que no se han atendido sus demandas.
- b. Menciona que diversas autoridades de la Alcaldía de Magdalena Contreras y de la Jefatura de Gobierno, están obstaculizando sus procesos judiciales con sus influencias políticas, aunado a que ha sido perseguida ella y su familia con maltratos e imputaciones falsas.
- c. Argumenta que la Comisión Federal de Electricidad pretende privarla de energía eléctrica, ya que la han amenazado de cortarles dicho servicio, a partir de la invención de cobros indebidos.
- d. Señala que dictámenes oficiales en ingeniería y arquitectura evidencian que su vivienda está en peligro de derrumbamiento, en razón de que la circulación de vehículos en el Andador Tabaqueros no tiene muros de contención que permitan garantizar la seguridad de las personas que habitan su vivienda.
- e. Indica que el Estado Mexicano incumple con la observancia de diversos preceptos de la Constitución Federal, así como de diversos instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- f. Alude que el Presidente de la Republica violenta el artículo 29 de la Constitución Federal, debido a que se le suspendió y restringió sus derechos humanos básicos, lo cual ni en conflictos armados es

permitido y que además está prohibido por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

- g. Arguye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de todos aquellos asuntos en los que exista invasión en la esfera de competencias. En consecuencia, dijo que el Gobierno del Distrito Federal invadió las competencias del Ejecutivo Federal, ya que se decretó un estado de excepción de facto en contra de la recurrente.
- h. Señala que diversos órganos del estado violentaron su derecho debido proceso legal, en virtud de que toda persona debe ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable; en ese sentido, manifiesta que ha sido ignorada y han pasado años tratando de que se le haga justicia.
- i. Argumenta que de acuerdo a la doctrina desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se observa que el derecho de acceso a una jurisdicción efectiva comprende la creación de un recurso rápido y sencillo; en ese sentido, considera que a través del juicio de amparo se le tiene que restablecer el goce de sus derechos trasgredidos.
- j. Alega que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pueden investigar oficiosamente o a petición de parte las violaciones a sus derechos humanos; sin embargo, menciona que sólo han sido cómplices de dichas violaciones.
- k. Argumenta que el Presidente de la República la ha discriminado de manera racial y económica, de ahí que se vea su derecho a la igualdad de las personas ante la Ley.
- l. Solicita que se haga una revisión oficiosa del actuar de diversas autoridades, a efecto de que se observe el derecho de acceso a la justicia.

13. **Problemática jurídica a resolver.** La materia del presente asunto consiste en verificar la legalidad del acuerdo de trámite emitido por el

Presidente de este Alto Tribunal. Esta problemática será analizada, por cuestión de metodología, en función de la siguiente pregunta:

- **¿Los agravios de la recurrente desvirtúan la legalidad del acuerdo de trámite impugnado?**

14. La respuesta a esta interrogante es negativa, en virtud de las siguientes consideraciones:
15. Resultan infundados los argumentos que afirman la ilegalidad del acuerdo impugnado, pues fue correcto que el Presidente de este Alto Tribunal no acordara favorablemente la solicitud de atracción del juicio de amparo indirecto 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ello, en razón de que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal⁸, la cual refiere que este Alto Tribunal puede atraer amparos directos y amparos en revisión, mas no amparos indirectos en primera instancia.

⁸ Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[...]

V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

[...]

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

[...]

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

[...]

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

16. Al respecto, esta Sala comparte el criterio aislado 2^a.CLXV/2008, emitido por la Segunda Sala, cuyo rubro establece: “FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA”.⁹
17. Por otra parte, se observa que esta Primera Sala al resolver el recurso de reclamación 1734/2018¹⁰, confirmó un acuerdo dictado el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018. En la resolución de dicho asunto, se determinó no atraer el juicio de amparo 260/2016, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (siendo uno de los asuntos que se decidió no atraer en el acuerdo impugnado), en virtud de que no existía supuesto constitucional para que este Alto Tribunal ejerciera la facultad para conocer de un juicio de amparo indirecto en primera instancia. En ese sentido, se considera que respecto de dicha solicitud, ya existe pronunciamiento en el que esta Sala ha decidido no atraer el referido asunto.
18. De igual forma, el acuerdo recurrido estuvo en lo correcto al no dar trámite a las solicitudes de atracción del recurso de queja 1/2019 y del recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En efecto, esta Primera Sala observa que dichas peticiones recayeron en los

⁹ Consultable en la Novena del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2009, tomo XXIX, página 784, registro 168136.

¹⁰ Resuelto por unanimidad de votos, en sesión de seis de febrero de dos mil diecinueve.

autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019 y de la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, las cuales estaban pendientes de ser consideradas por los Ministros que integran la Primera Sala, a fin de que alguno de ellos decidiera hacer suya o no las solicitudes de referencia.

19. Sin embargo, mediante acuerdo plenario de la Primera Sala de seis de marzo de dos mil diecinueve, se determinó que ninguno de los ministros hizo suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019; asimismo, se desechó la solicitud, ya que la promovente carecía de legitimación para solicitarla, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal. En los mismos términos, se resolvió la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, ello mediante acuerdo plenario de la Primera Sala dictado el trece de marzo de dos mil diecinueve.
20. Aunado a lo anterior, a partir de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), se observa que el recurso de queja 1/2019 y el recurso de inconformidad 1/2019, ya fueron resueltos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al respecto, el recurso queja 1/2019, fue resuelto en sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y; el recurso de inconformidad 1/2019, fue resuelto en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve.
21. Por todo lo anterior, esta Sala considera que el acuerdo recurrido estuvo en lo correcto al no dar trámite a ninguna de las solicitudes de atracción que la recurrente pretendía que este Alto Tribunal conociera. Lo anterior, porque por una parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede atraer un amparo indirecto en primera

instancia; por otra parte, el otro amparo indirecto ya fue objeto de estudio en un diverso recurso de reclamación y; finalmente, los recursos de queja e inconformidad, ya fueron desestimados para su atracción, por los ministros integrantes de esta Primera Sala.

22. Finalmente, son **inoperantes** el resto de los agravios del recurso de reclamación, en virtud de que no combaten de manera alguna las consideraciones y fundamentos que sustentan el acuerdo recurrido. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 7/2003, de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO"¹¹.

V. DECISIÓN

23. Por las razones expuestas y al no existir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede declarar **infundado** el presente recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido.
24. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

RESUELVE

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación 573/2019, a que este expediente se refiere.

¹¹ Consultable en la Novena del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2003, tomo XVII, página 32, registro 185000.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el expediente Varios 1240/2018-VRNR.

Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.



SECRETARÍA
DE LA
CORTA
DE LA
NACIÓN

CALIFORNIA

100
100
50



PRIMERA SALA

RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL EXPEDIENTE VARIOS 1240/2018-VRNR
RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México, a **dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.**

Se hace constar, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el presente asunto se encuentra listado para verse en la audiencia del día **veintinueve de mayo de dos mil diecinueve** y siguientes.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA

LIC. VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO

Ciudad de México, a **veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.**

Se hace constar, con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en sesión de esta fecha, se resolvió:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación 573/2019, a que este expediente se refiere.- **SEGUNDO.** Se confirma el acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve en el expediente Varios 1240/2018-VRNR.

VOTACIÓN

SI	MINISTROS	NO	SE RESERVAN EL DERECHO DE FORMULAR VOTOS
/	NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ		
/	LUIS MARÍA AGUILAR MORALES		
/	JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO		
/	ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA		
/	JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ (Ponente) Presidente de la Primera Sala		

Así, por **unanimidad de cinco votos**, se aprobó la proposición anterior.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA

LIC. VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO

C

F

~~X~~

A

F

Z

H

I



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

108
FORMA A-55

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR**

**RECURRENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA**

**PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO
COLABORÓ: JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**

SUMARIO

Una persona interpuso un escrito al que denominó "recurso de queja", en el cual hizo diversas manifestaciones a este Alto Tribunal. Ante la falta de claridad del escrito, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación previno a la persona para que aclarara la finalidad de su escrito. La promovente solicitó el ejercicio de la facultad de atracción de dos juicios de amparo indirecto, un recurso de queja y un recurso de inconformidad. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por notoriamente improcedente, la referida solicitud de atracción. Este último acuerdo constituye la materia de análisis en el presente asunto.

CUESTIONARIO

¿Los agravios de la recurrente desvirtúan la legalidad del acuerdo de trámite impugnado?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día **veintinueve de mayo de dos mil diecinueve**, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente al recurso de reclamación 573/2019, interpuesto por Martha Patricia González Nava en contra del acuerdo dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por el Presidente de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 1240/2018-VRNR.

I. ANTECEDENTES

1. Martha Patricia González Nava interpuso un escrito al que denominó “recurso de queja”, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual hacía una serie de manifestaciones.
2. Por lo anterior, mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la previno para que precisara la finalidad de su escrito, pues no se advertía con exactitud el medio de defensa que pretendía hacer valer, el acuerdo que impugnaba, la autoridad y la fecha de la emisión, así como el expediente del que surgió.
3. La promovente desahogó la prevención y manifestó que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción para que este Alto Tribunal conociera de dos juicios de amparo indirecto, un recurso de queja y un recurso de inconformidad.
4. La solicitud fue desechada por el Presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, al considerarla notoriamente improcedente.¹

II. TRÁMITE

5. Martha Patricia González Nava interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo arriba precisado, mediante escrito presentado el

¹ Expediente Varios 1240/2018-VRNR, páginas 43 a 45.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

quince de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.²

6. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el recurso de reclamación 573/2019, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran existir; así como turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y remitir los autos a esta Primera Sala para el trámite de avocamiento.³
7. Finalmente, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto que ahora se resuelve mediante acuerdo dictado por su Presidente el treinta de abril de dos mil diecinueve.⁴

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente⁵ para conocer el presente recurso de reclamación que fue interpuesto en forma oportuna⁶ y por parte legitimada.⁷

² Cuaderno en que se actúa, páginas 2 a 82.

³ *Ibid.*, páginas 91 y 92.

⁴ *Ibid.*, página 97.

⁵ Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con en el Punto Tercero en relación con el Segundo del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia el trece de mayo de dos mil trece.

⁶ El acuerdo impugnado fue notificado por lista el lunes once de marzo de dos mil diecinueve, surtió sus efectos el martes doce siguiente. Así, el plazo de tres días para la interposición del recurso de reclamación transcurrió del miércoles trece al viernes quince de marzo. Luego, si el recurrente interpuso el recurso de reclamación el quince de marzo del año en cita, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación resulta oportuna.

⁷ En virtud de que fue suscrito por Martha Patricia González Nava, quien interpuso la solicitud de ejercicio de la facultad atracción que fue desechada en el auto recurrido.

IV. ESTUDIO

9. **Acuerdo impugnado.** El Presidente de este Alto Tribunal determinó que respecto a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del juicio de amparo indirecto 260/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, se tenía que observar lo acordado el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018, en la que se desechó la solicitud planteada por la promovente.
10. Asimismo, indicó que en lo referente a la atracción del recurso de queja 1/2019 y del recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se tenía que acatar lo acordado en los acuerdos de once y veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019 y de la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, a través de los cuales se sometió a consideración de los ministros integrantes de la Primera Sala, a fin de que determinaran si alguno de ellos hacía suyas las solicitudes de referencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debía estarse a lo que se resolviera en esos expedientes.
11. Finalmente, en lo concerniente a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del juicio de amparo 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se desechó por notoriamente improcedente, en razón de que la promovente carecía de legitimación para formular la solicitud, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

b), párrafo segundo, de la Constitución Federal; 40 y 85 de la Ley de Amparo.

12. **Agravios.** La recurrente expone, esencialmente, los siguientes argumentos:

- a. Alega que en diversas ocasiones ha denunciado violaciones flagrantes y sistemáticas a sus derechos humanos, en virtud de que se han realizado varias obras que están provocando el derrumbamiento de su domicilio, ello con la aquiescencia del Estado Mexicano. En ese sentido, dice que es un hecho notorio la promoción de múltiples amparos en los que no se han atendido sus demandas.
- b. Menciona que diversas autoridades de la Alcaldía de Magdalena Contreras y de la Jefatura de Gobierno están obstaculizando sus procesos judiciales con sus influencias políticas, aunado a que ha sido perseguida ella y su familia con maltratos e imputaciones falsas.
- c. Argumenta que la Comisión Federal de Electricidad pretende privarla de energía eléctrica, ya que la han amenazado de cortar dicho servicio, a partir de la invención de cobros indebidos.
- d. Señala que dictámenes oficiales en ingeniería y arquitectura evidencian que su vivienda está en peligro de derrumbamiento, en razón de que la circulación de vehículos en el Andador Tabaqueros no tiene muros de contención que permitan garantizar la seguridad de las personas que habitan su vivienda.
- e. Indica que el Estado Mexicano incumple con la observancia de diversos preceptos de la Constitución Federal, así como de varios instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- f. Alude que el Presidente de la República violenta el artículo 29 de la Constitución Federal, debido a que se le suspendieron y restringieron sus derechos humanos básicos, lo cual ni en conflictos armados es permitido, y que además está prohibido por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
- g. Arguye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de todos aquellos asuntos en los que exista invasión en la esfera de competencias. En consecuencia, dijo que el Gobierno del Distrito Federal invadió las competencias del Ejecutivo Federal, ya que se decretó un estado de excepción de facto en contra de la recurrente.
- h. Señala que diversos órganos del estado violentaron su derecho al debido proceso legal, en virtud de que toda persona debe ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable; en ese sentido, manifiesta que ha sido ignorada y han pasado años tratando de que se le haga justicia.
- i. Argumenta que de acuerdo a la doctrina desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se observa que el derecho de acceso a una jurisdicción efectiva comprende la creación de un recurso rápido y sencillo; en ese sentido, considera que a través del juicio de amparo, se le tiene que restablecer el goce de sus derechos trasgredidos.
- j. Alega que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pueden investigar oficiosamente o a petición de parte las violaciones a sus derechos humanos; sin embargo, menciona que sólo han sido cómplices de dichas violaciones.
- k. Argumenta que el Presidente de la República la ha discriminado de manera racial y económica, de ahí que se vede su derecho a la igualdad de las personas ante la Ley.
- l. Solicita que se haga una revisión oficiosa del actuar de diversas autoridades, a efecto de que se observe el derecho de acceso a la justicia.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

13. **Problemática jurídica a resolver.** La materia del presente asunto consiste en verificar la legalidad del acuerdo de trámite emitido por el Presidente de este Alto Tribunal. Esta problemática será analizada, por cuestión de metodología, en función de la siguiente pregunta:

- **¿Los agravios de la recurrente desvirtúan la legalidad del acuerdo de trámite impugnado?**

14. La respuesta a esta interrogante es negativa, en virtud de las siguientes consideraciones:

15. Resultan infundados los argumentos que afirman la ilegalidad del acuerdo impugnado, pues fue correcto que el Presidente de este Alto Tribunal no acordara favorablemente la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del juicio de amparo indirecto 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ello, en razón de que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte final y VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal⁸, la cual refiere que este

⁸ "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[...]

V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

[...]

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

[...]

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

[...]

Alto Tribunal puede atraer amparos directos y amparos en revisión, mas no amparos indirectos en primera instancia.

16. Al respecto, esta Sala comparte el criterio aislado 2ª. CLXV/2008, emitido por la Segunda Sala, cuyo rubro establece: "FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA PARA EMITIR SENTENCIAS EN JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN PRIMERA INSTANCIA".⁹
17. Por otra parte, se observa que esta Primera Sala, al resolver el recurso de reclamación 1734/2018¹⁰, confirmó un acuerdo dictado el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 479/2018. En la resolución de dicho asunto se determinó no atraer el juicio de amparo 260/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (siendo uno de los asuntos que se decidió no atraer en el acuerdo impugnado), en virtud de que no existía supuesto constitucional para que este Alto Tribunal ejerciera la facultad de atracción para conocer de un juicio de amparo indirecto en primera instancia. En ese sentido, se considera que respecto de dicha solicitud ya existe pronunciamiento en el que esta Sala ha decidido no atraer el referido asunto.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. [...]"

⁹ Consultable en la Novena del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2009, tomo XXIX, página 784, registro 168136.

¹⁰ Resuelto por unanimidad de votos, en sesión de seis de febrero de dos mil diecinueve.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

18. De igual forma, el acuerdo recurrido estuvo en lo correcto al no dar trámite a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción del recurso de queja 1/2019 y del recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En efecto, esta Primera Sala observa que dichas peticiones recayeron en los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019 y de la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, las cuales estaban pendientes de ser consideradas por los ministros que integran la Primera Sala, a fin de que alguno de ellos decidiera hacer suya o no las solicitudes de referencia.

19. Sin embargo, mediante acuerdo plenario de la Primera Sala, de seis de marzo de dos mil diecinueve, se determinó que ninguno de los ministros hizo suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 7/2019; asimismo, se desechó la solicitud, ya que la promovente carecía de legitimación para solicitarla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal. En los mismos términos se resolvió la solicitud de reasunción de competencia 10/2019 mediante acuerdo plenario de la Primera Sala dictado el trece de marzo de dos mil diecinueve.

20. Aunado a lo anterior, a partir de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), se observa que el recurso de queja 1/2019 y el recurso de inconformidad 1/2019 ya fueron resueltos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al respecto, el recurso de queja 1/2019 fue resuelto en sesión de veintiocho de marzo de dos

mil diecinueve, y el recurso de inconformidad 1/2019, en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve.

21. Por todo lo anterior, esta Sala considera que el acuerdo recurrido estuvo en lo correcto al no dar trámite a ninguna de las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción que la recurrente pretendía que este Alto Tribunal conociera. Lo anterior, porque por una parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede atraer un amparo indirecto en primera instancia; por otra parte, el otro amparo indirecto ya fue objeto de estudio en un diverso recurso de reclamación; y, finalmente, los recursos de queja e inconformidad ya fueron desestimados para su atracción, por los ministros integrantes de esta Primera Sala.
22. Finalmente, es inoperante el resto de los agravios del recurso de reclamación, en virtud de que no combaten de manera alguna las consideraciones y fundamentos que sustentan el acuerdo recurrido. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 7/2003, de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO"¹¹.

V. DECISIÓN

23. Por las razones expuestas y al no existir queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede declarar **infundado** el presente recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido.

¹¹ Consultable en la Novena del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2003, tomo XVII, página 32, registro 185000.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

24. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

RESUELVE:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación 573/2019, a que este expediente se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve en el expediente Varios 1240/2018-VRNR.

Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por **unanimidad de cinco votos** de los señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente).

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE**MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**

SECRETARIA DE ACUERDOS



LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

VMRM/JFRG/agm.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN

No. expediente: 573/2019

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia:

RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA
MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

Acto reclamado: EL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 29 DE ENERO DEL 2019, DICTADO EN EL VARIOS 1240/2018

Acto recurrido: EL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 29 DE ENERO DE 2019, DICTADO EN EL EXPEDIENTE VARIOS 1240/2018-VRNR. (SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN).

Motivo del conflicto:

Autoridad responsable:

Autoridad emisora del acto:

Garantías violadas:

Tema:

CLASIFICACIÓN: OTROS - DESECHA

RME // VHEP

F. turno a ponencia: 20/03/2019

Ministro: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

Secretario proyectista: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO

Sentido de la resolución: 1. ES INFUNDADO.
2. SE CONFIRMA EL ACUERDO RECURRIDO.

F. resolución: 29/05/2019

F. ingreso engrose: 17/06/2019

Votos a favor: 5

Votos en contra: 0



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

EL QUE SUSCRIBE MTRO. VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO, SECRETARIO(A) DE ESTUDIO Y CUENTA ADSCRITO A LA PONENCIA DEL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA, SE PROCEDIÓ A CAPTURAR EN LA RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA, EL ENGROSE DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN EL PRESENTE ASUNTO, PREVIO COTEJO DE SU ORIGINAL DEL CUAL FUE TOMADO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JUNIO DE 2019

FIRMA



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN

No. expediente: 573/2019

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia:

RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA

MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

Acto reclamado: EL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 29 DE ENERO DEL 2019, DICTADO EN EL VARIOS 1240/2018

Autoridad responsable:

Tema:

CLASIFICACIÓN: OTROS - DESECHA

RME // VHEP

F. turno a ponencia: 20/03/2019

Ministro: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

Secretario proyectista: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO

Sentido de la resolución: 1. ES INFUNDADO.

2. SE CONFIRMA EL ACUERDO RECURRIDO.

F. resolución: 29/05/2019

F. ingreso engrose: 17/06/2019

Votos a favor: 5

Votos en contra: 0

Ingresó el engrose en su versión pública: MTRO. VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO

CIUDAD DE MÉXICO. A 17 DE JUNIO DE 2019

FIRMA

SECRET



SECRET
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
PH



RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACE CONSTAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AL CONCLUIR LA SESIÓN PÚBLICA DEL DÍA DE HOY SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTA SUPREMA CORTE UNA LISTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN DICHA SESIÓN, EN LA QUE SE INCLUYÓ EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019.

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

EL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL SE PUBLICÓ EN LOS ESTRADOS Y EN EL PORTAL DE INTERNET DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. CONSTE.

ACTUARIO
JUAN CARLOS REBOLLO PONCE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019. CONSTE.

C
T
X
E
T
N
S





OFICINA DE CORRESPONDENCIA
COMÚN

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

anexo

2019 JUL -4 PM 3:55

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNALES COLEGIADOS
EN MATERIA PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO

PRESIDENTE DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
PRESENTE.

PRIMERA SALA

REC. DE RECL.
573/2019 EN EL
VARIOS 1240/2018-VRNR-
QUEJA.

OF. No. 3323.

ANEXO:

COPIA
CERTIFICADA.
(6 fojas)

En el recurso de reclamación indicado al margen,
esta Primera Sala dictó resolución, cuya copia certificada le remito
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Protesto a usted mi atenta consideración.

Ciudad de México, 3 de julio de 2019.

LA SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

ANTECEDENTES:
REC. DE QUEJA
1/2019.
REC. DE INCONF.
1/2019.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

LIC. ELSA GUTIERREZ OLGUÍN

LA SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. ANA MIRIAM DE JESÚS ÁLVAREZ

Rem.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LIC. ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ CERVANTES
ACTUARIO



118

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ✓
P R E S E N T E.

PRIMERA SALA

REC. DE RECL.
573/2019 EN EL
VARIOS 1240/2018-VRNR-
QUEJA.

OF. No. 3324 ✓

ANEXOS:

VARIOS 1240/2018-VRNR-
QUEJA.
(52 fojas según
su último folio)

CUADERNO AUXILIAR
RELATIVO AL VARIOS
1240/2018-VRNR- QUEJA.
(33 fojas según
su último folio)

En atención a que esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, emitió la resolución correspondiente
en el recurso de reclamación indicado al margen, el cual se declaró
infundado, dicha resolución se puede consultar en la red jurídica
de este Alto Tribunal, remito los anexos que se señalan al mismo
margen, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

He de agradecer, se sirva ordenar el acuse de recibo
detallando lo que se remite.

Protesto a usted mi atenta consideración.

Ciudad de México, 3 de julio de 2019.

LA SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN

LA SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. ANA MIRIAM DE JESÚS ÁLVAREZ

Rem.

Recibido de un enviado de primera sala de esta H. Corte con;
- Varios 1240/2018 en (52) fojas, según su último folio.
- Cuaderno Auxiliar en (33) fojas, según su último folio.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

07 JUL 4 AM 11 17

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

025191

111111

111111

111111

11

11

11

11



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

**Acuse de envío y anexos relacionados con el folio electrónico 47593/2019 del
MINTER-SCJN**

Folio electrónico: 47593/2019
Fecha de envío a la SCJN: 08/07/2019 15:09
Tipo y núm. de exp. en SCJN: RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019

Fecha de acuerdo de requerimiento u oficio del órgano jurisdiccional: 08/07/2019

Número de oficio: 5329-N

Síntesis del acuerdo u oficio: SE ACUSA RECIBO. NOTIFIQUESE.

Detalle de requerimiento y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio(en su caso documentos)	Tipo de clasificación o documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO	ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL	SE ACUSA RECIBO. NOTIFIQUESE.

Fecha de acuerdo u oficio:

08/07/2019

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseEnvio.pdf
Secuencia: 2719523

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOAQUIN NEYRA DENICIA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	NEDJ790620HMCYNQ04			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000000000b325	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:13:27Z / 08/07/2019T15:13:27-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	86 60 4d 65 68 06 f2 cb 19 f4 6c bb 1d 13 ac ae 9b 3a d8 b2 83 26 0a 61 a9 06 94 4b 6c f4 3d de 56 e3 98 54 4c cb 24 ac fb 5a bf 8a 9b b3 79 4c 24 89 be be b2 fc 37 27 76 0f 17 11 6e 23 4b 47 67 3e d2 4a 6b d5 a7 2e 38 82 d2 0a 61 9a 74 b1 b1 43 be ee 2b f5 f9 da 83 02 a0 8c 59 8e 72 ce 20 3d 71 88 3e 1b 07 91 b3 fd 99 73 ac b7 12 d2 77 a7 15 ef ab 73 7d 97 90 bb bb 4b 3c 8e 39 3d d5 16 35 df 17 e4 24 f7 7c 86 d7 b5 d7 08 8d 13 92 79 2c 95 19 8c 3f 34 ce f3 65 b7 9a 7c f0 bf fa 0c bf b3 35 3e 69 b1 6e a7 df c8 1b 9f 8e ea 89 91 00 f5 6e be 87 03 90 d0 86 fe b5 16 b5 39 c2 26 9f fe c8 be 7e c8 78 20 81 49 68 6a 26 e5 12 4c 44 bf f6 ed df ec a0 a0 ad 40 a5 90 89 2e 0a 11 65 df 18 03 81 91 59 eb 91 d6 a4 12 3b 85 cf 97 0f d8 9f a1 40 a9 c3 91 51 0d 8a 95 d4 9e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:09:33Z / 08/07/2019T15:09:33-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000000000b325			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:13:27Z / 08/07/2019T15:13:27-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2723266			
	Datos estampillados:	6D7AF479A88609301FF8D4F23263B4DAB3B514B5			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”

FORMA B 1

5329/2019 N

SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

REFERENCIA recurso de reclamación 573/2019
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE, LE COMUNICO QUE EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE QP.- 1/2019 SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

“Ciudad de México, ocho de julio de dos mil diecinueve.

Agréguese a sus autos el oficio de cuenta para que surta sus efectos legales, mediante el cual, la Subsecretaria de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remite el testimonio de la resolución dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de la aludida Primera Sala de ese alto Tribunal, en la cual se declaró infundado el recurso de reclamación 573/2019, interpuesto en contra del auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente Varios 1240/2018-VRNR, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que este Tribunal Colegiado de Circuito toma conocimiento.

Al efecto, acúsese recibo por conducto de MINTERSCJN, con copia de la versión digital impresa de este proveído, haciendo las veces de acuse de recibo.

Finalmente, obténgase copia certificada del testimonio de la resolución dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de la aludida Primera Sala, en el recurso de reclamación 573/2019, interpuesta por la quejosa Martha Patricia González Nava, enviada por la Superioridad, para ser agregada al recurso de inconformidad 1/2019, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito y, para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese y devuélvase al archivo.

Lo proveyó y firma la Doctora María Elena Leguizamo Ferrer, Magistrada Presidenta del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, licenciada Nadia Neznaí Jiménez Mendoza, que da fe, nico”

CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE

EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A ESTE SEXTO

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.



LIC. JOAQUÍN NEYRA DENICIA



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: SSEXTO TRIB19070815190.pdf
Secuencia: 2719524

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

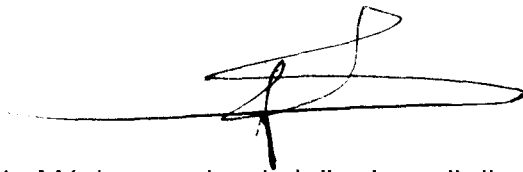
Firmante	Nombre:	JOAQUIN NEYRA DENICIA		Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	NEDJ790620HMCYNQ04				
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000000b325		Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:13:28Z / 08/07/2019T15:13:28-05:00		Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION				
	Cadena de firma:	76 41 51 1c 2b bd e5 f6 1a b4 5b b5 24 7a 35 a7 2d cc 54 30 55 06 ba 9a 51 79 ed e8 39 4a b1 52 66 a1 31 3b f1 33 9b c6 86 50 24 5e f6 60 ac 76 c4 03 f9 46 66 b9 cb b5 95 c0 6e 46 76 38 8a 49 41 9b 5a d6 c1 c2 f9 27 e7 11 74 e4 bb cf ca e5 61 a3 8d 37 a0 e0 68 67 9f 65 01 8c 49 f5 3e 1a a3 a1 3a 4f 75 62 1a ea cb d7 67 a7 3e 40 3d 8b 0b 8e ab 67 ea f5 da aa 2e 1b 35 e2 0d 90 d3 f4 95 45 dd 14 3c 1f 17 94 0d 85 2b 70 7e 0d 54 e2 82 52 34 14 e7 e0 f3 80 f1 35 af 3b ee 84 48 7d 00 73 67 2d 07 3d 9b b8 b1 b3 93 d6 4a 54 97 c7 45 48 91 4d bf c9 1c 74 34 c6 72 67 76 1c 98 66 cb e2 76 23 7a 06 f3 eb 23 22 4e 91 82 8b 3d 3e 49 3e 6b 1e 4a 6b b9 10 db 4f 5c cb 2e 99 74 84 41 fb 2e f7 01 38 21 8e 69 4a e7 85 c2 a6 ef e2 25 8e 33 1e 45 ab 9a f9 65 1f ed 10 61 c1 63 c0				
 Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:09:34Z / 08/07/2019T15:09:34-05:00				
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000b325				
 Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:13:28Z / 08/07/2019T15:13:28-05:00				
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Identificador de la secuencia:	2723267				
	Datos estampillados:	56E3862FB0ECBF94B0EFA516C1725A142C18BF33				

**SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA**

Licenciada Marisol Martínez Martínez, Secretaria adscrita a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción III, del Acuerdo General Plenario 12/2014 -----

----- **C E R T I F I C A:** -----

Que el presente documento constante de 2 fojas es versión impresa fiel de la versión electrónica de las constancias indicadas en el acuse de envió recibidas por el **MINTERSCJN**, con el uso de la firma electrónica de los servidores públicos designados para su recepción. Doy.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Ciudad de México a ocho de julio dos mil diecinueve.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Requerimientos de diversos órganos PJF a la SCJN

Remitente (órgano requirente):	SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO		
Destinatario (órgano requerido):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN		
Fecha de envío a la SCJN:	08/07/2019 15:09:37		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	RECURSO DE RECLAMACIÓN	573/2019	
Tipo de recepción:	CONFORME		
Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano jurisdiccional:	08/07/2019		
Síntesis del acuerdo del órgano jurisdiccional:	SE ACUSA RECIBO. NOTIFIQUESE.		

Detalle de requerimiento y en su caso documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias remitidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO U OFICIO	RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019	ACUSE DE RECIBO	2) ORIGINAL	DOC LEG EN 02 PÁG

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

C

F

X

1

54

1

1

1

SECRET

SECRET

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionRequerimiento905591.pdf
Secuencia: 2719547

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	GERARDO ALEJANDRO GARCIA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GAXG640126HDFRXR00			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000f31	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:18:32Z / 08/07/2019T15:18:32-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	20 62 43 af 77 50 a2 51 e9 6b 70 20 4f 32 8b 36 73 ea 33 bf ae be 6d 99 ca 40 f1 a5 78 ec 0d 97 40 14 63 59 c6 87 d9 2c 3b 19 80 06 5c cc 0e e9 42 d5 df 1d cc 02 aa 0a 55 f4 f7 ce f5 6a 83 cd 75 44 8f 9e 2a a2 63 d8 f2 2a 5c fd ab a2 8d 2f c0 dc 4b a7 cd a7 17 54 23 d9 be 16 38 ea 12 c3 56 4a b3 d2 a5 30 e3 e0 af 17 67 0c f9 35 12 fa 4a 27 61 f3 5c ff 8d 48 0a e7 e0 0e 60 48 83 27 c2 f5 bc 74 9c d8 0b b6 39 7f 35 c0 ff 48 a3 d5 96 ab a8 bb d7 85 f3 c9 6b 26 7b c5 04 1d 50 8c 23 cb c0 72 36 fc b6 b8 c4 43 ae 0b 93 9f 7c 64 c9 2f 01 0d 0d d2 66 37 f8 6b 06 43 9e ef a0 91 bb a8 5e e6 b6 68 9b ae 4b 93 cd 08 f4 4b 6d af 3e e7 dd 05 b9 24 81 28 bf 29 cf 85 52 87 f5 2f 58 59 7f 3c 3b cf 56 6b 7b 86 de 50 64 3c 43 08 49 4c d6 73 41 4a a2 38 03 24 98 25 82 0e fa 87			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:18:34Z / 08/07/2019T15:18:34-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000f31			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T20:18:32Z / 08/07/2019T15:18:32-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2723290			
	Datos estampillados:	B65DD4FC9568CF669EEBDCA80864F93E4C5D18B6			

SUPLENTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2019 JUL 9 AM 8 52

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

ESTADORTIWI



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN
44380-MINTER

RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
EN EL EXPEDIENTE VARIOS
1240/2018-VRNR

En once de julio de dos mil diecinueve, la Subsecretaria de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acuse electrónico y anexo, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste.

Ciudad de México, a once de julio de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el acuse y anexo remitidos vía MINTERSCJN, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase al Tribunal Colegiado de antecedentes, acusando recibo del oficio 3323 y del anexo descrito en el mismo.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Subsecretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada Elsa Gutiérrez Olguín.

APVM/EBF
El

se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

CLINICAL
TEXTS



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CONSTANCIA DE GENERACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019 PARA SER AGREGADO AL VARIOS 1240/2018-VRNR-QUEJA

En cumplimiento a lo determinado en el proveído dictado el día ocho de julio de dos mil diecinueve en el expediente relativo al VARIOS 1240/2018-VRNR-QUEJA, el día indicado al pie se obtuvo para ser agregada a este último copia certificada de las siguientes constancias:

Expedientes	Documentos
RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019	SENTENCIA (INCLUYE RAZÓN DE LA SESIÓN, VOTACIÓN Y LAS CONSTANCIAS DE INGRESO A LA RED)
RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019	CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (SELLO DE LA LISTA RESPECTIVA) DE RESOLUCIÓN DE FALLO
RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019	CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DE RESOLUCIÓN DE FALLO
RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019	CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DE RESOLUCIÓN DE FALLO
RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019	ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO)

Ciudad de México, a once de julio de dos mil diecinueve.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect_1.pdf
Secuencia: 2727340

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	Armando Juarez Lopez	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	JULA780730HMCPR06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000000000dfb	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/07/2019T16:21:44Z / 11/07/2019T11:21:44-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	82 06 43 b8 ca 86 0f a1 0c d1 7f 1a 92 2a 5d 88 a3 61 31 5a ba 50 68 69 99 cb c6 02 b4 76 d7 e7 c7 96 3b 00 3d 88 f6 f5 87 53 ed cc fa b3 57 09 01 03 9f c0 ac eb 7a 45 c2 bd 73 20 50 60 c3 34 d0 b6 48 c0 72 86 fe 66 b8 7d 31 23 86 5a 4a e7 65 1c 83 94 ad 48 d8 e5 dc 96 5a 38 13 df de ba 57 20 ab 7d b6 b0 ec 7e cf 0a 98 4d f9 2e 3c 6e 75 11 54 c6 44 dd ad 3d 7e 60 5a 3d 2c a7 a1 7b 41 c3 22 83 ad fb 8d 2d e6 c2 ed 99 78 93 6c bb 85 c1 ba 56 50 c2 09 5d 8d b3 67 6d a1 ff 0f 22 a0 e2 1b 22 a2 bf 26 ea 90 92 e4 e6 0d e6 fd 04 5b ab a1 67 1f 2c a5 69 2b 85 12 1c 0d 4b 03 c6 d4 ad f8 b8 9a 0c 05 dd 6f 4b aa 08 28 12 bb 18 40 dd 30 3f 71 4f 81 13 0e 5e 9e d2 5f ef 03 5e be ca ce 9a f0 1f a3 26 82 69 2c 21 95 c5 73 a3 44 88 fd a0 83 d1 1e 41 00 6e 2a eb a0 4a 3b 2a			
Validación OCS	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/07/2019T16:21:45Z / 11/07/2019T11:21:45-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCS:	OCS FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCS:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCS:	706a6673636a6e0000000000000000000000000000dfb			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/07/2019T16:21:44Z / 11/07/2019T11:21:44-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2731083			
	Datos estampillados:	C47F048BCC86C4AA4E4DBA0DF8CB41F5851E55AF			

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



SECRET
RECEIVED
SECRET

DIGITALIZADO

Folio y fecha de recepción	FEI-00482	11/07/2019 12:11:17 p. m.
SCJN:		
Folio electrónico:	2646	



Suprema Corte de Justicia de la Nación
Razón Secretarial de la Obtención de Copia Certificada

Expediente de origen: RECURSO DE RECLAMACIÓN
573/2019

Expediente destino: VARIOS
1240/2018-VRNR-QUEJA

Fecha del proveído que ordena la obtención: 11/07/2019 12:11:09 p. m.

Lugar y fecha de firma de la razón secretarial: Ciudad de México, a 11 de julio, 2019

En cumplimiento del acuerdo presidencial respectivo, agréguese al presente expediente la constancia de generación de copia certificada de documentos electrónicos que se integraron al relativo al VARIOS 1240/2018-VRNR-QUEJA con folio: FEI-00482, para los efectos legales correspondientes. Conste.

**LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA**

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA.

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

2019 JUL 11 PM 2 51

SUBSECRETARÍA DE ACUERDOS
SECRETARIA DE LA NACION

APWM/EBF



1

2

3

4

5

6

7

8

1000



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2019 AGO 6 PM 3 14

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA
VARIOS NÚMERO: 01240/2018-VRNR-QUEJA

OF. SGA-VIII TER-17982/2019.-SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN. OFICIO 3324 RELATIVO AL RECURSO DE
RECLAMACIÓN 573/2019 AMBOS DE SU ÍNDICE.

VARIOS
01240/2018-VRNR-QUEJA

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA
VARIOS NÚMERO: 1240/2018-VRNR-
QUEJA
SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

Ciudad México, a ocho de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta
al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido	Presentado en:
1. Oficio número 3324 de tres de julio de dos mil diecinueve, signado por la Subsecretaría de Acuerdos de la Primera Sala de este Alto Tribunal, recibido en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, registrado con el folio 025191, al que acompaña lo siguiente:	Original en 1 foja
a) Expediente relativo al varios 1240/2018-VRNR-QUEJA del índice de este Alto Tribunal.	Un cuaderno y un cuaderno auxiliar.

Las constancias referidas anteriormente se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de julio de dos mil diecinueve. Conste.

Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil diecinueve.

Agréguese para que obren como correspondan las constancias citadas en el punto uno de la cuenta al expediente impreso y electrónico relativo al presente sumario, para los efectos legales consiguientes. **Acútese recibo a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Ahora bien**, con fundamento en el artículo 4o. párrafo segundo, del Acuerdo General número 12/2014, obténgase y agréguese al expediente impreso y electrónico en que se actúa, mediante el uso de la FIREL del servidor público autorizado para tales efectos, copia certificada de la versión digitalizada de la sentencia que consta agregada en el **recurso de reclamación 573/2019** radicada en la Primera Sala de este Alto Tribunal, incluida la respectiva constancia de obtención, que obran agregadas en el expediente electrónico de dicho asunto en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en la inteligencia de que mediante razón secretarial se deberá agregar al referido expediente de origen, en su versión electrónica e impresa, la constancia de obtención correspondiente. **En ese entendido**, dado que la Primera Sala de este Alto Tribunal, mediante ejecutoria de **veintinueve de mayo de dos mil diecinueve**, dictada en los autos del **recurso de reclamación 573/2019**, resolvió: "...**RESUELVE: PRIMERO.** Es infundado el recurso de reclamación 573/2019, a que este expediente se refiere. **SEGUNDO.** Se confirma el acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado el veintinueve de enero de dos mil

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

diecinueve en el expediente Varios 1240/2018-VNR...”, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.** Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.”
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

EMA/ACS

OC CLAUDIA TUDAS DE
ACTUARIA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER J
SUPREMA
SECRET



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

130
FORMA A-54

REFERENCIA
PS-02570

RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
EN EL EXPEDIENTE VARIOS 1240/2018-VRNR

En ocho de agosto de dos mil diecinueve, la Subsecretaria de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio SGA-VIII TER-17982/2019, recibido en esta Secretaría de Acuerdos. Conste. *Els*

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil diecinueve.

Agréguese a sus autos el oficio SGA-VIII TER-17982/2019 del índice de la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase a dicha Secretaría, acusando recibo del oficio 3324 y de los anexos descritos en el mismo.

Envíense los presentes autos al Archivo Central de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCANTARA CARRANCÁ**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Subsecretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada Elsa Gutiérrez Olguín. *Els*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

APVM

EI

9 AGO 2019, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

FIN TEXT O

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



CUADERNO AUXILIAR RELATIVO AL RECURSO DE RECLAMACIÓN

NÚMERO: 573/2019





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOVENTE: MARTHA PATRICIA
GONZÁLEZ NAVA

VARIOS NÚMERO: 1240/2018-VRNR

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido	Presentado en:
Escrito original con firma autógrafa de Martha Patricia González Nava , con número de registro 009961 , recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y anexos.	Original en 8 fojas y anexos en copia simple.

Las constancias referidas anteriormente se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día nueve de enero de dos mil diecinueve. Conste.

Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Agréguese el escrito de la promovente y anexos al expediente varios respectivo. **Ahora bien**, del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como del escrito de mérito, se advierte por una parte, que la promovente desahoga la prevención efectuada por proveído presidencial de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente en que se actúa en los siguientes términos: "...**solicito la Facultad de atracción del juicio de amparo 909/2018 substanciado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito... Facultad de atracción del recurso de Queja con**

número de expediente 1/2019 (la A quo desechó la denuncia de repetición del acto reclamado) y Recurso de Inconformidad 1/2019 (la A quo declaró como cumplimentada la ejecutoria de amparo)... Asimismo en el juicio de amparo 909/2018 y 260/2018... "(SIC). Ante ello, tanto de su análisis como de la consulta del Sistema de Informes de este Alto Tribunal, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se advierte que por lo que respecta a su solicitud para que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo 260/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, su pretensión es la misma a lo acordado por proveído dictado por el Presidente de este Alto Tribunal el diez de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018, a través del cual se determinó desechar la solicitud planteada por la parte promovente citada al rubro; por lo que se refiere a su solicitud para que este Alto Tribunal conozca del recurso de queja 1/2019, así como del recurso de inconformidad 1/2019, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del mismo modo, es de concluirse que su pretensión es igual a lo acordado por proveídos dictados por el Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal los días once y veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en autos de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 7/2019 y de la solicitud de reasunción de competencia 10/2019, respectivamente, a través de los cuales se sometió a consideración de la Ministra y de los Ministros integrantes de la Primera Sala, a fin de que determinen si alguno de ellos decide hacer suya las solicitudes de referencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción II, de la Ley



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-94
VARIOS 1240/2018-VRNR

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **debe estarse a lo que se determine en esos expedientes**; en cuanto a su solicitud para que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo 909/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **procede desechar por notoriamente improcedente la petición que se formula**, toda vez que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 85 de la Ley de Amparo vigente, **la referida promovente carece de legitimación para formular tal solicitud**, ya que ésta corresponde hacerla, en todo caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento o al Procurador General de la República. En mérito de todo lo anterior, y con apoyo, además, en los artículos 10, fracción XII, y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **se acuerda:**

I. Dígasele a la parte promovente que debe estarse a lo determinado en los expedientes de solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018 y 7/2019, así como en el diverso expediente de solicitud de reasunción de competencia 10/2019.

II. Se desecha, por notoriamente improcedente la petición de solicitud de ejercicio de facultad de atracción que formula la promovente citada en la cuenta.

III. La parte —no los autorizados de ésta en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrá solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí

o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

IV. Únicamente la parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para ello, podrá solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

V. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala la **parte promovente** en su escrito de agravios; en la inteligencia de que si acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se les tendrá como autorizadas con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas ya tienen reconocida expresa o implícitamente, dentro del juicio de amparo el aludido carácter en los términos amplios antes descritos, dicha autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia.

VI. Notifíquese por lista; y personalmente a la promovente, en el domicilio que se encuentra señalado para tal efecto en el escrito que se provee, en la Ciudad de México, de conformidad con lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo de este Alto Tribunal como asunto concluido.**

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

Esta hoja corresponde al expediente VARIOS 1240/2018. Conste.

RCC/EMA/aysh

13 FEB 2019

En _____ por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al interesado de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe

—

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	CLAUDIA FLORES DIAZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	FODC730314MMNLZL01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e00000000000000000000000000eaa	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2019T23:56:25Z / 12/02/2019T17:56:25-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	66 de c7 13 50 9c ef af 22 69 2b 37 c7 33 fd cf 56 5c d6 87 60 de 2e 91 a0 56 67 dc 1b 1a 94 a6 f7 c7 0b 88 ee 8f d1 10 20 5d ad e4 bc 6e fc 02 9e 47 01 e9 73 80 cc db 7b c1 56 6d 7f c5 78 9f ce 7f b1 d5 4f 74 f8 94 6a bc a5 a7 e4 43 42 df 0e 2e 6a aa e9 6c ac ec 39 a6 fd 8d f0 26 70 25 43 8b b6 59 51 d3 d4 b5 56 6e 02 a5 33 69 15 46 12 b6 c9 38 f4 02 e4 9c 37 06 69 b3 04 3a 78 34 e6 b4 a6 2a cf d5 02 20 26 0c c5 40 b7 af 81 d2 77 04 21 d7 3a 50 79 dc 24 5c 16 fb d2 1b 7a 59 54 38 ac 1c a2 57 b3 44 ce 0f 2e 85 ec 9f 54 c8 d9 2b 6c 7d 92 95 11 d5 fc f1 de 8c 76 a7 a7 0d dc e5 ec cf c9 b6 35 54 31 d2 0f 2d 35 9d c2 58 90 61 d0 1c 66 17 b3 aa b4 45 85 0d f9 a2 ea 82 67 8e 6a 93 cf 34 f0 f3 0c 8e 5a 1c 38 5b 9d 46 58 bf 54 e9 18 99 5b 71 e9 12 da 9c e1 4f 18 b6			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2019T23:56:27Z / 12/02/2019T17:56:27-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e00000000000000000000000000eaa			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2019T23:56:25Z / 12/02/2019T17:56:25-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2433500			
	Datos estampillados:	F6EDE420B93800C32FBB324CB97FB48C86DE57B9			

**MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA PRESIDENTE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Presente.

Blandiré el escudo de la razón y dignidad
hasta que el estandarte de la justicia se
enarbole.

Martha Patricia González Nava, por propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tabaqueros número 43, Colonia San Nicolás Totolapan, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México, C.P.10900; ante su Señoría, con el debido respeto, comparezco, y expongo:

1. La suscrita acude ante el Máximo Tribunal Constitucional del país, a solicitar acceso a la justicia.
2. Por lo que con fundamento en los artículos 104 de la Ley de Amparo, y 10, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acudo a interponer Recurso de Reclamación en referencia al proveído notificado por listas el once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en expediente varios 1240/2018-VRNR, suscrito por su Señoría.
3. Retomando, el artículo 104, segundo párrafo de la Ley de Amparo que mandata que el Recurso de Reclamación se interpondrá por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresaran los agravios, dentro del término de tres días al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En este fundamento vengo a decir:
4. La quejosa acudió a solicitar amparo y protección de la Justicia de la Unión en diciembre de dos mil dieciséis con el juicio de amparo 1118/2016, prosiguiendo con está indefensión ante el Estado Mexicano, los juicios de amparo indirecto subsecuentes, reseñan de forma idónea los hechos que acontecen y acompañan al caso concreto con número de expediente: 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018. Por consiguiente, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.
5. Pues, la previsión y mandato de los artículos 1, 29, 103, 107 y 133 de la Constitución son en sí mismos la regulación de derechos fundamentales en la pertinencia de las garantías que regulan un estado de excepción, más, han sido inobservados en el caso concreto.
6. La violencia de género en el presente caso viene a reforzar las flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la quejosa y mi familia. En este "estado de excepción" de Derecho en abrogación a derechos fundamentales no derogables.
7. El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano que observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, no incluyen las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos,

8. Los innumerables juicios de amparo representan hechos notorios de un Estado de excepción como acto formal el estado de excepción en el presente caso, más, obedece a razones espúreas en violación a los preceptos constitucionales y de los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos pertinentes que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado (sistema convencional).
9. Así tenemos, que el derecho a la vida constituye la base esencial de los demás derechos¹, el Estado Mexicano, se conforma de autoridades responsables, que han alentado y formalizado la persistencia de las violaciones para preservar el derecho a la vida; el tiempo que ha durado estos hechos (seis años, tres meses), conforman los juicios de amparo indirecto 1118/2017, 288/2017 (1 Anexo), 349/2017, 545/2017, 627/2017 (tres anexos), 651/2017 (cinco anexos), 74/2018 , 260/2018 y 909/2018.
10. Esto es, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales, pilar normativo ha sido trastocado por actos ejecutivos formales, ésta situación excepcional, **ha sido decretada, acudiendo a la perennización.**
11. Por consiguiente, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.
12. La ausencia de legalidad en este estado de excepción se ve plasmada en los actos ejecutivos formales, el decreto y aceptación de las autoridades responsables de este estado extraconstitucional de derogación de derechos fundamentales no derogables, se prueba y constituye de forma idónea, principalmente, en los juicios de amparo, 909/2018, 260/2018, 74/2018, 651/2017 y 627/2017:
13. Ello es así su Señoría, mi vivienda (habitada por la quejosa y mi familia) intencionalmente está siendo destruida, con aquiescencia del Estado Mexicano, al denunciar está barbarie (Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01), en el caso concreto se suspendió el proceso constitucional democrático, y con la firme finalidad de destruirnos se dictó supresión y/o violación de derechos fundamentales no derogables.
14. En esta guisa, la parte quejosa le reclama al Presidente de los Estados Unidos (juicio de amparo 909/2018), que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ha sido el principal torturador en el caso concreto, el Ejecutivo, perenniza el estado de excepción, afirmando vía informe justificado, que es de la competencia del Gobierno de la Ciudad de México el caso concreto, de forma arbitraria, compara la recuperación de una vía pública, Andador Tabaqueros, al decreto ejecutivo de este estado de excepción de derechos fundamentales no derogables. Por consiguiente, deroga el principio de dignidad inherente en todo ser humano, base de un Estado Constitucional de Derecho: acto ilegal, violatorio de los artículos 1, 29, 87 y 89, fracción X de la Carta Magna, pues afirma en juicio de amparo, que el decreto ejecutivo de abrogación de derechos fundamentales no derogables ha sido motivada por la vía pública Andador Tabaqueros, hecho inaudito, pero es un hecho cierto, tristemente el **nexo causal** entre el estado de excepción de derechos

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 139

2

2

2

2

fundamentales no derogables, que derivó en crimen de genocidio, es la **Concejal en la Alcaldía la Magdalena Contreras Diana Álvaro Gallegos**, familiar por consanguinidad de los habitantes del Andador Tabaqueros, figura política que tiene su domicilio particular (habita), aproximadamente, a seis cuadras del multicitado Andador, ésta Concejal tiene estrecha amistad, con importantes figuras políticas pertenecientes al Estado Mexicano, hecho notorio es la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción con número de expediente 31/2019:

15. La asociación y complicidad de las figuras políticas con la Concejal Diana Álvaro Gallegos, se demuestra con las advertencias de ésta figura política, que fueron cumplidas el dos de mayo de dos mil catorce y cuatro de diciembre de dos mil quince. En la oficina del ex delegado José Fernando Mercado Guaida², Mario Gallegos Contreras (familiar por consanguinidad de la Concejal), atacó verbalmente a la suscrita y Carolina González Nava, advirtiéndole que ellos también eran Gallegos, *"conocemos al Presidente"*.... Por consiguiente, el seis de mayo de dos mil catorce, dirigimos escrito de denuncia de obstrucción a la justicia al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa, como respuesta, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México: citó a Carolina González Nava el veintitrés de mayo de dos mil catorce a lo que denominaron "audiencia" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la Magdalena Contreras, bajo el mando el ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México Rodolfo Fernando Ríos Garza: cinco servidores públicos torturaron a Julio Cesar González Nava y Carolina González Nava, por espacio de hora y media. El cuatro de diciembre de dos mil quince, bajo el mando del ex delegado en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, dos servidores públicos, adscritos al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, acudieron a la vivienda de los quejosos, dejando un "citatorio" con la finalidad de que asistiéramos el nueve de diciembre de dos mil quince a las dos de la tarde a las instalaciones de ésta demarcación, en la que según terceras personas, seríamos detenidos por policías, torturados, acusados de homicidio. Al no acudir, policía de investigación, acudió al domicilio de la parte quejosa con la finalidad de detenernos ilegalmente. Se dirigió escrito de denuncia de hechos al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, más los ataques se acrecentaron, con la firme intención de destruir a los quejosos- bajo el mando del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México Rodolfo Fernando Ríos Garza, se prepararon "audiencias" en las que bajo el pretexto de que acudiéramos para poder ver el expediente de "denuncias" que los habitantes del Andador Tabaqueros habían planificado en

² La suscrita acudió por asesoría a estas oficinas, pues con total desconocimiento de los nexos políticos de los probables responsables (habitantes del Andador Tabaqueros) con el ex Delegado José Fernando Mercado Guaida amigo personal de la Concejal Diana Álvaro Gallegos, y el por qué la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la ex Delegada Leticia Quezada Contreras, obstruían descaradamente el acceso a la justicia en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, ya que los maltratos, discriminación, advertencias, es de uso común en el caso concreto. Se desconocía la barbarie que las figuras políticas son capaces de perpetrar por estrecha amistad, con otra figura política, en que se vanaglorian de que con una sola llamada pueden encarcelar a una persona, torturarla, fabricar delitos, destruir una vivienda, y en este estado de excepción implementar la figura de libre tipificación de delitos. Ello es así, los expedientes de los juicios de amparo solicitados por la parte quejosa son prueba plena del estado de excepción de derechos fundamentales no derogables.

Esto es, Diego Arturo Lara Nava probable responsable en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01 y familiar por consanguinidad de la Concejal Diana Álvaro Gallegos, atacando con palabras altisonantes a la suscrita, gritaba desde la azotea de su vivienda: *pendeja, con una llamada de Diana* -refiriéndose a la Concejal- *"los chingamos"*



“pacto criminoso” en contra de los quejosos en asociación y complicidad del Gobierno de la Ciudad de México, para ser humillados, maltratados..., torturados, bajo la figura de fabricación de delitos y libre tipificación de delitos. Logrando intencionalmente, perpetrar lesión grave a la integridad física, mental y moral de la parte quejosa, hechos notorios en los juicios de amparo 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018.

16. Bajo el mando de figuras políticas han perpetrado en asociación y complicidad intencionalmente, lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos, sometiéndonos a condiciones de existencia que han de acarrear nuestra destrucción física, total. Los ex Delegados en la Magdalena Contreras: Leticia Quezada Contreras, José Fernando Mercado Guaida; los Diputados Luis Gerardo Quijano Morales e Israel Betanzos Cortés, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el otrora Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ahora Senador, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa (ahora Senador), ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México: Edmundo Porfirio Garrido Osorio y Rodolfo Fernando Ríos Garza³ (juicio de amparo indirecto 627/2017), entre otras figuras políticas, tales como la ahora Alcaldesa Patricia Jimena Ortiz Couturier, amiga personal de la multicitada Concejal Diana Álvaro Gallegos familiar por consanguineidad de los habitantes del Andador Tabaqueros.
17. Por consiguiente, el expediente de la solicitud de la facultad de atracción, solicitada por la parte quejosa con número de expediente 31/2019, es probanza del por qué se ha denegado el acceso a la justicia en el Estado Mexicano al caso concreto. La estrecha amistad que une a éstas figuras políticas con la Concejal Diana Álvaro Gallegos, conjugado con el poder ilimitado que les da la impunidad, les facilita, perpetrar actos de barbarie, como en el caso acontece. El estado de excepción perennizado por seis años, con tres meses, tiene la firme intención de destruir de forma total a la quejosa y a mí familia.
18. El crimen de genocidio es un flagelo para cualquier Estado Constitucional de Derecho, la complicidad y facilidad que han tenido las figuras políticas para perpetrarlo, es en sí y por sí mismo, un acto de barbarie. La intención de destruir ha derivado en lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos.
19. Al vulnerar las limitaciones contenidas en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los actos perpetrados para destruir a los quejosos, esta fuera de todo cause constitucional, la nada jurídica es sinónimo del estado de excepción que acompaña como sombra al caso concreto. El Gobierno de la Ciudad de México invadió y rebasó, la esfera de competencia del ejecutivo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Más está invasión, ha sido formalizada por el ejecutivo, esto es, en juicio de amparo la omisión se convirtió en acto, se formalizó el decreto de estado de excepción de derechos fundamentales no derogables. Hecho notorio en juicio de amparo 909/2018 y 260/2018.
20. Por consiguiente, se constituye lo dictado en el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

³ Que según fuente: <https://www.jornada.com.mx/2017/12/09/politica/015n3pol>: “Rodolfo Ríos Garza, ex procurador de la Ciudad de México, forma parte del equipo de asesores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación indicaron que su labor se enfocará en apoyar el análisis en materia de seguridad que puedan plantear ante el máximo tribunal”



“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

21. Los quejosos en los juicios anteriormente citados, han sido sometidos a castigos, pagando un costo muy alto: por haber solicitado acceso a la justicia: incriminaron a las quejas, daño a la propiedad, de una edificación que ésta asentada en la vía pública denominada Andador Tabaqueros, con la intención de destruir a los quejosos.
22. Ello es así, su Señoría, tristemente, el caso versa sobre el multicitado Andador Tabaqueros, por consiguiente, el Estado de excepción formalizado por el Secretario de Gobernación y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autoridades responsables en los juicios de amparo 260/2018 y 909/2018, respectivamente, formalizan la supresión y/ o violación a derechos humanos no derogables, decretando que el Gobierno de la Ciudad de México, perpetre hasta que se consume el genocidio, total y prosiga torturando, humillando, vejando, fabrique delitos, instaure formalmente libre tipificación de delitos, que se prosiga con el derrumbamiento intencional de la vivienda que habitan los quejosos, hechos fuera de todo cause legal a un Estado Constitucional de Derecho, pero los hechos notorios lo prueban.
23. Un ejemplo claro del estado de excepción de Derecho, que da cabida al absurdo jurídico y a la arbitrariedad, es la resolución que el **Magistrado Presidente e Instructor de la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Quince, Doctor Rubén Minutti Zanatta, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal**, ahora Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, en la que simuló juicio de nulidad V-76315/2015, que a claras vistas violó dolosamente el sistema de impartición de justicia, si esté Magistrado, hubiese aplicado los preceptos constitucionales, el Estado de Derecho, la parte quejosa no hubiese sido torturada a sangre fría, por segunda ocasión, en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues la Representación Social, reclama a la parte quejosa la vía pública denominada Andador Tabaqueros, como un delito oficioso (Unidad de Gestión 11 del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México) , sin saber qué delito se nos acusa, dio lugar a una reacción del Gobierno de la Ciudad de México que no tiene precedentes a un “estado de excepción” de los más mínimos derechos fundamentales: la vida, la libertad, la dignidad humana, el derecho a no ser vejado, torturado, incriminado, el derecho a una vivienda digna, a la propiedad, en el que se deduce de forma lógica que figuras políticas , autoridades a los más altos niveles han **“recomendado”** el presente caso, tal como lo manifestó el Agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, en el año de dos mil quince en las instalaciones pertenecientes a la Representación Social, que le había pedido “oportunidad” al Fiscal para arreglar **“amigablemente”** el presente caso, dando cabida a una espiral de impunidad. Cabe aclarar, que a éste juicio de nulidad, la parte quejosa nunca tuvo acceso, ni conocimiento. Otro ejemplo y prueba de “recomendación” y de arreglo “amigable”, es la tortura, llevada a cabo en las Instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, -testimonial/denuncia de Carolina González Nava -, el agente del Ministerio Público, gritaba: “no me han dado un peso por este caso”, aventando papeles en su escritorio de cara a la imputada, hechos ocurridos con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.
24. Este estado de excepción, derivó en los juicios de amparo indirecto: 74/2018 y 260/2018, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, como autoridad responsable Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (juicio 74/2018) y Secretario de Gobernación.



25. La restricción de derechos fundamentales, marca un precedente al violentar el artículo 1o. y 29, de la Constitución, en relación a la prohibición de que a ninguna autoridad del Estado Mexicano, le está permitido suspender, luego, violentar a determinada persona los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la tortura; ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos

26. Las denuncias de las graves violaciones a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el caso concreto, apoyó la persistencia de estas violaciones, haciéndonos más vulnerable al caso concreto.

27. Estado de excepción, en el que se observa de forma lógica la cadena de mando, con grado de asociación y complicidad: Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; exjefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida; Director de lo Jurídico y de Gobierno del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México; y ahora el presente caso es del conocimiento del Secretario de Gobernación, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 260/2018; autoridad que en juicio constitucional incumple con las obligaciones que le confiere un Estado de Derecho, como Secretario (garante) del Estado Constitucional Mexicano, perpetuando el estado de indefensión, que deriva en una espiral de impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la falta de debida diligencia ante actos de violencia genera impunidad, y que ésta a su vez propende nuevos incidentes de la misma violencia que debía ser eliminada⁸¹ En particular, cuando los delitos de violencia, tanto aquéllos cometidos por particulares como por agentes del Estado, quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de impunidad. También se ha corroborado que la impunidad que rodea la mayor parte de los actos de violencia contribuye a su repetición.⁸² Esta impunidad es en sí misma una forma de discriminación en el acceso a la justicia⁸³.⁴ Lo subrayado es propio.

28. En esta guisa, ejemplo de ello, los agentes del Ministerio Público y el Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, éste último, con fecha 4 de diciembre de dos mil quince, amenazó por medio de dos subordinados (servidores públicos del Órgano Político Administrativo): que si no acudíamos a una concertación vecinal, con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, en la que seríamos detenidos arbitrariamente por Agentes del Ministerio Público, “que habría problemas”, de forma lógica, no acudimos a ésta “concertación vecinal”, más, policía de investigación, en misma fecha, acudió en busca de los quejosos a nuestro domicilio, hecho, que hizo que nos “resguardarnos”; tal como acontece a la fecha; no obstante, acudimos a denunciar estos hechos ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ante el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al contrario de proteger los derechos humanos de toda persona, obligación consagrada en el párrafo

⁴Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en México, 2015, página 47, párrafo, 63



tercero del numeral primero de la Constitución, éstas violaciones, fueron alentadas, la persistencia sistemática de estas vulneraciones, deviene a comprobarlo, robusteciendo esta afirmación, con los anexos e informes justificados de los juicios de amparo indirecto: 651/2017, 627/2017 y 260/2018; un ejemplo de ello, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis: infligieron, de nueva vez a la quejosa Carolina González Nava, en la Agencia del Ministerio Público, tortura psicológica, derivando, que su resistencia física y psicológica, fuera quebrantada por el largo periodo en que a los quejosos nos han privado de derechos fundamentales.

29. De hecho, al solicitar, que se recuperara la vía pública denominada Andador Tabaqueros y/o clausurara el paso vehicular que tiene cabida en ésta vía, propiedad del dominio público, cerrada ilegalmente al libre paso por los probables responsables en la indagatoria FMC/MC-2/T2/00042/13-01, ya que éstos, destruyen intencionalmente, día con día la vivienda que habita la parte quejosa, hecho que constituye crimen de genocidio, con aquiescencia del Estado Mexicano. En esta guisa, el veintitrés de mayo el Gobierno de la Ciudad de México, invadió la esfera de competencia del ejecutivo, decretando de *facto* estado de excepción, esto es, en el caso concreto, de forma sistemática, con un alto grado de planificación, violaron de forma sistemática: el derecho a la integridad personal, a la protección a la familia, los derechos de la niñez, el principio a la legalidad, la prohibición a la tortura, el derecho a la no discriminación, el derecho a la propiedad, a una vivienda digna contrayendo esta excepción de derechos fundamentales a los quejosos, violentando gravemente el derecho a un proyecto de vida, derecho consustancial del derecho de la existencia:

30. La Comisión de Federal de Electricidad, pretende privarnos de energía eléctrica, amenazando que en cualquier momento nos privará de este servicio básico, esto es, los habitantes del Andador Tabaqueros en específico el probable responsable en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, **Diego Arturo Lara Nava** es empleado federal de esta empresa pública (Ref. UT/SAIP/0776/17), que en conjunto con el Lic. Adolfo Acevedo de la Cruz, agente comercial San Ángel 2, modificaron el sistema, generando cobros indebidos. Esto conforme al Oficio No.: ZON-LOMFACT-0033/17⁵

31. Siendo otro ejemplo, de la interrupción del proceso constitucional democrático, en el que permanece el presente caso: juicio de nulidad V-76315/2015, proceso, en el que no se respetó la normas de un Estado de Derecho, aun cuando en este expediente se conforma por denuncias de: tortura, incriminación, obstrucción de acceso a la justicia, violencia institucional, violencia en la comunidad,... ; el Magistrado Dr. Rubén Minutti Zanata, adscrito a la Quinta Sala Ordinaria Ponencia Quince del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal, resolvió en fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, que no se había respetado la garantía de audiencia, que versa sobre una vía pública que permanece cerrada, misma, que es empleada como arma, en contra del derecho a la vida y propiedad de los quejosos. Resolución que no resulta conforme a derecho, incumpliendo con acatar Jurisprudencia: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en la Tesis: 2a. LV/2001, Novena Época, mayo de 2001, tomo XIII, pág. 319, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "*BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, AL ESTABLECER QUE NO PROCEDERÁ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO CUANDO EXISTA OPOSICIÓN DEL INTERESADO O IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LOS QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA*".

⁵ Documental pública en autos del juicio de amparo 909/2018

32. Juicio de nulidad: V-76315/2015, que atiende en apariencia a la formalidad. La parte actora fue uno de los habitantes del multicitado Andador Tabaqueros, Odilón Nava de la Rosa, que cabe traer a colación las autoridades y/o figuras políticas que han tenido asociación y complicidad en el crimen de genocidio que acontece, mencionaban mediante el agente del Ministerio Público Alejandro Rangel Arenas⁶ que iban a ejercer acción penal con el probable responsable Odilón Nava de la Rosa a razón de su edad, pues “el juez lo declarara inimputable”, por consiguiente, éste probable responsable fungió como parte actora, el Magistrado Dr. Rubén Minutti Zanata, aun a sabiendas que una vivienda está siendo destruida día con día por la reconversión de un andador peatonal a paso vehicular, dictó sentencia de conformidad a la interrupción del proceso constitucional democrático, supresión y/o violación a derechos humanos no derogables. Juicio que fue del conocimiento formal de la quejosa el nueve de enero de dos mil dieciocho, que derivó en solicitud de amparo indirecto con número de expediente 74/2018.
33. Ello es, éste caso, surge de una petición de acceso a la justicia formalizada en la Averiguación Previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01; que está relacionada con el daño a una casa habitación. Vivienda, que ésta en riesgo alto de derrumbarse; por la reconversión de un otrora andador peatonal, (vía pública denominada Andador Tabaqueros) a un paso vehicular, que no cumple con las normas de construcción para los efectos que se le está dando:
34. Las ampliaciones de Dictamen emitidos por perito oficial en Ingeniería y Arquitectura, adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante probanzas científicas, permitieron configurar desde el mes de abril de dos mil dieciséis, la tipicidad y antijuridicidad, el modo, tiempo y lugar; que confirman plenamente las declaraciones que fueron realizadas en forma escrita por algunos de los señalados como probables responsables (habitantes del Andador Tabaqueros familiares por consanguineidad de la Concejal Diana Álvaro Gallegos), declaraciones que fueron vertidas, ante agente del Ministerio Público, con la asistencia de su abogado (figura política, José Máximo Pérez Romero), con fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece (juicios de amparo: 1118/2016, 288/2017, 651/2017)
35. Éstas probanzas científicas (dictamen), demuestran que la circulación de vehículos, que tiene cabida en el denominado Andador Tabaqueros (vía pública cerrada ilegalmente al libre paso), hace presión sobre los muros y estructura de la vivienda, que habitan los quejosos, esto es, éste paso vehicular, no cumple con muros de contención.
36. En declaración ministerial (27 de noviembre de 2013), los probables responsables, manifiestan que la entrada a su inmueble es por Andador Tabaqueros, que es una

⁶ “por su edad el probable responsable Odilón Nava de la Rosa, el juez lo va a declarar inimputable, ...voy a ejercer acción penal con él ...”, hechos ocurridos en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón el quince de septiembre de dos mil dieciséis.

vía pública, asimismo, que vibra la vivienda de los quejosos cuando circulan sus vehículos por ésta vía pública.⁷

37. Como consecuencia de esta violación grave a los derechos humanos, la parte quejosa fue narrándolos hechos mediante un número considerable de denuncias, contenidas en los anexos de los juicios de amparo 288/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018 y 909/2018, dirigidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; al Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretario de Gobernación, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto entre otras autoridades, hechos notorios del estado de excepción. Supresión de derechos inderogables de los quejosos.

38. No obstante, la comunidad conformada por el “pueblo”, como lo denomina el agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, habitante de San Nicolás Totolapan, Alcaldía La Magdalena Contreras, agente, que conoce a los habitantes del multicitado Andador, pues en el periodo marzo a octubre del año 2015, tuvo a su cargo la Averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01, afirmando que la indagatoria la había *encargado el Procurador*, por lo que le solicitó *al Fiscal* que le *diera oportunidad* que él conocía *a las partes*, que lo iba *arreglar de manera amigable*, que los probables responsables (habitantes del Andador Tabaqueros) tenían el *conecte con la Delegación*. Es por ello que un considerable de personas que habitan este poblado laboran en el Órgano Político Administrativo de la demarcación territorial la Magdalena Contreras, asimismo, los une estrecha amistad con la Alcaldesa Patricia Jimena Ortiz Couturier, tal como es el caso de la Concejala Diana Álvaro Gallegos, familiar por consanguineidad de los habitantes del Andador Tabaqueros, quien a su vez, a “beneficiado” tanto como a sus familiares y amigos, con “programas sociales de apoyo económico”, trabajo, impunidad, por consiguiente, éstas personas ejercen violencia en la comunidad en contra de los quejosos, hecho notorio en los juicios de amparo: 288/2017, 349/2017, 651/2017, 74/2018, asimismo, expediente de juicio de nulidad V-76315/2015, dando lugar a persecución objetiva del Estado Mexicano, en las que se ha visto alentada la incriminación (las figuras de: fabricación de delitos y libre tipificación de delitos) el temor de volver a ser torturado, discriminación, vejaciones, humillación, amenazas, intimidación, penas infamantes, haciéndonos a los quejosos más vulnerables día con día.

39. Juicio de nulidad V-76315/2015 substanciado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, bajo la ponencia del Magistrado Rubén Minutti Zanatta. Probanza idónea del estado extraconstitucional de supresión de derechos fundamentales no derogables. Magistrado que tiene plena responsabilidad en éste crimen de genocidio que acontece.

40. En esta guisa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en el transcurso de un proceso se pueden producir hechos independientes que podrían configurar violaciones específicas y autónomas de denegación de justicia⁴.

⁷ “...Debo manifestar, que el acceso al inmueble del suscrito, lo es por andador tabaqueros..., también debo mencionar que el andador que da acceso..., es un andador público porque este andador de acuerdo con los planos de urbanización de la delegación magdalena contreras, se contempla como vía pública...”

Asimismo...la querellante pretenda hacer valer que son las vibraciones que dice se causan por la circulación de los vehículos sobre dicho andador las que causaron los daños a su propiedad...” Anexo V; inciso j, considerando séptimo de la sentencia de amparo, resolución de la Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.

Por ejemplo, la decisión de un juez de no permitir la participación del defensor del acusado en el proceso⁵; la prohibición a los defensores de entrevistarse a solas con sus clientes, conocer oportunamente el expediente, **aportar pruebas** de descargo, contradecir las de cargo y preparar adecuadamente los alegatos⁶; la actuación de jueces y fiscales 'sin rostro', el sometimiento al acusado a torturas o maltratos para forzar una confesión⁸; la falta de comunicación al detenido extranjero de su derecho de asistencia consular⁹, y la violación del principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia¹⁰, **entre otros**.¹ Lo resaltado es propio. (Corte IDH. *Caso Almonacid Arellano y Otros Vs Chile*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

41. En esta guisa, los actos de la autoridad en referencia al caso concreto, han sido intencionales y altamente planificados, penas inusitadas, castigos por solicitar acceso a la justicia, aplicando discriminación, por consiguiente, estado de excepción.⁸ Por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado: "La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima (cf. *Case of Ireland v. the United Kingdom*, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167). Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida (cf. *Case Ribitsch v. Austria*, Judgment of 4 December 1995, Series A no. 336, párr. 36)."⁹

42. Por lo que intencionalmente, el Estado mexicano, ha decretado la nada jurídica, se ha dado a la tarea de destruir intencionalmente la integridad física, moral y mental en el caso concreto, luego, la dignidad; nos han arrastrados a sufrimientos ignominiosos, sin certeza y seguridad jurídica en este estado de "excepción de derechos", en que los quejosos tenemos, dos años, cuatro meses, solicitando acceso a la justicia en el medio de control de la constitucionalidad; ya que, que por un periodo de seis años, con tres meses, que comenzó en el año de dos mil trece, a la fecha del presente escrito de **solicitud oficiosa de revisión de decreto ejecutivo de estado de excepción**: el Estado Mexicano, han contravenido sistemáticamente derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, derechos, que encuentran contestes en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Imponiendo ilegalmente un estado de excepción formal, por consiguiente, se constituye un

⁸Un ejemplo de ello, afirmaban a los quejosos, por medio de la Lic. Fabiola Hernández, Secretaría Auxiliar del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México: "**no podemos hacer nada, tienen calidad de imputados**", asimismo, conformaban "audiencias" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con falsos pretextos, de que teníamos que acudir a las agencias del Ministerio Público, para, "ver si era posible tener acceso a los expedientes", para ratificar escritos, para solicitar acceso a la justicia, para "entrevistarnos" con el Fiscal; "audiencias", en las que planificaron interrogatorios, humillaciones, incriminación, coacción, tortura, vejaciones, amenazas, intimidación, hostigamiento..... Hechos notorios, validados en juicio de amparo 627/2017

⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Loayza Tamayo Vs Perú*. Fondo Sentencia del 17 de septiembre de 1997, párrafo, 57

estado extraconstitucional de suspensión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

43. vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de los quejosos, incumple el Estado Mexicano los preceptos constitucionales. El persistente estado de excepción de Derecho, restringe los derechos humanos que le son relativos tales como el derecho a la vida, a la propiedad, a una vivienda digna, a la integridad personal, a la protección judicial, derecho a la libertad personal, al principio inquebrantable de inocencia; el principio de una defensa adecuada; el derecho de legalidad; derecho a las garantías judiciales; derecho a la protección judicial; derechos del niño.
44. Ilegal desde cualquier punto de vista, tomando en cuenta que el artículo 29 de la Constitución se ve reforzado con el numeral 27.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), **ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**” Lo subrayado es propio.
45. El “estado de excepción” de Derechos y la violación flagrante y sistemática a derechos fundamentales no derogables, en el que persiste la persecución objetiva en que tal como se vive en un estado extraconstitucional: con temor fundado de ser sometido de nueva vea a tortura, incriminado, perdida arbitraria de la vida, entre otras violaciones a derechos fundamentales no derogables. En un Estado que convalida actos de barbarie en una espiral de impunidad.
46. Los derechos humanos más básicos de los quejosos se han visto trastocados, existiendo un temor fundado de genocidio, total, pues el estado de excepción de Derecho, ha derivado en violación sistemática y flagrante a un debido proceso. Hechos notorios son los juicios de amparo anteriormente citados.
47. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado: “En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.” No así, con nuevos actos que conlleva estado de excepción de Derecho, que faciliten “castigos prohibidos por la Constitución y por normas del *ius cogens*; actos que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos, asimismo, los derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
48. En esta guisa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha pronunciado que “el Estado está obligado a responder *sua sponte* con determinadas medidas de investigación, actos encaminados a sancionar y castigar a los perpetradores, y mecanismos que garanticen el acceso a la indemnización” y, “[a]l mismo tiempo, la víctima tiene un derecho directo a procurarse protección y reparación judicial”¹⁰
49. Aun cuando la normatividad aplicable al caso, es por su propio origen, materia de amplia regulación en el Derecho Internacional y también de regulación en el derecho interno; esto es, de modo importante confluyen normas del orden jurídico internacional vigentes en el Estado Mexicano, esto, con fundamento en el artículo

¹⁰ Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala

1o., 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que deben ser observadas por todas las autoridades mexicanas y en particular por el ejecutivo. **En las que se han violentado sistemáticamente los derechos más básicos de la persona humana, como la integridad, la amenaza constante a la pérdida de la libertad personal, a la vida, luego afectando gravemente el proyecto de vida de los quejosos.**

50. En este sentido, el Estado Mexicano, cuenta con un marco constitucional y convencional vigente: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, así como su Protocolo Facultativo, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; asimismo, el numeral primero de la Constitución, mandata que queda prohibida toda discriminación, al respecto es clarificador la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia¹¹ y la **Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.**

¹¹ CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención:

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

2. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

4. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y

51. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.¹²
52. En referencia, la Corte ha manifestado que el Estado “tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.¹³
53. Por lo que la obligación del Estado de investigar no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones como prontas, exhaustivas, imparciales e independientes.¹⁴
54. Así mismo, es loable resaltar el pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que, “Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado; abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona, como son: la duración de los tratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto y la vulnerabilidad, entre otros, que deberán analizarse en cada situación concreta”.¹⁵
55. En esta guisa, el más Alto Tribunal de la Nación al interpretar el artículo 133 de la Constitución Federal, ha sostenido que sólo el Poder Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, entre otros instrumentos.

De lo anterior, se dilucida, entre otros, dos principios fundamentales del juicio de garantías:

- I. que únicamente procede a petición de parte agraviada, quien debe ser un particular y

exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

¹² *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) v. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 173; *Caso El Amparo Vs. Venezuela*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de febrero de 2010, Considerando decimoctavo, y *Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2010, Considerando vigésimo primero.

¹³ *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros)*, *supra* nota 5, párrafo 173; *Caso El Amparo*, *supra* nota 5, Considerando decimoctavo, y *Caso Heliodoro v. Portugal*, *supra* nota 5, Considerando vigésimo primero.

¹⁴ *Caso Heliodoro Portugal v. Panamá*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2011, Considerando vigésimo primero y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de 19 de junio de 2012.

¹⁵ Tesis 1a. LVI/2015 (10a.), de la Primera Sala, de rubro y texto: **“TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LAS PERSONAS**, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1423

- II. que el acto reclamado debe ser considerado por el particular, violatorio de sus derechos humanos.

“Históricamente, las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son un reconocimiento en la norma constitucional de los derechos naturales y fundamentales del hombre. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todos los habitantes de la República contra los actos arbitrarios de autoridad, que dan a sus titulares la potestad de ser exigidos únicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la propia Carta Magna consagra, esto es, la acción constitucional de amparo.”

Esta misma disposición es la que se encuentra en el artículo 1º, fracción I y III, de la Ley de Amparo, que dice:

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
- II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
- III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

Así, el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado.

La acción constitucional de amparo es un derecho público subjetivo que otorga la Ley Suprema a todo individuo que se vea lesionado en sus derechos humanos, puede acudir a juicio de amparo, pues éste es un medio de protección de orden constitucional, en ese aspecto específico. El juicio de amparo es un sistema integral de defensa de los derechos humanos, máxime, que en relación a las fracciones I y III del artículo 103 constitucional se le reclamó al Ejecutivo derechos inderogables de la persona humana en el caso concreto.

Ahora bien, en el presente caso, se violenta lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución, puesto que el Estado Mexicano, sin tener facultades para ello, ha establecido por un periodo de seis años, tres meses, ilegalmente, estado de

excepción de derechos fundamentales no derogables, luego, al acudir a instancia constitucional, mediante los juicios de amparo indirecto y sus anexos: 1118/2016, 288/2017, 349/2017¹⁶, 545/2017, 627/2007, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018 hacen hechos notorios, de este estado de excepción de derechos fundamentales, en el que las autoridades, siguen vulnerando en el caso concreto derechos inderogables de la persona humana, en el que no se observa a la fecha que se dé cumplimiento a los preceptos constitucionales conculcados; los perpetradores del delito de genocidio en sí y por sí mismo, tienen total impunidad, hecho notorio en los juicios de amparo citados y sus anexos, que en sí y por sí mismos son pruebas de este estado de excepción de Derecho. No obstante, los preceptos constitucionales y los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos que el Estado Mexicano a firmado y ratificado, demarca prohibición expresa para actualizar delito de genocidio, luego, “estado de excepción perennizado: en el que se violenta una serie de derechos protegidos en los artículos 1; 4, párrafo VII y VIII; 14; 16; 17; 22; 27, (derecho a la propiedad); 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la especie, el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones *erga omnes*; precepto constitucional que garantiza que ninguna autoridad puede invadir la esfera jurídica de la autoridad federal su autonomía y determina su competencia exclusiva, entre otros mandatos, solamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que podrá restringir o suspender de manera formal y no de hecho en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Sin embargo, **no podrá restringirse ni suspenderse** el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos, el principio de legalidad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos; que está restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Por lo que si el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formalizara el estado de excepción de derechos fundamentales no derogables conforme a la Constitución, corresponde de manera exclusiva al Máximo Tribunal Constitucional del país, la revisión oficiosa del decreto del ejecutivo, siendo importante mencionar que de conformidad con el principio de interdependencia al ser vulnerado un derecho, se vulneran en el caso concreto los preceptos constitucionales: 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27, 29, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego, “el Estado está obligado a responder *sua sponte* con determinadas medidas de investigación, actos encaminados a sancionar y castigar a los perpetradores, y mecanismos que garanticen el acceso a la indemnización” y, “[a]l mismo tiempo, la víctima tiene un derecho directo a procurarse protección y reparación judicial”¹⁷; violentando a la fecha estás obligaciones que mandatan el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

¹⁶ Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México

¹⁷ Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala

Excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables:

Así tenemos, que la coyuntura en el presente caso, que existe entre el derecho de solicitud de acceso a la justicia y el estado de excepción de Derecho y las violaciones a derechos fundamentales no derogables determina la vulneración al artículo 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27, 29 y 133 de la Constitución.

El artículo 1o. párrafo tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos; asimismo queda prohibida toda discriminación.

El artículo 103 Constitucional, menciona que los *“Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite*

- I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;”*
- II. (...)*
- III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.*

El numeral 1o. de la Ley de Amparo mandata que: *El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:*

- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;*
- II. (...)*
- III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

En este entendido, el artículo 1 de la Constitución menciona que el Estado tiene como obligación prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación; asimismo, el numeral 1o., fracción I y III de la Ley de Amparo, mandata que el juicio de amparo resolverá toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad de los Estados o de la Ciudad de México, que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 103, fracción I y III, de la Constitución menciona que:

Los Tribunales de la Federación resolverán la controversia que se suscite por actos y omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; **y por actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal;**

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos **que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:**

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. Nota. Lo resaltado es propio

Derivado de éstos mandatos el numeral 1o. de la Ley de Amparo, menciona que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano ha ratificado; asimismo por actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, **que invadan la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

Con fundamento en los artículos anteriores, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por actos que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta guisa, **la Suprema Corte de Justicia de la Nación** conocerá de actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, **que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

“...solamente **el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión** o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado...”

Asimismo, mandata que los decretos que se expidan de suspensión o restricción del ejercicio de los derechos y garantías, **no debe contraerse a determinada persona**; asimismo, el párrafo segundo de este artículo, menciona, **que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**

El párrafo tercero del numeral que nos ocupa, **prohíbe la suspensión del ejercicio de los derechos y garantías sea arbitraria**, está restricción debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en la Constitución y ser proporcional al peligro que se hace frente, observando en todo momento los



principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

El último párrafo menciona: **“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”**

Por lo que el artículo 29 de la Constitución, mandata, que solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender mediante decretos en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías, **mismas restricciones que serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, la restricción del ejercicio de los derechos y garantías, no debe contraerse a determinada persona; pero limita esta suspensión, esto es, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Luego, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso concreto, formalizó en juicio de amparo el estado de excepción de derechos fundamentales no derogables, por consiguiente, el acto del ejecutivo suspende formalmente los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el caso concreto.

Esto es, el Gobierno de la Ciudad de México invadió la competencia del ejecutivo, decretando un estado de excepción de *facto*, al vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de los quejosos, incumpliendo con los preceptos constitucionales, invadieron la esfera de competencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más en juicio de amparo con número de expediente el ejecutivo formalizó el estado de excepción, en el que se ha constituido crimen de Genocidio:

Construyendo el presente caso que deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su fuente convencional en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refieren a la obligación de las autoridades de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En esta guisa, las disposiciones de la Ley de Amparo, establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de manera supletoria, y en su defecto, los principios generales de derecho en el entendido de que la interpretación de dicho código adjetivo y los principios generales de derecho debe tomar en cuenta el principio de buena fe, el principio de favorecimiento de la acción (*pro actione*) y el principio de interpretación más favorable (*principio pro personae*) en relación al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y aun recurso efectivo, principios inspirados en el artículo 17 de la Constitución incluyendo *inter alia*, el artículo 25.1 y 25.2 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menciona que *“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus*

44

45

46

47

funciones oficiales” y la obligación de “desarrollar las posibilidades del recurso judicial”.

Al respecto la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado tesis aisladas 1a. CCXCIV/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.**

Si bien es cierto que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos gozan de un margen de apreciación para articular la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también lo es que los requisitos y las formalidades establecidos en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia de ese derecho. Así, en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al legislador no sólo la arbitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una desproporción entre los fines que aquellas formalidades y requisitos previstos en la ley preservan para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican. Lo subrayado es propio.

En el presente caso las normas imperativas, relativas a los derechos del hombre, al reconocimiento de la dignidad humana base de los demás derechos: a la no impunidad, a la justicia, al derecho de no ser torturado, el derecho a la vida, el derecho de no ser discriminado, el derecho a no ser amenazado con pena privativa de la libertad o de la vida, el derecho de que no se imponga a los quejosos castigos como penas anticipadas, el de ejercer acción penal ante un Juez Oral con competencia para delitos oficiosos (juicio de amparo 627/2017), como forma de castigo, el derecho a que no se soslaye el interés superior de la niñez, el derecho a la propiedad (juicios de amparo 1118/2016, 288/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018), el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho a no vivir con zozobra, que en cualquier momento el Estado Mexicano¹⁸ nos imputará hechos falsos en libre tipificación de delitos, con toda impunidad, en los que no se permita conocer a los quejosos de que se nos acusa (si nos atrevemos a denunciar éstos hechos o a intentar ver el expediente con la intención de saber de qué se nos acusa, seremos torturados, vejados, humillados...), ejerciendo acción penal, como delito oficioso (unidad de gestión once, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)¹⁹, el derecho a no ser privados de seguridad

¹⁸ Juicio de amparo indirecto: 627/2017 y 349/2017.

¹⁹ Ello es así, por ejemplo, la policía; el Ministerio Público en conjunto con algunos habitantes del “pueblo”, como lo llama el agente del ministerio público Manuel Gallegos Guzmán (juicio de amparo 627/2017, 349/2017, 288/2017, 651/2017 substanciados en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México), nos imputan a los quejosos hechos falsos, ejerciendo extrema violencia, haciéndonos saber por terceros, o bien, mediante informes de fecha 26 de octubre de 2017, 09 de noviembre de 2017, rendidos ante el Juzgado de Distrito en la substanciación del juicio 627/2017, en la que la autoridad responsable informa respectivamente, que sigue investigando, sin tener



jurídica, a no ser vejado, a no recibir castigos infamantes, **actualizando crimen de genocidio: basada en motivos políticos y sociales cometida por autoridades y un grupo que ejerce un poder sobre un territorio determinado con objeto de someter a la parte quejosa a una forma de vida en la que se ha negado y se sigue negando de forma permanente el goce de derechos fundamentales de los quejosos, entre otras violaciones graves a derechos humanos, denunciando una y otra vez inacceso a la justicia**; solicitando en el transcurso de seis años con tres meses ante diferentes autoridades (órganos de gobierno de la Ciudad de México y federal) que cesaran éstas graves violaciones, máxime si en el presente caso la sistemática y planificada violación a los derechos humanos que han sido denunciados: al Procurador General de Justicia del Distrito Federal²⁰, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; al Secretario de Gobernación, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos²¹.

Pues, en el caso concreto se ha vulnerado derechos humanos, al tenor del artículo 1º, 29 y 89, fracción X, de la Constitución, en que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de, respetar, proteger y o garantizar los derechos humanos, mandato constitucional que tiene como consecuencia el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. El acceso a la justicia, así como su impacto en el debido proceso, y la defensa de los quejosos, particularmente, se ha conformado un grupo de poder público y privado en contra de los quejosos, que de forma intencional y altamente planificada nos han arrastrado a sufrimientos ignominiosos. Daños que se siguen solidificando como método sistemático; derivando en lesión grave a la integridad física, mental y moral, lesiones presentes y futuras. La corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tienen diversas connotaciones de grado y abarcan desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta²².

Aunado a la excepción de las garantías judiciales y protección judicial indispensables para la protección de tales derechos:

certeza jurídica los quejosos que delito investiga, acudiendo la policía a ejercer castigos infamantes. Por lo que la parte quejosa vive con temor, zozobra; sin derechos fundamentales, sin que la autoridad responsable a la fecha del presente escrito se pronuncie e **instaure una investigación, sanción y reparación del caso concreto**.

²⁰ En fecha 27 de diciembre de 2017, mediante escrito dirigido respetuosamente al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, solicitamos se nos proporcionara copia de las “audiencia públicas” **(que eran concertadas por la licenciada Fabiola Hernández Espíndola, Secretaria Auxiliar del C. Procurador de Justicia de la Ciudad de México)** e informes de las mismas, que tenían verificativo en las Fiscalías Desconcentradas de Investigación en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, etc.; audiencias a las que acudían los quejosos: Julio Cesar González Nava, Martha Patricia González Nava y/o Carolina González Nava, acompañados por Israel González Nava; con la finalidad de presentarlas como prueba de los malos tratos, burlas, interrogatorios, tortura, vejaciones, violencia, humillaciones, intimidación, amenazas; conductas realizadas una y otra vez, en contra de los quejosos por agentes del ministerio público. **Acudíamos de buena fe a estas audiencias a solicitar tener acceso a la justicia, a que se respetaran derechos fundamentales como lo es el de la vida, la integridad psíquica y física, el patrimonio entre otras.** Más deliberadamente en estas “audiencias”, una y otra vez como método sistemático perpetraban estas violaciones; **en el presente caso no se tiene acceso al Ministerio Público local ni federal.**

²¹ Juicio de amparo indirecto 260/2018

²² Caso Espinoza González vs Perú, párrafo 142

En esta guisa, los innumerables juicios de amparo indirecto son hechos notorios²³, en sí mismos, son probanzas del estado de excepción de Derecho, y las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los quejosos, la afectación a nuestros derechos más básicos, en las que las autoridades, figuras políticas y particulares, han actualizado crimen de genocidio, pues, la destrucción intencional de mi vivienda, la tortura, persecución u otros actos inhumanos de carácter similar que sean perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo, sometiendo a los quejosos intencionalmente a condiciones de existencia que han acarrear nuestra destrucción física, total o parcial, hechos que han causado lesión grave a la integridad física, mental y moral.

II. Violación al estado de excepción de Derecho y violación a derechos fundamentales no derogables:

Violación al estado constitucional, en el caso concreto la aplicación y formalización del estado de excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables, de forma lógica, ha derivado en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

La garantía constitucional (el derecho a la legalidad, artículo 14 constitucional) para la protección de los derechos conculcados, inmersa en el artículo 103 y 107 de la Constitución, ha sido vulnerada de tal manera que han sido inefectivos a la fecha del presente escrito.

Ha sido vulnerado el artículo 133 de la Constitución, Supremacía Constitucional, garantía objetiva de la Constitución y de los derechos que la consagran.

Hechos que conllevan responsabilidad de los funcionarios públicos, figuras políticas y particulares que han ordenado, ejecutado actos del Poder Público que han derivado en el presente caso en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, delitos que constituyen crimen de genocidio, siendo además violatorio del artículo 108, 128 de la Constitución²⁴. No habiendo eximente la invocación de cumplimiento de órdenes superiores (responsabilidad en la cadena de mando).

El artículo 29 de la Constitución le confiere facultad extraordinaria al Ejecutivo, que sólo procede ser adoptada en circunstancias especiales, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más ésta facultad es limitada, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Estando reforzado este mandato, en el artículo 133 de la Constitución.

Pero esta potestad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ejercer mediante decretos, no está exenta de controles. **El decreto que ordene la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, serán revisadas de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

²³ juicios de amparo indirecto: 288/2017,545/2017,349/2017,627/2017,651/2017, 260/2018, substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, excepto el juicio 349/2017, substanciado por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito

²⁴ Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.



Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud **sobre su constitucionalidad y validez**:

La garantía para la defensa de los derechos fundamentales, consagrado en el artículo 103 y 107 de la Constitución, como derecho de toda persona a ser amparado, no podrá suspenderse.

El Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por **actos ejecutivos formales**, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Los derechos fundamentales no forman parte de la suspensión o restricción

A la parte quejosa se le ha negado la protección judicial efectiva, en vía de amparo

En el presente caso se encuentra un absurdo jurídico, de formalidad Ejecutiva, sin soporte *de iure*, existe plena inseguridad jurídica ("*habeas corpus*"²⁵) que ha afectado el Estado de Derecho, lo cual configura un cuadro sistematizado de crimen de genocidio. Dando una informalidad jurídica de estado de excepción de Derecho, suspensión de derechos fundamentales por un periodo de seis años, tres meses (enero de dos mil trece al mes de marzo de dos mil diecinueve), sin garantías judiciales efectivas, en el que se ha simulado que los quejosos tenemos acceso a juicio de amparo, a la fecha no se ha dado de forma mínima un establecimiento al orden jurídico, limitación a la ilegalidad o régimen relativo al ejercicio de los derechos que han sido suspendido. En un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico, en el presente caso, se ha "suspendido el Estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la inseguridad jurídica."²⁶

El acto formal del presidente de los Estados Unidos Mexicanos es hecho notorio en juicio de amparo 909/2018, decreto formal de suspensión de los derechos fundamentales no derogables, incidiendo sobre diversos derechos fundamentales: a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Al haberse decretado en el presente caso la suspensión de derechos fundamentales, y regularse ejecutivamente al respecto, ello abrió de forma sistemática de forma ilimitada a la impunidad: a la permisión de ilegalidad de los funcionarios, figuras políticas, particulares, en conjunto y/o "pacto criminoso",

²⁵ En el sentido que el "*habeas corpus*" tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

²⁶ Siendo un ejemplo de ello, en días pasados, autoridades pertenecientes a seguridad pública (policías auxiliares abordó de patrullas) y al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras en conjunto con particulares, María Dolores Espinoza Bassoco (habitante de Andador Tabaqueros), acudieron al domicilio de la parte quejosa golpeando sus muros con mazos (dañándolos, a su vez, rompiendo tubería de drenaje), "mencionado que en cuanto salgan los detienen", observando, Carolina González Nava, que venían servidores públicos y particulares con herramientas (mazos) a bordo de un automotor con número de unidad ECO 366.

han actualizado delitos que constituyen crimen de genocidio. Más nada se ha regulado, nada se ha dicho, y las autoridades han hecho lo que les ha parecido, donde ni siquiera el elemental principio de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación se ha respetado. La informalidad e inseguridad jurídica es el pan de cada día. Condenable (ilegal) desde cualquier punto de vista.

formalidad jurídica insólita, se ha suspendido el orden jurídico en el presente caso, con resoluciones clandestinas, fantasmas y/o, llevadas de *facto* (no formales) o formales; basta ver las resoluciones que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha hecho del presente caso, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal, ahora, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación del Estado Mexicano.

En más de una ocasión a la parte quejosa: nos han torturado, la Representación Social ha hecho acusaciones insólitas, en el catálogo penal, no existe el tipo penal de solicitud de acceso a la justicia; “¿de homicidio por otras causas?!” (juicio de amparo 627/2017), ... o bien legalizar la aplicación de tortura por solicitar que no se permita que se derrumbe la vivienda que habitan los quejosos. Los expedientes de los juicios de amparo: 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018 lo demuestran; ello es así, en el presente caso se ha suspendido formalmente el Estado constitucional de derecho.

La informalidad jurídica, el atropello de derechos fundamentales y al orden constitucional que el Estado Mexicano ha formalizado, ejemplo de ello: el Gobierno de la Ciudad de México y del Secretario de Gobernación, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 260/2018, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, éste alto funcionario, no ha hecho otra cosa que propugnar en el presente caso por el estado de excepción de Derecho, la impunidad jurídica de la arbitrariedad.

Pues sin el menor respeto al Estado Constitucional, la parte quejosa ha sido arrastrada a sufrimientos ignominiosos por un periodo de seis años, tres meses, hechos que no han cesado, en que se nos ha denegado la protección judicial en los términos que mandata el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La previsión y mandato del artículo 1; 29; 89, fracción X, 103, 107 y 133 de la Constitución en el presente caso, que son en sí mismos la regulación de derechos fundamentales en la pertinencia de las garantías que regulan el estado de excepción han sido inobservados en el presente caso.

El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano que observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (1 y 133 de la Constitución), no incluyen los efectos de solicitud de acceso a la justicia, en oposición con el poder del Estado arbitrario que en “pacto criminoso” y connivencia con el poder particular en acciones incompatibles con la intención de someter a persona alguna a la acción de la justicia por crimen de genocidio, como circunstancia excepcional que autoriza formalmente la puesta en vigor de medidas de “emergencia” en el presente caso.

Causales que son ilegítimas, el estado de excepción en el presente caso obedece a razones espúreas en violación a los preceptos constitucionales y de los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos pertinentes que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado (sistema convencional).

El estado de excepción en el presente caso no es justificado, obedece a razones espúreas, que hace del presente caso un precedente que debe ser analizado en instancia constitucional, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”²⁷

Así tenemos, que los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos en relación al artículo 29 de la Constitución, permiten clarificar y diferenciar las causales que autorizan la suspensión de ciertos derechos humanos, de aquellas situaciones que no permiten o no prevén suspensión alguna:

El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las observaciones generales que de él han derivado por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Para el efecto, estos instrumentos genera obligaciones *erga omnes*, inmerso en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En efecto, la obligación principal que el Estado Mexicano ha asumido como Estado Parte de los instrumentos mencionados en párrafos anteriores, es la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.²⁸); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27²⁹), prevén

²⁷ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial: Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

²⁸ Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva

la posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los estados partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional, sin discriminación alguna.

Mas, existen derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los cuales son normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29, 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Suprema de toda la Unión)

Convenciones Internacionales que no admiten ninguna posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales que protegen, Instrumentos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado, que le exigen obligaciones *erga omnes*: Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.

²⁹ Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

De modo que el Estado que declara, ya sea de hecho o formal, el estado de emergencia para suspender el estado de Derecho y derechos fundamentales no derogables, su decisión no esta ajena a un control internacional, y al control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 29, párrafo quinto, *in fine*, de la Constitución). Por ello, la carga de la prueba de la gravedad de la situación recae en el Estado Mexicano que ha impuesto las medidas de excepción de derechos y violentado flagrante y sistemáticamente derechos inderogables a la parte quejosa y a nuestra familia.

En concreto el estado de excepción que acontece es un asombroso desprecio y rechazo al orden jurídico; suspendido el estado de Derecho, ateniéndonos la parte quejosa a la informalidad y la inseguridad jurídica; en la ahora aplicación formal del estado de excepción de derechos fundamentales ha derivado en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, en el que existe denegación de control judicial, (hecho nulo) que hace preciso un control judicial efectivo.

Por consiguiente, al estar formalizado este estado de excepción, se ha violado el principio de notificación, de proclamación inmerso en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Las garantías de fondo: principio que debe tratarse de una amenaza excepcional, principio de proporcionalidad; principio de no discriminación; principio de intangibilidad de derechos humanos fundamentales y principio de compatibilidad con las obligaciones impuestas por el Derecho Internacional.

Principio de proclamación. Establece la necesidad que la existencia del estado de excepción debe ser proclamado oficialmente. Su propósito es evitar reducir las garantías de excepción de facto, mediante una norma de publicidad en el Derecho Interno.

Principio de notificación. Este principio establece la obligatoriedad a todo Estado Parte que haga uso del estado de excepción, de informar inmediatamente al Secretario General de la ONU, quien a su vez deberá comunicar a los demás Estados Partes los siguientes extremos (artículo 4.3):

- I. Las razones o motivos alegados
- II. La naturaleza de las medidas adoptadas
- III. Las disposiciones contenidas en el Pacto suspendidas

El presente caso tristemente es una "patología" de un estado de excepción de Derecho y de derechos fundamentales no derogables:

Se han vulnerado las Garantías de fondo:

Debe tratarse de una amenaza excepcional (artículo 4.1)

Principio de Proporcionalidad en relación al principio de estricta necesidad - principio basado en la teoría de la legítima defensa-, la relación entre las medidas adoptadas debe ser proporcional a la amenaza.

Luego, el Estado, en el caso concreto debe demostrar que su actuación es legítima.

Principio de No Discriminación (artículo 4.1 *in fine*), las medidas adoptadas no deben ser dirigidas a un grupo para su exterminio como en el caso acontece, lo que hace ilícita toda suspensión de derechos humanos que afecte solamente a un grupo de la población por razones de anular el derecho humano a la existencia.

Principio de Intangibilidad de derecho fundamentales:

Bajo este principio los Estados Parte les está restringida la suspensión de derechos humanos intangibles o inalienables, (artículo 4.2), pues revisten carácter de normas del *ius cogens*, pues se trata de normas imperativas de Derecho Internacional que no admiten acuerdo en contrario (artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados)

En el presente caso se han vulnerado de forma sistemática derechos de carácter imperativo en el que prevalece el principio de no suspensión bajo ninguna circunstancia que pudiera alegar el Estado Mexicano. Ello es así, durante las situaciones excepcionales, los derechos humanos fundamentales de toda persona no son materia de suspensión.

Por tanto, las actuaciones y omisiones que se han realizado en el presente caso son ilícitas (que no están permitidas ni siquiera en conflictos armados, Convenios de Ginebra), actos que se han ejecutado con la intención de destruir, total o parcialmente la integridad física, psíquica y moral de los quejosos. Aunado a la persecución objetiva por un grupo de poder público y privado que incluye figuras políticas que han hecho del presente caso una espiral de impunidad derivando en denegación de justicia.

Por lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a sus Estados Partes la de respetar y garantizar la totalidad de los derechos y garantías en él reconocidos, siendo una protección internacional. Asimismo, los artículos 40 al 43 de éste Pacto prevé los mecanismos de queja entre Estados o conforme al Protocolo Facultativo, toda persona que alegue una violación de los derechos que protege el Pacto Internacional podrá someter a la consideración del Comité de Derechos Humanos una comunicación escrita. En el cumplimiento de las garantías formales y materiales, exigidas por el artículo 4 del Pacto Internacional.

En este entendido, no existe justificación alguna para la suspensión de los derechos no derogables, amparados en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego el presente caso es una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. La inderogabilidad de derechos humanos fundamentales, aun durante situaciones de excepción de hecho, pueden constituir crimen de genocidio como el caso acontece.

Lo que representa un cuadro grave, persistente y manifiesto de violaciones a los derechos humanos. en el que se ha violentado, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un ejemplo son los múltiples juicios de amparo indirecto interpuestos por la parte quejosa: 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018 y 909/2018, más, son hechos notorios del Estado de excepción, en la que la parte quejosa solicita el respeto y vigencia real de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación; que conlleva reparación integral y sanción a los perpetradores de las graves violaciones flagrante y sistemática de los derechos humanos que acontecen en el presente caso.

Un ejemplo que clarifica la situación de esta inderogabilidad de derechos fundamentales es el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

“...que cualquier que sean las razones que hayan podido existir para interrumpir el proceso constitucional democrático, es inaceptable e inadmisibles la supresión y/o violación de ciertos derechos humanos que constituyen siempre el mínimo necesariamente vigente e inderogable y cuya existencia y respeto necesario en todo momento y en toda situación, sin que sea posible justificar su derogación, desconocimiento o violación. Este criterio de la inderogabilidad

absoluta de ciertos derechos- en especial del derecho a la vida, del derecho a no ser sometido a la tortura o a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y del derecho a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre reconocido en el artículo 27 párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia en Parte y enunciado también en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la consecuencia de un principio general que se encuentra en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos...”³⁰

Asimismo, menciona:

“Estos derechos inderogables –y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes -, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran”³¹

Cita de párrafos anteriores, que dan luz al presente caso:

En el caso concreto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos mínimos que por su misma naturaleza deben reconocerse y garantizarse, en cualquier situación y en todo momento. Derechos que existen con independencia de las obligaciones convencionales del ejecutivo, se imponen imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional.

Ahora bien, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 27, prevé que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, podrá adoptar disposiciones limitadas de suspensión de determinados derechos

Más, igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no autoriza la suspensión de derechos inderogables de la persona humana, entre las que se cuentan las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos (artículo 27.2 *in fine*).

La Garantías de forma prevista en el artículo 27.3 del Pacto de San José de Costa Rica, expresamente obliga al Estado Parte el principio de notificación el uso del derecho de suspensión en el que deberá informar inmediatamente a los demás Estados Parte de la Convención, por Conducto del Secretario de Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Las garantías de fondo previstas en el artículo 27.1 de la Convención, en cuanto a las situaciones que pueden ameritar la adopción de un Estado de emergencia o

³⁰ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

³¹ Doc. E/CN.4/1981/1500, nota 76.

a la integridad de la persona, como son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3); el derecho a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art. 5); la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 6) y el principio de legalidad y de retroactividad (art. 9). Está, además, prohibida la suspensión de la libertad de conciencia y de religión (art. 12); de la protección a la familia (art. 17); del derecho al nombre (art. 18); de los derechos del niño (art. 19); del derecho a la nacionalidad (art. 20) y de los derechos políticos (art. 23).
Párrafo 23

La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32). Párrafo 24

Ahora bien, el **principio de temporalidad**, previsto en el artículo 27.1, menciona que las suspensiones son válidas "por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación," por tanto, en el presente caso, es la suspensión del Estado de Derecho que **se ha prolongado ad infinitum**, por un tiempo de seis años, tres meses, en violación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El principio de proporcionalidad, regulado en el artículo 27.1 de la Convención Americana, establece que las disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas, deben ser sólo en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Por tanto, es ilegal todos aquellos actos que representan una respuesta excesiva por parte del gobierno, **el presente caso es un ejemplo de ello**, en el que se ha suspendido derechos inderogables por un tiempo *ad infinitum* injustificadamente, que de forma objetiva, en absurdo jurídico, el Estado de Derecho ha desaparecido, para dar paso a la arbitrariedad.

Por tanto, la suspensión de un derecho si y solo si es justificable en ausencia de otra alternativa para resolver una emergencia que ponga en peligro al Estado de Derecho, **no para derogarlo a favor de la impunidad**, de ahí que estas medidas no pueden tomarse en abstracto, debe ser un hecho real que está viviendo un Estado Parte en un momento concreto; el Estado parte debe demostrar que las medidas ordinarias no son suficientes para hacer frente a la situación.



Aunado, a que el principio de no discriminación (artículo 27.1), dispone que las medidas de excepción o de emergencia no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

En el presente caso la restricción de derechos inderogables de la persona humana entraña discriminación contrayéndose a la parte quejosa.

El estado formal de excepción ilegítimo de derechos inderogables (**vacío jurídico**), lesiona ostensiblemente la observancia de los derechos humanos más fundamentales creando un fenómeno de inseguridad y temor que ha lesionado el proyecto de vida, mismo que es consustancial al derecho a la vida. Aplicando penas de carácter indefinido, sin proporcionar el Estado, las razones jurídicas que justifiquen este **vacío jurídico**, en el que a los quejosos les quepa otro recurso que más que la **solicitud de revisión oficiosa de decreto de estado de excepción de derechos inderogables.**

La violación a los derechos no derogables, extremo respecto del cual los estándares son claros y absolutos, la denegación de justicia deriva de la fuerte presencia de consideraciones a figuras políticas que han hecho del caso un enorme vacío jurídico.

El Estado mexicano no ha respondido a la altura de las responsabilidades que la dignidad y el respeto a los derechos humanos imponen.

Los extremos para declarar una emergencia de tal gravedad que amenace la vida de la nación, están muy lejos del presente caso

Las medidas de emergencia ahora formales adoptadas en el presente caso bajo la medida de las exigencias, vulnera el principio de estricta necesidad y de proporcionalidad

La investigación de los hechos (fact-finding) en el presente caso se observa en los innumerables juicios de amparo y sus anexos, que son hechos notorios de la suspensión del Estado de Derecho (vacío jurídico) que acontece en el presente caso.

La ilegalidad de la suspensión del Estado de Derecho desaparece todo ordenamiento jurídico. Lo que no resulta lícito ni aceptable que autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, los límites legales a la actuación del poder público en el caso concreto son inexistentes, en el que el Estado está investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada por el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos, la negación a la aplicabilidad de éste en el presente caso. Conlleva una violación al principio de legalidad, por consiguiente, al Estado Constitucional de Derecho Democrático y la vigencia de los derechos más fundamentales.

Las garantías de forma y de fondo reguladas en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos humanos en relación al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza un régimen de excepción de ciertos derechos, en ambivalencia jurídica, **encuentra oposición por estos Instrumentos con el exclusivo fin de la defensa del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos más fundamentales.**

Como bien señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la suspensión de garantías, no significa, "...que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Formalizando que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.

Pues los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Presidente de la Republica que estén de acuerdo con la Constitución, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Luego si el Presidente de la Republica formaliza el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso, este es ilegal, a pesar de cualquier Ley, Reglamento o Constitución Local que se pueda invocar:

En el ordenamiento interno el artículo 29 de la Constitución regula la Suspensión de Garantías, confiriéndole obligaciones y facultades solamente al "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona."

"En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."

"La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación."

En esta guisa, el Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos **que sólo pueden ser trastocados por actos ejecutivos formales**, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Más, el estado de excepción de derechos fundamentales inderogables es severamente inaceptable a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos fundamentales que tienen calidad de normas de derecho imperativo.

Al respecto, el artículo 89 fracción X de la Constitución, se desprende que son facultades y obligaciones del Presidente de la República **denunciar**, suspender, **retirar reservas**, en el que observará en lo concerniente la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

En consecuencia, el Presidente de los Estados Unidos al contrario de actuar en plena legalidad, denunciando y retirando las reservas del estado de suspensión de derechos fundamentales no derogables, lo formaliza, acto ejecutivo, luego entonces, emite decreto de estado de excepción, constituyendo lo mandatado en

el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

En esta medida el artículo 89 fracción X de la Carta Magna en relación al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados, la necesidad del respeto, la protección y promoción a los derechos humanos inderogables, derechos que existen con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado mexicano que imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional, los Estados Partes “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”³⁹, hecho que se clarifica en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

“Estos derechos inderogables –y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes –, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran”⁴⁰

Asimismo, el artículo 89 fracción X de la constitución, menciona que el **Presidente de la Republica observará los** principios normativos de denunciar y retirar reservas, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”⁴¹

Luego, **es procedente la solicitud de revisión oficiosa del decreto ejecutivo de estado de excepción en el caso concreto**, pues de conformidad con el ordenamiento interno y convencional, le imponen imperativamente al Máximo

³⁹ Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.

Artículo 27 El derecho Interno y la observancia de los Tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46

⁴⁰ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981, nota 76 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁴¹ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial: Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

Tribunal Constitucional del país, por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, **obligaciones, siendo parte de sus funciones, ser garantes que el Estado Mexicano respete, proteja y promueva los derechos humanos de las personas**, esto con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta que las probanzas del estado de excepción son los juicios de amparo: 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 74/2018, 260/2018 y 909/2018. Hechos notorios de un Estado formal de excepción de Derecho, y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Pues, la aplicación ilegal de los estados de excepción trae aparejadas graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, en el caso concreto la excepción de un Estado Constitucional, ha sido la “normalidad”:

La suspensión de un Estado de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, ilegalmente pretende conformar un “engaño”, en el medio de control de la constitucionalidad, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las “garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”, esto con fundamento en el artículo 8.1 y 25 de la misma Convención.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que “los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.”⁴²

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión⁴³

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que en el presente caso, por un periodo de dos años, cuatro meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁴² Párrafo 25, página 9.

⁴³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

Luego, en el caso concreto se vulnera los artículos 1.1, 8.1, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos; los artículos 1, 14, 16, 17, 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado tiene límites a su actuar pues La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba en su artículo 4 que:

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

Esto es, "el sentido de la palabra **leyes** dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal."

En este contexto, sigue diciendo la Corte que, "no es posible interpretar la expresión **leyes**, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual " los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos ".⁴⁴

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la obligación que está a cargo de todo Estado Parte en la Convención de " respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción " (art. 1.1). De esa obligación general se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el artículo 25.1, " a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención ".⁴⁵

Pues la institución procesal del amparo contenido en el artículo 25 de la Convención, lo establece como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales, que igualmente, en términos amplios, menciona la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas

⁴⁴ Opinión Consultiva OC-6/86, Corte interamericana de Derechos Humanos, "La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", párrafo 26

⁴⁵ Opinión Consultiva OC-9/87, "Garantías Judiciales en Estados de emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos) párrafo 22.



sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde concluye, **a fortiori**, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia⁴⁶

La invocación de los preceptos Constitucionales y los tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos en el presente caso, han sido insuficientes para evitar que prosigan las graves violaciones a derechos humanos, luego el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables ha sido formalizado *ad infinitum*, estas medidas en el presente caso han sido exitosas, el estado de represión es abrumador, la parte quejosa ha sido torturada, intimidada, coaccionada, incriminada, amenazada con pérdida de la vida y de la libertad, vejada, humillada, en innumerables ocasiones con aquiescencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, de la Contraloría General de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal de Defensoría Pública (Licenciada Yasmín Rosales Muñoz...) que en asociación y complicidad con figuras políticas,⁴⁷y ahora con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que ha formalizado: la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos fundamentales no derogables.

De manera lógica, esta perennización de seis años y tres meses de estado de excepción, de forma alguna, ha sido local, las Instituciones y las autoridades federales han coadyuvado (en asociación y complicidad) a ésta excepción con aquiescencia hacia las autoridades locales y/o federales que se han conducido con total ilegalidad (destruyendo el Estado de Derecho) en espiral de impunidad, es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Federal de Electricidad⁴⁸, el Instituto Federal de Defensoría Pública...

⁴⁶ Párrafo 23, *idem*

⁴⁷ La ex Delegada Leticia Quezada Contreras en la Magdalena Contreras y el también ex Delegado José Fernando Mercado Guaida, que tiene estrecha amistad (nexo causal) con la **Concejal Diana Álvaro Gallegos**, asimismo, del titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de abogados particulares con nexos políticos tales como José Máximo Pérez Romero, Leopoldo Guijosa Salas, Javier Guijosa Rubio (familiares estos dos últimos abogados de ex delegado periodo 2006-2009 en Magdalena Contreras Héctor Guijosa Mora.

Asimismo, cabe hacer mención que según información de Acceso a la información Pública con No. de folio 0109000020318, con fecha 29 de enero de 2018, el Licenciado Javier Guijosa Rubio con cédula profesional 7623998, expedida por la Secretaría de Educación Pública en el año de 2012, es Policía en activo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Información que viene a colación, misma que está relacionada con el juicio de amparo 627/201, Anexo I, fojas 205-245, hechos que derivaron en delitos de lesa humanidad: tortura, persecución objetiva, etc.

⁴⁸ **En escrito de fecha 13 de marzo de dos mil dieciocho, la parte quejosa declara que no sólo las autoridades pretenden que se derrumbe la vivienda de la parte quejosa, los habitantes del multicitado Andador Tabaqueros, específicamente el empleado federal de la Comisión Federal de Electricidad Diego Arturo Lara Nava (juicio de amparo 288/2017 y 651/2017, 627/2017, 260/2018), con connivencia de esta Empresa del Estado mexicano pretenden privarnos de energía de luz.**

Ahora bien, en referencia al principio de temporalidad, previsto en el artículo 27.1, menciona que las suspensiones son válidas “por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,” por tanto, en el presente caso, es la suspensión del Estado Constitucional de Derecho que se ha prolongado *ad infinitum*, por un tiempo de seis años, con tres meses, en violación al artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4.2 y 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 29, párrafo segundo y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, es necesario mencionar probanzas idóneas de este “pacto criminoso”, con la finalidad de reseñar a groso modo la supresión/violaciones graves a derechos humanos, acaecidos en el caso concreto, en la que acontecido hechos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, no se han controlado por la actitud del Gobierno de la Ciudad de México, y ahora, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales inderogables de la parte quejosa. **Las propias autoridades que gobiernan, son la que han actualizado de forma directa e indirecta estas graves violaciones a derechos humanos que constituyen en sí y por sí mismos delito de genocidio.**

La afirmación –hecha a Carolina González Nava- del agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince en las instalaciones pertenecientes a la Representación Social, que los habitantes del Andador Tabaqueros, *tenían el conecte en la Delegación, y que esto lo hacía primero, porque este caso lo había encargado el Procurador, después por su trabajo y por último porque nos conocía*⁴⁹, denuncia dirigida al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México con fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince. (fojas 758 a 761 del Anexo I del juicio de amparo 288/2017, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito.)

Siguiendo en este orden de ideas, con fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, en hechos que tienen conexión con el juicio de amparo 627/2017, substanciado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, personal adscrito del Órgano Político en la Magdalena Contreras del Gobierno de la Ciudad de México⁵⁰, se presentó en la vivienda de la

⁴⁹ Negándose llanamente a llevar a cabo diligencias.

⁵⁰ En días posteriores (sábado veinticinco de agosto de dos mil dieciocho) a este escrito los habitantes del Andador Tabaqueros, golpearon los muros y estructura de la vivienda de la parte quejosa, subiendo a las lozas para gravar con una cámara al interior de la vivienda de la parte quejosa, al reportar estos hechos al número telefónico 911, el operador contestó que acudiera al Ministerio Público, cortando la llamada, hechos que se han repetido una y otra vez, otro ejemplo de ello, las autoridades pertenecientes a seguridad pública (policías auxiliares abordó de patrullas) y al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras en conjunto con particulares, María Dolores Espinoza Bassoco (habitante de Andador Tabaqueros), acudieron al domicilio de la parte quejosa golpeando sus muros con mazos (dañándolos, a su vez, rompiendo tubería de drenaje), “mencionado que en cuanto salgan los detienen”, observando la quejosa Carolina González Nava, que estos servidores públicos (del Órgano Político) y particulares con herramientas (mazos) llegaron al lugar de los hechos a bordo de un automotor con número de unidad ECO 366, hechos que se denunciaron a seguridad pública con número de folio 518962. Asimismo, los anexos del juicio de amparo 651/2017, demuestran que la parte quejosa denunció ante el Gobierno de la Ciudad de México, detonaciones de armas de fuego provenientes del Andador Tabaqueros. Asimismo, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hechos que sólo son un ejemplo, mas, demuestra el estado de excepción de Derecho en el presente caso.

parte quejosa para amenazarnos con la finalidad de que acudiéramos a las instalaciones de éste Órgano Político, en la que según terceras personas afirmaron que seríamos detenidos por Policía de Investigación, hechos que se corroboran en el juicio de amparo anteriormente citado, pues los días 9, 10 y 11 de diciembre acudieron a tratar de detenernos al “pueblo⁵¹” arbitrariamente, por lo que tuvimos que resguardarnos como en múltiples ocasiones han tratado de detenernos en las inmediaciones de nuestro domicilio⁵² (hecho notorio es el juicio de amparo 349/2017⁵³, 651/2017, 74/2018.)

En contexto con el párrafo anterior, el juicio de nulidad V-76315/2015 sustanciado en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, constante de 409 (cuatrocientas nueve) fojas, es un hecho notorio de Estado de suspensión de derecho y de suspensión de derechos fundamentales inderogables, pues a éste juicio la parte quejosa tuvo acceso a las actuaciones⁵⁴ por medio de solicitud de acceso a la información pública, en la que se proporcionó copia simple con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, en consecuencia la parte quejosa intento tener acceso a la justicia mediante juicio de amparo indirecto 74/2018 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, más, se nos denegó este acceso, está probanza es certeza plena del Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

En este juicio altamente planificado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, juicio de nulidad⁵⁵ de recuperación del bien del dominio público Andador Tabaqueros en el que se tachó de ilegal el procedimiento administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015 (hojas 259 a 264 de este juicio de nulidad V-76315/2015) que ilegalmente nunca pretendió la autoridad demandada⁵⁶ llevar a cabo, pero sirvió para tener los motivos suficientes para planificar castigos que ni siquiera en conflictos armados está permitido (Convenios de Ginebra)⁵⁷, hechos notorios del juicio de amparo indirecto 627/2017.

⁵¹ o bien, “pueblo”, tal como es denominado por el Agente del Ministerio Público Manuel Gallegos Guzmán, para dirigirse a la suscrita de forma peyorativa, al relatarle de viva voz la tentativa de homicidio que el señor Alfredo Nava Gallegos (habitante del Andador Tabaqueros), planeó y ejecutó en contra de uno de los quejosos, tratándolo de arrollar con el vehículo que conducía), burlándose, “*en el pueblo no pasa nada*”.

⁵² En días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (María Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habita la parte quejosa, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.

⁵³ substanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito

⁵⁵ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la institución de la “cosa juzgada fraudulenta” utilizada en el caso *Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala*⁵⁵ y en el caso *Gutiérrez Soler Vs Colombia*. En éste último caso, el juez Sergio García Ramírez, en voto razonado, refiere a **sentencias que fueron dictadas de manera engañosa y que en realidad no pretenden hacer justicia sino simularla**.

⁵⁶ Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras José Fernando Mercado Guaida, y Director General Jurídico y de Gobierno en la Magdalena Contreras.

⁵⁷ Castigos altamente planificados, tortura, denigración, humillación, incriminación, amenazas que en cualquier momento podemos perder la vida o la libertad, ejercieron acción penal ante un Tribunal de delitos oficiosos en el que con toda impunidad la Representación Social le mencionaba al Juez de Control que vinculara a proceso por un daño a ésta vía pública en comento, presentándola en juicio como propiedad privada⁵⁷, diciéndole que presentaba daños por filtración de agua, por un monto de seis mil ocho cientos pesos, entre otras violaciones procesales graves, pretendían que el Juez le arrebatara la libertad a los quejosos (pues han amenazado que al entrar a nuestro domicilio van a encontrar (fabricar) delitos graves), tal como la suscrita fue torturada en interrogatorio que le denominaron “preguntas especiales de esta Representación Social⁵⁷”, con fecha

Es propicio en este punto, traer a colación el juicio de amparo indirecto 74/2018, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, uno de los actos reclamados fue el juicio de nulidad en comento, del que se tuvo acceso a los autos por medio de solicitud de información pública con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, más el Juez a quo, resolvió en conjunto con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 28/2018), no tener por presentada la solicitud de demanda de amparo a pesar de que existía como uno de los actos reclamados la omisión de dar contestación al derecho de petición⁵⁸.

Luego, poco a poco, tal como acontece en la tortura de la “gota de agua”, hasta que sobreviene la muerte de la víctima, es como el Estado Mexicano ha despojado a la parte quejosa de derechos fundamentales inderogables, que se cuenta entre uno de estos derechos al medio de control de la constitucionalidad.

Las hojas enumeradas como 97 a 373 del juicio de nulidad V-76315/2015, fue entregado, previo pago de copias simples a la suscrita por la Oficina de Información pública del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, conforman el expediente administrativo PARA/LMC/DGJG/010/2015, en la que se emitió Resolución Administrativa y Orden de Ejecución Para la Recuperación de Vía Pública del Distrito Federal (Andador Tabaqueros), prueba idónea de la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables.

Es de resaltar las hojas con número 103 a 115; 121 a 122; 137 a 138; 160 a 165 169 a 175 del juicio de nulidad en comento, escritos de denuncia dirigidos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el que en conjunto con los autos que conforman, Anexos I y V de los juicios de amparo indirecto 288/2017 y 651/2017⁵⁹, son hechos notorios de la responsabilidad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el presente caso, luego causa un gravoso agravio que el Presidente de la Republica, ejecute el acto formal de interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables, pues la actitud del Estado Mexicano dista *ad infinitum* a un Estado Constitucional de Derecho, pues ha planificado con un rotundo éxito graves violaciones a derechos humanos que conllevan exterminio de la parte quejosa, hechos notorios de la ilegalidad en su más puro vertiente son los innumerables juicios de amparo solicitados por la parte quejosa. El Ejecutivo decreta que la parte quejosa acuda de nueva vez a las Instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, aun cuando éste gobierno se niegan rotundamente a observar un Estado Constitucional de Derecho, daría como resultado, *ad infinitum*, bajo la figura procesal de impunidad: aplicación de tortura, privación de la vida o de la libertad, asimismo, aun cuando existe so pena al acudir a estas Instituciones, entre las que se cuentan a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, es

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis en la que me interrogaban “*que personas más habitan con usted el inmueble materia de los hechos...*”, a sabiendas que en todo momnto los habitantes del Andador Tabaqueros nos gravan con cámaras de video al interior del domicilio de la parte quejosa,⁵⁷, diciéndome que me declarara culpable, que pagara o declaraba culpable a la quejosa Martha Patricia González Nava, iban a entrar a nuestro domicilio....(juicio de amparo 627/2017)

⁵⁸ Los actos reclamados conllevaban la causa y efecto del estado de excepción de Derecho y la suspensión de derechos fundamentales inderogables, no obstante que se señaló a las autoridades que tienen responsabilidad ineludible en el presente caso, autoridades responsables locales y federales, siendo una de ellas el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de los actos reclamados En derecho de petición se le solicitó al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad responsable en el juicio de amparo 627/2017), que diera parte al Presidente de la República, la persecución política, tortura, actos preconcebidos, que buscan el exterminio de la parte quejosa, hechos que constituyen crimen de genocidio.

⁵⁹ el expediente de la averiguación previa FMC/MC-2/T2/00042/13-01



colaborar la propia víctima, a que en esta ocasión se de una desaparición forzada, lo cual de ninguna manera pasará, si el Presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene ese decreto, es necesario que el presente caso sea expuesto a nivel Internacional, **de conformidad con el artículo 89 fracción X de la Constitución, bajo el Principio de notificación, inmerso en el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se expongan los hechos del presente caso, tomando en cuenta que el Estado de excepción aplicado a la parte quejosa, no es justificado**, obedece a razones espúreas, con la finalidad de **exterminio, total**, que hace del presente caso un precedente que debe ser analizado por el Máximo Tribunal Constitucional del país, tal como lo señaló Hernán Montealegre:

“...por ser los derechos humanos una materia de carácter internacional, sustraída a la sola jurisdicción doméstica del Estado, es de legítimo interés de la Comunidad de Naciones la eventualidad de su suspensión, de la que es elemento integrante la causal que la justifique. Esto significa que la determinación objetiva de la existencia o inexistencia de un peligro nacional como circunstancia que un gobierno invoque para suspender el ejercicio de los derechos humanos es también una materia de competencia internacional”⁶⁰

El Estado de Derecho que rige en situaciones normales no puede verse afectado en situaciones excepcionales, pilares normativos que sólo pueden verse trastocados por actos ejecutivos formales, pero nunca a la ausencia de legalidad o a la arbitrariedad.

Resaltando que los derechos fundamentales no forman parte de la suspensión o restricción, mas existe plena inseguridad jurídica (“*habeas corpus*”⁶¹).

Las amenazas de tortura, incriminación y por consiguiente pérdida de la libertad o de la vida son el pan de cada día, sin derechos la parte quejosa se atiene a la nada jurídica.

La gravedad de la supresión/violación sistemática a los derechos humanos consiste en los acuerdos entre órganos de gobierno, mediante los cuales comprometen el ejercicio de sus obligaciones y facultades jurídicas para afectar a la parte quejosa. Hechos notorios en los juicios de amparo indirecto 260/2018 y 909/2018.

Las probanzas públicas, demuestran plenamente que el origen de suspensión de derechos fundamentales inderogables, derivaron del escrito firmado por Carolina González Nava, dirigido al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa en fecha, seis de mayo de dos mil catorce, con número de folio 023636. (juicios de amparo 288/2017, 651/2017, 74/2018)

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el presente caso, ha ratificado la misma supresión/violación al derecho humano de acceso a la justicia, en que se ha formalizado el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, prueba de ello, como ahora

⁶⁰ Hernán Montealegre Klenner. La Seguridad de los Estados y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Editorial, Edición Academia de Humanismo Cristiano, 1979.

⁶¹ En el sentido que el “habeas corpus” tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos

Por lo tanto, es la denuncia de los graves hechos que se han producido, a partir del día de septiembre de dos mil dieciséis; asimismo, existen múltiples denuncias de violaciones graves a derechos humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la que en comparecencia directa y vía telefónica, con Carolina González Nava, se le informó, que no pasaba nada, en insólita respuesta el Director de Quejas, se burla: *"sólo están enojados porque no les hacen caso"*.

Las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos no han sido controlados y encauzados por los órganos del Estado, a través de los procedimientos ordinarios establecidos en la Constitución para proteger los derechos fundamentales de la parte quejosa, hecho que prueba el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁶², clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho:**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien haciendo caso omiso de su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, ha violentado a la parte quejosa, pues su gobierno ha planificado graves agresiones sistemáticas en el presente caso, por un periodo de seis años, con tres meses.

El Tribunal Pleno en la solicitud de ejercicio de facultad de investigación 2/2006⁶³, fallada en sesión de dieciocho de abril de dos mil seis, que clarifica los hechos antes expuestos, en la que se adujo lo siguiente:

- 1) Que se trate de hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinados.
- 2) Que se trate de acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas no se logren controlar por la actitud de la propia autoridad.
- 3) Que las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, sean las que producen o propician actos violentos, pretendiendo obtener de ellos una respuesta disciplinada.

⁶² **"GARANTÍAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

⁶³ Interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado, en ejercicio de la facultad de investigación prevista, en el artículo 97 constitucional antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011



4) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encausar las relaciones pacíficas de la comunidad o que sean indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

5) Que se intenta lograr la impunidad de las autoridades a través de la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento que propicia la propia autoridad. Es preciso enfatizar que estos criterios son de orden estrictamente orientadores, pues se han venido definiendo casuísticamente con base en la problemática que ha atendido el tribunal y, como también puede apreciarse de lo descrito páginas atrás, los casos no han sido muchos en número, de manera que no podrían fungir como parangón abstracto y rígido para todo caso futuro.”

“Especificar cuándo se está ante una situación grave, al ser una cuestión de orden valorativa y sujeta a innumerables e indefinidas variables, no podría darse a priori o en abstracto, sino que habría de realizarse en función de los casos puestos a consideración del propio tribunal. Por ello la insistencia de que los criterios que en los últimos años ha sentado el Pleno de este tribunal son, más que hipótesis exactas a las que los casos futuros deban encuadrarse, referentes orientadores de lo que puede o ha sido considerado grave, en un momento histórico determinado. Junto a los supuestos de violaciones graves sobre los que las tesis de este tribunal bordan, mismas que fueron apuntadas en el capítulo considerativo anterior, cabría agregar o puntualizar otras hipótesis, también de orden referencial u orientador, como serían:

- 1) La violación perpetrada por la autoridad estatal a las garantías individuales de un grupo de individuos;
- 2) La violación a garantías individuales, sin atender al número de personas a las que se les profirió directamente tal violación, sino a la manera sistemática en que la violación se realizó, mediando la existencia de un plan o intención específica de las autoridades; y
- 3) Una violación a garantías individuales de una persona en particular, a través de una acción concertada de las autoridades estatales, encaminada a romper los principios del federalismo, división de poderes, o estructura democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional.
- 4) Hechos que, generalizados o no, por sí mismos impliquen una amenaza al orden social al estado de derecho, a la convivencia misma de la sociedad”

Por consiguiente, en el caso concreto, la supresión/violación de derecho humanos inderogables, en el contexto de una denuncia de fecha seis de mayo de dos mil catorce ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México⁶⁴, de obstrucción de acceso a la justicia, allanamiento y daños que presenta muros y cimentación de la vivienda que habitan los quejosos provocada por un otrora andador peatonal reconvertido ilegalmente a un paso vehicular (vía cerrada ilegalmente al libre paso) que no cumple con las mínimas normas de construcción para el uso que se le está dando.⁶⁵

⁶⁴ Hoja 103 del juicio de nulidad V-76315/2015 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Anexo V juicio de amparo 651/2017; Anexo I, foja 578 a 585 juicio de amparo 288/2017.

⁶⁵ Los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, sin garantías judiciales reconocidas como

Denuncia que con fecha seis de mayo de dos mil catorce la suscrita le dirigió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que fue la justificación perfecta para ejecutar de *facto* Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables por un periodo de seis años, con tres meses, que ahora el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formaliza estado de excepción, más pretende que sea *ad infinitum*, hasta que en seguimiento al delito de genocidio se acarree la destrucción, total de la parte quejosa, hechos que ni siquiera en conflictos armados está permitido.

El estado de excepción reconocido en el artículo 29 del Derecho Constitucional Mexicano observa como ley el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (artículos 1 y 133 de la Constitución), no incluyen los efectos de solicitud de acceso a la justicia, en oposición con el poder del Estado arbitrario que en aquiescencia y connivencia con el poder político y particular en acciones incompatibles con la intención de someter a persona alguna a la acción de la justicia por delitos que pueden constituir crimen de genocidio, como circunstancias excepcionales que autorizan la puesta en vigor de medidas de "emergencia" en el presente caso.

En el presente caso en seguimiento a un plan intencional preconcebido, realizaron torturas, vejaciones, humillaciones públicas, amenazas, incriminaciones (fabricación de delitos y libre tipificación de delitos), la suspensión de derechos fundamentales inderogables no está sujeto a control legal alguno, más ha sido formalizo, mediante acto del ejecutivo- la indefensión es *ad infinitum*, en vulneración a los mínimos establecidos en la legislación interna, así como los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos suscritos por México.

En este contexto el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pretende que la parte quejosa acuda ante el perpetrador que ha actualizado supresión/violación a derechos humanos no derogables en el caso concreto.

Al encontrarnos en el presente caso en un Estado de suspensión de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables, no importan las pruebas aportadas, las denuncias, o procesos iniciados, el derecho que no es materia de probanza, el acto formal del Presidente de la República son contestes al vacío jurídico⁶⁶.

indispensables no se han establecido, hasta el día de hoy las denuncias de tortura, tentativa de privación ilegal de la libertad, incriminación (denuncias de hechos falsos), ante el Gobierno de la Ciudad de México, ante el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras denuncias, tales como tentativa de homicidio, violación al derecho a una vivienda digna, atentado en contra de la integridad física y psíquica; en este punto, vale la pena traer a colación a los habitantes del Andador Tabaqueros⁶⁵, día con día ejecutan la misma conducta antijurídica⁶⁵ que los dictámenes en materia de Ingeniería y Arquitectura, elaborados por perito oficial, demuestran de forma científica, el modo, tiempo y lugar de los hechos delictuosos, juicios de amparo indirecto, hechos notorios en lo expedientes, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, en el que buscan que la vivienda de la parte quejosa se derrumbe, aun a pesar que éste Andador es una vía pública reconvertido ilegalmente de andador peatonal, a paso vehicular, vía que permanece cerrada por una puerta y una edificación que prohíben el libre paso, por **esta edificación ilegal el Gobierno de la Ciudad de México construyó delitos falsos a la parte quejosa, ante un Tribunal de Delitos officiosos**, siendo uno de los motivos para demostrar odio manifiesto e instaurar suspensión de derechos fundamentales inderogables, imponiendo castigos prohibidos, penas infamantes e inusitadas, violación flagrantes y sistemáticas a normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos; actos que busca por todos los medios el exterminio de la parte quejosa.

⁶⁶ Comparable a la tortura a la que fue sometida la suscrita por el agente del Ministerio Público y el defensor de oficio, con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en interrogatorio, el defensor atacaba verbalmente diciendo "**el término fabricación de pruebas, ni siquiera lo he escuchado en Estados Unidos...**"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pueden actuar a petición de parte o de oficio, han tenido complicidad lo que configura complicidad en el genocidio: tortura, vejaciones, humillaciones, incriminación, violación al debido proceso, privación de la vida, ... violación a un Estado Constitucional, a pesar de haber constatado las vulneraciones anteriormente reseñadas, de las que han tenido constancia indirecta (por las denuncias y peticiones) y directa pues simplemente con tener conocimiento y certeza que el Estado Mexicano pretende y lleva a cabo todas las acciones conducentes para que se derrumbe la vivienda de la parte quejosa, con la consabida pérdida de vidas, lo que prueba que se busca el exterminio de la parte quejosa, afectando deliberadamente y de forma sistemática derechos fundamentales inderogables.

La parte quejosa se encuentra oprimida a la incertidumbre e inseguridad jurídica, así, esta solicitud de revisión oficiosa de estado de excepción es representativo del alivio para el reconocimiento del derecho vulnerado ilegalmente nulificado, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida, las violaciones procesales cubren con un manto de oscuridad al caso concreto, la nada jurídica se plasma de forma idónea en el acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables. Hecho notorio lo conforma el juicio de amparo 909/2018.

El alto grado de violencia y discriminación institucional y en la comunidad imperante hacia las mujeres por su condición de género, es en sí mismo denigrante, insultos, discriminación, tratos vejatorios, persecución política, hostigamientos, las graves situaciones sistemáticas de tortura, tentativa de homicidio, destrucción del proyecto de vida, intimidación, la existencia de señalamientos y acusaciones falsas, denegación en la procuración de justicia, con campañas de odio en la comunidad e institucional, violación constatada al derecho a la vida, la impunidad con la que se actúa en los hechos descritos, la incitación a la violencia se ejemplifica en el Estado Mexicano, obstáculos jurídicos, dilación administrativa en los juicios jurisdiccionales, los juicios de amparo son hechos notorios que el Estado no puede negar⁶⁷, son prueba a la ausencia de legalidad⁶⁸:

⁶⁷ Juicios de Amparo Indirecto 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 627/2017, 651/2017, 260/2018 substanciados en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito; 74/2018 substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito de la misma Materia y Circuito

⁶⁸ Ello es así, los hostigamientos, atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, las amenazas, intimidación, los atentados contra la dignidad personal, discriminación, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, comenzaron con amenazas de intervención de figuras políticas de los habitantes del Andador Tabaqueros, hechos que en posterior fecha fueron incentivados y con aquiescencia del Gobierno de la Ciudad de México, hechos que tienen un pleno objetivo que por grado de planificación cometido a sangre fría, intencionalmente nos arrastró a grandes sufrimientos que vulneraron gravemente la integridad física, la salud mental y física en que la parte quejosa se ha visto superada, nuestra resistencia física y psicológica, fue quebrantada, los interrogatorios elaborados en las instalaciones pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, son prueba de los castigos ejecutados por haber solicitado acceso a la justicia. Ahora incriminadas la parte quejosa se atiene a la arbitrariedad, sin seguridad jurídica en cualquier momento podemos perder la vida o la libertad, las amenazas son constantes y objetivas, tal como se puede probar, los hechos notorios contenidos en los anexos de los juicios de amparo citados en párrafos anteriores, no obstante es válido traer a colación el juicio de amparo 349/2017, sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito en el que la parte quejosa y nuestra familia nos vimos en la necesidad de



Supresión/violación sistemática de derechos humanos no derogables, específicamente el derecho a la libertad, a la propiedad y a la posesión, a la integridad y seguridad personal, a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica; Las violaciones acreditadas en este rubro comprenden atentados en contra de la integridad corporal y tortura.

La formalidad del estado de supresión de derechos fundamentales no derogables decretado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos viola en detrimento de la parte quejosa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, 17, párrafo segundo, tercero, octavo, 22, párrafo primero, 29, párrafo primero, segundo y tercero, 89, fracción X y 133:

Así tenemos que el artículo 29 constitucional se encuentra ubicado en la parte dogmática de la Constitución y se refiere a un catálogo de derechos que no se pueden suspender mismos que son coherentes con las Obligaciones Internacionales del Estado Mexicano ha firmado y ratificado, en relación con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que genera obligaciones *erga omnes*; luego actuar en contrario hace del presente caso una flagrante y sistemática violación al debido proceso con las debidas garantías.

Como se advierte, nuestra Constitución Federal contempla derechos humanos, que constituyen límites de actuación para las autoridades, el derecho a no ser afectado en sus personas, a fundamentar y motivar la causa, por la que busca que a la parte quejosa *ad infinitum* le sean aplicados "castigos prohibidos, que ni siquiera en conflictos armados están permitidos" hasta que sobrevenga el exterminio de ésta, hechos que deben ser expuestos mediante la solicitud de revisión oficiosa de decreto de excepción o supresión de derechos fundamentales no derogables, el caso concreto justifica la causa del procedimiento; y, sobre todo, prohíbe expresamente que autoridad alguna actualice penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

También prohíbe el Estado de excepción de Derecho, y la suspensión de derechos inderogables, pues el artículo 29 sólo le da facultades al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para suspender derechos y garantías en un Estado de emergencia, sin que la restricción se contraiga a determinada persona, más no podrán restringirse derechos fundamentales inderogables, el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción de derechos debe estar fundada y motivada observando "en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación."

Pero, además de lo anterior, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha ratificado instrumentos internacionales que protegen derechos fundamentales, el derecho a la integridad personal que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, y establecen obligaciones específicas a los Estados Parte, en cuanto a un estado de excepción, que prohíbe la inderogabilidad a un recurso efectivo ante las autoridades jurisdiccionales, recurso, que es indispensable para hacer valer los derechos no susceptibles de derogación como son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas,

resguardarnos, pues policía de investigación acudió a intimidarnos sin saber a la fecha de qué delito se nos acusa, o bien de acudir en días pasados en conjunto con seguridad pública a bordo de patrullas, servidores públicos pertenecientes al Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras (autoridades pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México), que en compañía con un habitante del Andador Tabaqueros (María Dolores Espinoza Bassoco), golpearon con marros los muros de la vivienda que habita la suscrita y mi familia, mencionando que en cuanto saliéramos nos detuvieran.



el derecho de acceso a la justicia, etcétera (derechos que revisten carácter de *ius cogens*), **luego, el acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, violenta normas del *ius cogen*.**

En efecto, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, México ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y seis, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y tres, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, la Convención sobre los Derechos del Niño, veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", ratificó el veintidós de julio de mil novecientos cincuenta y dos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, citando algunos de éstos instrumentos:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que:

Artículo 2.3.a). "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;"

Artículo 4.1. "En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social."

Artículo 4.2. "La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18."

Artículo 4.3. "Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación."

Artículo 7. "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

Artículo 14.1. "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil..."

Artículo 17.1." Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo 17.2. "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

Artículo 26. "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, menciona que:

Artículo 1.1. "En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública."

Artículo 5. "En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:"

Artículo 5.a) "El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;"

Artículo 5.b) "El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;"

Artículo 5.e). iii) "El derecho a la vivienda;"

Artículo 6. "Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación."

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3.1. "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", dispone en sus artículos:

Artículo 1. "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado."

Artículo 2. "Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:"

Artículo 2. b. "que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y"

Artículo 2.c. "que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra."

Artículo 3. "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado."



Artículo 4. “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:”

Artículo 4. a. “el derecho a que se respete su vida;”

Artículo 4.b. “el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;”

Artículo 4. c. “el derecho a la libertad y a la seguridad personales;”

Artículo 4.d. “el derecho a no ser sometida a torturas;”

Artículo 4.e. “el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;”

Artículo 4. f. “el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;”

Artículo 4.g. “el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;”

Artículo 6. “El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:”

Artículo 6.a. “el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y ...”

Artículo 7. “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:”

Artículo 7.a. “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;”

Artículo 7.b. “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;”

Artículo 7. c. “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;”

Artículo 7.d. “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;”

Artículo 7. e. “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;”

Artículo 7. f. “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;”

Artículo 7. g. “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y”

Artículo 7.h. “adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”

Como se advierte, los instrumentos internacionales citados, que constituyen norma interna en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, prevén el derecho absoluto que tiene toda persona a que se respete su integridad personal, su libertad, su vida, su dignidad, su vivienda, derechos básicos, lo que implica una protección contra la destrucción total o parcial, la tortura y cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante, entre otros. En suma, el derecho de no suspensión de derechos fundamentales inderogables.

Así, la autoridad responsable, al suscribir y ratificar los instrumentos internacionales en cita, asumió un conjunto de obligaciones tendentes a garantizar cada uno de los derechos humanos contenidos en dichos instrumentos; lo que implica el deber de abstenerse de conculcar esos derechos.



Es decir, nuestro Estado tiene el deber de garantía, el cual implica obligaciones de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales

Convenios de Ginebra, el artículo 3⁶⁹, prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados en contra la vida, y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

La suspensión de los derechos fundamentales, ha incidido sobre diversos derechos fundamentales a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia; los derechos de la niñez; la inviolabilidad del hogar doméstico (vivienda); el derecho de acceso a la justicia; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición y la tortura; las garantías judiciales efectivas indispensables para la protección de tales derechos.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, menciona (artículo 4) que los Estados Parte podrán adoptar en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente disposiciones que, en la medida estrictamente limitada sin discriminación alguna suspender ciertos derechos, más no autoriza suspensión alguna a derechos fundamentales inderogables.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone (artículo 27) que, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, suspender obligaciones en virtud de esta Convención y no entrañen discriminación alguna, ésta disposición no autoriza suspensión de derechos inderogables, más al hacer uso del derecho suspensión deberá informar, de las disposiciones, los motivos que haya suscitado la excepción de los derechos a los demás Estados Partes de la Convención, inmediatamente por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Así tenemos que las causales de "peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su estudio al Anteproyecto de Convención Americana:

"...esta expresión cubre exclusivamente las siguientes situaciones: un peligro real e inminente para la existencia del país como nación; para la sobrevivencia del Estado como entidad política soberana e independiente; para la integridad del territorio; para el respeto por la constitución política vigente; para el ejercicio de poderes legítimos por las autoridades constitucionales. También incluye la situación de peligro serio e inminente de alteración profunda de la paz social o del orden público de tal carácter que ponga en peligro la seguridad interna del Estado."

El análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte ". Aun entonces, autoriza solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello " en la medida y por el

⁶⁹ Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra



tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación ". Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar " discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social ". Párrafo 19⁷⁰

Y no es el caso de estimar que ésta afectación de derechos humanos inderogables obedece al derecho de reacción de un Estado que conforma un Pacto Federal ante un ataque.

Ello es así, por consecuencia lógica jurídica, la supresión o estado de excepción de derechos fundamentales no derogables, vulnera los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos, sus obligaciones y funciones *erga omnes* de respeto, protección y promoción de los derechos humanos observando la gravedad de los hechos, esta afirmación lógica jurídica es la naturaleza *erga omnes* de las obligaciones del Presidente de la Republica, que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos, que deberán ser aplicadas sin discriminación alguna, las mismas Convenciones lo prohíben. Además, el artículo 89 fracción X de la Constitución reconoce la obligación de cumplirlas y la de denunciar si otros Estados Partes no lo hacen, reconociendo el compromiso de la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, que enfatiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la dimensión ética que estos instrumentos han incorporado a las relaciones internacionales, luego el acto formal del ejecutivo viola las obligaciones que en materia de derechos humanos lo obligan en el presente caso.

Pues, como se dijo anteriormente, invocando la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁷¹ que, clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.** Pues se considera que una violación de (garantías individuales) es grave cuando tiene un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas

No se puede dar visos legalidad a lo que es arbitrario, la aplicación lisa y llana de un estado de excepción ilegal de derechos fundamentales no derogables:

Por consiguiente, el estado de excepción es una institución del Estado de Derecho, como tal, debe reunir determinadas condiciones y requisitos, garantías

⁷⁰ La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-8/87

⁷¹ **"GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.** Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

jurídicas para preservar los derechos humanos, luego, este estado de excepción de derecho es una patología en el que ha desaparecido el Estado Constitucional de Derecho, luego es ilegal que Presidente de los Estados Unidos Mexicanos mediante acto en el medio de control de la constitucionalidad, hecho que no puede explicarse dentro de una lógica jurídica, en lugar de denunciar, y retirar reservas, por el contrario, alejado de sus obligaciones *erga omnes*, formalice el estado de excepción o supresión de derechos fundamentales no derogables. **La prueba de esta afirmación es la naturaleza *erga omnes* de las facultades y obligaciones que nacen de los tratados internacionales de derechos humanos, que deberán ser aplicadas sin discriminación alguna, las mismas Convenciones lo prohíben. El artículo 89 fracción X de la Constitución reconoce la obligación de cumplirlas y la de denunciar si otros Estados Partes no lo hacen, reconociendo el compromiso de la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, que enfatiza la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la dimensión ética que estos instrumentos han incorporado a las relaciones internacionales, luego, el Presidente de la Republica viola las obligaciones que en materia de derechos humanos lo obligan en el presente caso.**

Resaltando que los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos no regulan relaciones entre los Estados Partes, el centro de la protección es la persona humana que crea un "orden público internacional"

El estado de excepción en el presente caso responde a la causa de un exterminio (violación al derecho a la vida) a favor de intereses de figuras políticas, particulares, el Estado con aquiescencia denotan odio manifiesto, luego, es loable mencionar, el Presidente de la Republica vulnera, la denuncia de estos actos ante la comunidad internacional de Estados de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva OC-9/87, ha establecido que la suspensión de garantías constituye una excepción, más no significa que la misma "comporte la supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad, a la que en todo momento deben ceñirse". Asimismo, menciona que "el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables"

Las violaciones graves a derechos humanos trascienden a la vida, el proyecto de vida queda destruido, la autoridad responsable sin cumplir el mandato constitucional y el compromiso internacional de respetar los derechos así como la integridad física y emocional de las personas un estado de incertidumbre emocional y jurídica, con la consecuente afectación a su forma de vida, ya que resulta lógico que la parte quejosa viva en la zozobra ante un Estado, que desconoce los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico. luego si la autoridad responsable considera que no puede intervenir en el presente caso, que de forma sistemática se han suspendido/violado derechos humanos inderogables, máxime cuando las Instituciones Federales se han conducido con ilegalidad, es loable afirmar, que el acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, vulnera el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos en relación a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículos 26, 27, 29, 53 y 64.

En esta guisa, con apoyo del artículo 53 y 64 de esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que a la letra menciona:

Artículo 53. “Es nulo todo Tratado que, en el momento de su celebración, este en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“*jus cogens*”) ...”

Artículo 64. “Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo Tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.”

Ello es así, las normas imperativas de derecho internacional (“*ius cogens*”) se oponen a cualquier norma que la autoridad responsable pueda anteponer ante estas graves violaciones sistemáticas a derechos humanos, pues el acto formal del presidente de los Estados Unidos Mexicanos niega sus obligaciones y facultades en materia de derechos humanos.

Luego, la formalización del estado de excepción en el caso concreto es ilegal desde cualquier punto de vista.

La formalización del estado de excepción, viola el artículo 133 de la Constitución, pues establece la llamada supremacía constitucional y una escala jerárquica de las diversas disposiciones que deben regir al país.

De acuerdo este precepto constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, en los términos del artículo 76, fracción I, y 89, fracción X, “serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Las leyes emanadas del Congreso de la Unión son fundamentalmente las leyes federales. El párrafo *in fine* del 133, dispone que los jueces de cada estado se conformarán a la Constitución, leyes y tratados, consigna el principio de la supremacía de derecho federal sobre el derecho local.

Así, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el monopolio constitucional en relación a al desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, efecto que se dilucida perfectamente en el artículo 1o., 29, 87, 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, el Estado Mexicano en el presente caso ha abrogado derechos universales reconocidos en la Constitución Federal, este hecho lo constituye en un acto tiránico sin justificación y sin legitimación alguna, un Estado que no respeta las disposiciones por las que fue creado, en el caso concreto ha detenido el funcionamiento de los derechos reconocidos por la Constitución, destruyendo cualquier posibilidad de certeza jurídica.

Es preciso traer a colación: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de una lógica formal, en abuso del derecho⁷² han empleado a las instituciones como medio para

⁷² Al respecto, se citan las consideraciones sobre el tema realizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Diccionario Jurídico Mexicano, página 39, tomo I, el cual señala: “ABUSO DEL DERECHO. I. La voz abuso del derecho no tiene una raíz etimológica propia. Sin embargo, algunas frases del derecho romano recogen la idea: *summum jus summa injuria*: la aplicación ciega de la regla de derecho conduce a consecuencias injustas; o bien a contrario se puede citar la frase del Digesto “*neminem leadit qui suo iure utitur*”: aquel que usa de un derecho no perjudica a nadie. La teoría del abuso del derecho tiene como problema central el considerar que el ejercicio sin control del derecho, representa una amenaza para la justicia que es el fin esencial del sistema jurídico. - II. El instrumento de control por excelencia es la teoría del abuso del derecho. El tema más discutido en esta teoría es la determinación del límite que establezca que más allá de él, el ejercicio del derecho es abusivo y por tanto reprochable. El sistema para la determinación del límite varía según algunos autores: unos opinan que lo determinante es la intención de dañar a otro; otros afirman que lo importante es la desviación del derecho de su función social. Los elementos que se señalan como constitutivos de la teoría del abuso de derecho son: a) Culpen el ejercicio del derecho; b) Intención de causar un daño; c) El desconocimiento de la función social del derecho



destruir intencionalmente a la parte quejosa. Hechos que son del conocimiento del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

En este orden, analizando el caso concreto desde una lógica formal: por qué, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos declara en juicio de amparo 909/2018: *“mediante el cual solicita apoyo para la recuperación del bien del dominio público andador Tabaqueros ubicado en la Ciudad de México. Le informamos que dada su naturaleza es injerencia y competencia del Gobierno de la Ciudad de México”*.

Esto es, la formalización de estado de excepción deviene en interrumpir formalmente el proceso constitucional democrático en decreto ejecutivo de supresión/violación de derechos humanos no derogables.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos conoce el derecho, lo que evidencia un abuso del derecho, en violación al derecho humano al acceso a la justicia⁷³, pretende un engaño en desviación a la legalidad; el escrito de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho es clarificado en un Estado de excepción de interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos fundamentales inderogables, en el que se solicita de forma pacífica y respetuosa se reivindique el derecho al acceso a la justicia con el fin de obtener el reconocimiento de la violación a derechos humanos, la cesación de la violación, sanción y reparación adecuada de la lesión grave a la integridad física, mental y moral; cesen los ataques sistemáticos en contra de la parte quejosa, que se respete el derecho humano a la vida, exponiendo que con fecha seis de mayo de dos mil catorce, la suscrita, dirigió el seis de mayo de dos mil catorce, escrito de denuncia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hecho que detonó el Estado de excepción de Derecho y suspensión de derechos fundamentales inderogables en el presente caso.

Luego, es patente que el acto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en abuso del derecho en igual magnitud y desviación del derecho de su función social, hace uso abusivo del derecho. En consecuencia, lógica y jurídica, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formaliza por decreto estado de excepción supresión/violación de derechos humanos no derogables. Decretando que el Gobierno de la Ciudad de México prosiga destruyendo a los quejosos: en semejanza a la tortura de la *gota de agua*, **hasta que se consume intencionalmente de forma total, crimen de genocidio.**

Por otra parte, debe señalarse que el retardo, o incumplimiento de las facultades y obligaciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen un hecho que da lugar a la existencia de supresión/violación grave a derechos humanos no derogables.

Pues, el ejercicio oportuno de las obligaciones y facultades de la autoridad responsable para mantener el Estado de Derecho constituye una garantía de democracia de los gobernados por lo que el incumplimiento de tal ejercicio, **en condiciones extremas, implica una violación grave de derechos humanos**. Al negar retirar reservas supresión/violación de derechos humanos mínimos inderogables. Por el contrario, decreta que el Gobierno de la Ciudad de México

⁷³ “...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes...”. Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22



está facultado para seguir perpetrando actos que constituyen crimen de genocidio.

Es obligación de los órganos del Estado velar por la seguridad pública y por la protección del orden público, los cuales son fundamentales para la vigencia de los derechos humanos, derechos que se consagran claramente en el artículo 1o., 29, 89, fracción X y 133 de la Constitución Federal.

Las garantías judiciales instituidas para las personas no pueden defenderse sino por mandato constitucional, pues ninguna persona puede tomarse la justicia por su propia mano ni ejercer la violencia para reclamar su derecho, como lo señala el artículo 17 constitucional. Por tanto, nadie tiene legitimidad para usar su propia fuerza en contra de los demás, de manera que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el único que puede utilizar el estado de excepción cuando es necesario para mantener el Estado de Derecho, por ende, conservar las condiciones necesarias para la vigencia de los derechos humanos que establece la Constitución, por lo que la protección de los derechos humanos se encuentra a cargo principalmente de la autoridad responsable, y como garante el Máximo Tribunal Constitucional del país.

En ese orden de ideas, los derechos de protección son derechos constitucionales encaminados a que el Estado organice y maneje el orden social de una determinada manera por lo que respecta a la relación de sujetos jurídicos con el poder público; por ende, si el Estado no evita los decretos en casos concretos de supresión/violación de derechos fundamentales inderogables de gobiernos locales particulares con nexos políticos, figuras políticas, autoridades federales y locales sin sustento legal en bienes protegidos, entonces no solo las formaliza, decreta la interrupción del proceso constitucional democrático. Autorizando que prosiga, hasta consumir delito de genocidio, total.

El Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos ha formalizado estado de excepción o supresión de derechos fundamentales no derogables. Formulando decreto en el medio de control de la constitucionalidad. Hecho notorio en el expediente del juicio de amparo 909/2018.

De forma discriminatoria, y es jurídico, decir, que en clara política de apartheid el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos compara la supresión/violación flagrante y sistemática a derechos fundamentales no derogables, equiparándolos, a éste multicitado Andador Tabaqueros, bien público, que da explicación dentro de una lógica formal, que en sí y por sí mismo, se ejecute tortura de forma sistemática, destrucción de la vivienda propiedad de la quejosa, imputaciones falsas, atentados en contra de la vida, detonaciones de arma de fuego, vejaciones, violencia de género, violencia institucional, asociación y complicidad de figuras políticas para perpetrar intencionalmente crimen de genocidio. Violencia de un Estado mexicano que discrimina a ciertos grupos como en el caso acontece. Formalización y decreto de un Estado de excepción de Derecho suspensión de derechos fundamentales inderogables

Ello es así, de manera formal el Ejecutivo ha decretado la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables, el Presidente de los Estados Unidos, le da vida jurídica a un bien público, en el que sus habitantes (Andador Tabaqueros) perpetran delitos apoyados en asociación y complicidad con figuras políticas, de un Estado mexicano que formaliza sistemáticamente la violación a instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La autoridad responsable viola el derecho de acceso a la justicia, pues no permite que las autoridades que en asociación y complicidad han perpetrado supresión/violación de derechos humano no derogables sean investigadas por

conductas que constituyen crimen de genocidio, por el contrario, formaliza y decreta estado de excepción, hechos que se clarifican en el artículo 17.2.a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que a la letra dice:

“17.2.a) ... o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;”

En esta guisa, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos viola el artículo 89 fracción X de la Carta Magna y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados, la necesidad del respeto, la protección y promoción a los derechos humanos inderogables, derechos que existen con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado mexicano que imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional, los Estados Partes “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”⁷⁴, hecho que se clarifica en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en calidad de Enviado Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Héctor Gros Espiell:

“Estos derechos inderogables –y en especial el derecho a la vida, que es inherente al concepto de la persona humana y la prohibición de la tortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degradantes –, deben reconocerse y garantizarse siempre, en cualquier situación y en todo momento. Su necesario respeto, constante e ininterrumpido, está en la medula misma de la garantía de protección y de la garantía y protección de estos derechos. Constituye un caso del *ius cogens*, que existe con independencia de las estrictas obligaciones convencionales aceptadas por el Estado y se impone imperativamente, *erga omnes*, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados que la integran”⁷⁵

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que “los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.”⁷⁶

Luego, con fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4.3⁷⁷, el artículo 27.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la República facultades y

⁷⁴ Convención de Viena Sobre el Derecho a los Tratados.

Artículo 27 El derecho Interno y la observancia de los Tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46

⁷⁵ Informes sobre la situación de los derechos humanos en el país de Bolivia en 1982 y 1983: Doc. E/CN.4/1981/1500, 31 de diciembre de 1981, nota 76 y E/CN.4/1983/22, 13 de diciembre de 1982

⁷⁶ Párrafo 25, página 9.

⁷⁷**Artículo 4.3.** “Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.



obligaciones, tales como, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos en consecuencia lógica y jurídica la autoridad responsable está obligada a informar este estado de excepción, no hacerlo, vulnera sus obligaciones que le impone imperativamente *erga omnes* a la comunidad internacional de los Estados Partes, que **implica una violación grave de derechos humanos**.

Por lo que existe un mandato normativo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiere de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes;

El incumplimiento de las obligaciones expuestas en las normas citadas, recae en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien al haber omitido acatar dichas disposiciones y teniendo competencia para ello, han provocado una afectación a nuestro interés legítimo y a nuestra esfera de derechos, como se señala en los conceptos de violación.

En este sentido es importante señalar que ninguna de las disposiciones aludidas y que han sido incumplidas, imponen una carga de solicitud o excitativa a nuestra parte, ya que al tratarse de obligaciones Constitucionales y legales de carácter general no necesitan de una acción primigenia para poder ser invocada, **esa conducta vulnera por acción formal y decreto los derechos fundamentales inderogables y el derecho al acceso a la justicia⁷⁸, y las garantías para su protección, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional, a un tratado o convenio y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado.**

La proyección de la dignidad de toda persona, se ve reflejado en el reconocimiento al proyecto de vida sin discriminación o segregación alguna.

Tomando en cuenta que el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, es un principio de las normas imperativas de Derecho Internacional (*ius cogens*)⁷⁹.

Los derechos humanos tienen como base el derecho a la existencia, al reconocimiento integral de los derechos inherentes a toda persona, que requiere para su desarrollo condiciones de vida digna: certeza y seguridad jurídica, integridad física, psicológica y moral.

Por consiguiente, a toda persona le es inherente todos los derechos y libertades que corresponden al ser humano sin que sea admitida distinción o segregación alguna por razón de género, social, económico, o cualquier otra condición. La vulneración al principio de no discriminación constituye un caso del *ius cogens*, pues es un elemento constitutivo del concepto de los Derechos Humanos.

El respeto de los Derechos Humanos es un caso del *ius cogens*, de consiguiente, la violación sistemática a derechos fundamentales inderogables protegidos por Convenciones, Convenios, tratados en materia de Derechos Humanos firmados y

⁷⁸ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido la categoría de norma del *ius cogens* al derecho al acceso a la justicia "...El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones *erga omnes*...". Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, serie, C, núm. 153, numeral 131. Cfr. Voto razonado del juez A. A. Cancado Trindade, p. 22, numeral 64. Cfr. Corte I.D.H., Almonacid y Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, voto razonado del juez A.A. Cancado Trindade, serie C, núm. 154, p. 7, numeral 22



ratificados por el Estado mexicano, hace del presente caso una violación sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Al violentar gravemente de forma sistemática los derechos fundamentales inderogables en el caso concreto se actualiza la negación del derecho a la existencia de un grupo familiar, la separación de derechos, segregación por discriminación basada en motivos económicos, sociales, de género. Con consecuencias inmediatas de sometimiento intencional a condiciones de existencia que han acarreado lesión grave a la integridad física, mental y moral de los quejosos.

Los actos formales de decreto de estado de excepción del Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos están apartados del principio de supremacía constitucional, pues los actos de autoridad para ser legales deben ser acordes a los ordenamientos jurídicos de la Constitución y tratados internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por la autoridad responsable.

La supresión/violaciones flagrantes y sistemáticas a derechos fundamentales inderogables que acontecen en el presente caso, tienen como objetivo la segregación de una familia a un Estado de Derecho, que tiene como principio de Supremacía Constitucional la Constitución y Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos⁸⁰, normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*).

El acto de segregación en sí y por sí mismo, representa el objetivo de anular el derecho a la vida, la amenaza constante de volver a ser torturado, o detenido arbitrariamente, sin certeza y seguridad jurídica⁸¹.

El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin discriminación alguna, en el presente caso está muy lejos de ser reconocido, retirando el ejecutivo la reserva de interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables que formalmente decreto en el medio de control de la constitucionalidad con número de expediente 909/2018

Los actos de la autoridad vulneran el principio de igualdad jurídica, combatiéndolo con la violación al principio de no discriminación, que a su vez vulnera el principio de igualdad de derechos, por consiguiente, vulnera los derechos humanos más básicos en el presente caso.

La violación de normas imperativas de Derecho Internacional, normas que, el Estado mexicano ha firmado y ratificado que le genera obligaciones *erga omnes*, al Ejecutivo, que en el caso concreto se pretende que aplicando la política de discriminación, despojándonos de derechos protegidos por normas del *ius cogens*, la parte quejosa sea segregada por todas las Instituciones del Estado mexicano, para seguir aplicando impunemente la técnica semejante a la tortura de la "gota

⁸⁰ del artículo 133 Constitucional, se puede deducir los aspectos que caracterizan al principio de supremacía constitucional:

- a) La Constitución Federal es la Ley suprema y fundamental; y
- b) Los ordenamientos jurídicos derivados de ella, sean leyes federales, tratados internacionales o leyes locales, **inclusive los actos de autoridad**,
- c) deben estar acordes a lo preceptuado por la Constitución, para que resulten válidos.

⁸¹ Sin saber que delito se ha cometido y por consiguiente ser juzgado ante un Tribunal de delitos oficiosos (carpeta judicial 011/0384/2017, la Representación Social no hizo del conocimiento a la imputada por qué se le estaba investigando), juicio de amparo indirecto 627/2017, que derivó en recurso de revisión 157/2017, asimismo, en recurso de reclamación. A la fecha, la Representación Social, sólo afirman que nos están investigando, acusándonos de delitos oficiosos, sin saber la parte quejosa que delitos y cómo cometimos esos delitos oficiosos.



de agua” con el objetivo de sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen destrucción física, mental y moral, total, y esto no produzca necesariamente consecuencias jurídicas, pues el Estado mexicano tiene deberes ineludibles e irrenunciables como sujeto de Derecho Internacional, que forma parte de la Comunidad Internacional.⁸²

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura⁸³, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, la destrucción al derecho a la vivienda⁸⁴, entre otros, hacen del caso una vulneración sistemática a normas imperativas de Derecho Internacional, una radical negación a normas del *ius cogens*. Constituyendo crimen de genocidio.

Lo que hace del presente caso una segregación. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total; ello es así, el caso concreto presenta métodos semejantes a la técnica de tortura de la *gota de agua* en violación a los artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en consecuencia lógica en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales⁸⁵

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial artículos 1.1.2, 2.1. a). b). d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6), a la letra dicen:

“Artículo 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades

⁸² Estado Miembro de las Naciones Unidas.

⁸³ En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza⁸³ la tortura, castigos, fabricación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.

⁸⁴ Juicio de amparo 651/2017, 627/2017 y 260/2018.

⁸⁵ **Artículo primero**

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.



fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

- a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;
- b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
- d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

Artículo 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

- a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;
- b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;
- e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
 - iii) El derecho a la vivienda;

Artículo 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación."

La segregación ha tenido por resultado desconocer los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera de los quejosos.

El acto formal del Presidente de los Estados Unidos fomenta la discriminación racial practicada en el presente caso.

Los Estados partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

El acto de autoridad en discriminación racial en contravención en el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley; veda el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, el derecho a la seguridad personal, a la vivienda y a la protección del Estado contra los actos de violencia y contra la integridad personal cometido por Instituciones, funcionarios públicos, figuras políticas, particulares que conforman un grupo de poder público y privado.

El acto de decreto formal de estado de excepción del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos vulnera como Estado Parte que le genera obligaciones *erga*

omnes ante la Comunidad Internacional, como Estado Democrático, asegurar en el presente caso, protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra los actos de discriminación racial que, contraviniendo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, viola derechos fundamentales inderogables y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a los tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo el daño de que hemos sido víctimas como consecuencia de tal discriminación y cese la suspensión del proceso constitucional democrático. El sometimiento intencional a condiciones de existencia que pretenden acarrear la destrucción física, total, de los quejosos.

El acto formal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es ilegal, pues todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

La autoridad responsable no puede legitimar (**¡más, lo ha formalizado!**) ni en derecho ni de facto ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de segregación que en el caso concreto constituye una forma extrema del racismo, sin derechos, pues todo acto u omisión que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

Porque como bien lo dice el artículo segundo de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, "El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento."

Los Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos asumen responsabilidades primordiales al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

En el presente caso el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no solo se niega a retirar reservas de *facto*, formaliza y decreta la interrupción del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables, por consiguiente, vulnera sistemáticamente y reiteradamente los principios y normas del *ius cogens*, por lo que no es legítimo que a la parte quejosa se le considere inferior, sin plena igualdad de dignidad y derechos por causa de diferencias económicas y sociales, justificando esas desigualdades destruyendo el principio de Supremacía Constitucional en relación al principio de no discriminación, con razonamientos desprovistos de fundamento, pues la negación de sus obligaciones y facultades que le genera obligaciones *erga omnes* como Estado Democrático hace del presente caso una permisión ilegal.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, "Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen"⁸⁶ ello es así la protección de un Estado de Derecho, esta en

⁸⁶ **Artículo 87 Constitucional.** "...El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido,

proteger el principio de Supremacía Constitucional, que va unido al principio de no discriminación, considerando, que la segregación a la que se le somete a la parte quejosa hace del caso una violación reiterada a normas imperativas del Derecho Internacional (*ius cogens*), afectando la legitimidad como Estado Democrático.

En el presente caso la segregación en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que por consiguiente desconoce las condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos, en violación al artículo 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales.

En este orden de ideas la parte quejosa dirigió escrito de petición de forma respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la Oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la Republica, en fechas seis de septiembre de dos mil diecisiete y trece de marzo de dos mil dieciocho, en el escrito, se denuncia la segregación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, alcanzando su plena realización en violaciones procesales, en que el engaño y discriminación es manifiesto. "El proceso ha sido "a modo" y la sentencia sirve a determinado designio, mejor que al objetivo de justicia", no se pretende hacer justicia sólo simularla, los juicios están viciados y, por consiguiente, a la fecha no existe un auténtico proceso⁸⁷, por lo que la sentencia que éste produce no es genuina, acompañada de violencia y destrucción del estado de derecho, el escrito signado por la parte quejosa, fue el de hacer ver que el presente caso se le ha sometido intencionalmente a condiciones de existencia en la que pretenden acarrear la destrucción física, mental y moral, total, siendo esto objetivo, pues se puede probar de forma lógica y jurídica con la violencia institucional, violencia de género, humillación, segregación, tortura, incriminación, amenazas de pérdida de la libertad, de pérdida de la vida, de violación al derecho de vivienda, pues en el transcurso de seis años: los suscritos hemos acudido a todas las Instancias en el Estado mexicano, un ejemplo de ello, es el Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros defensores públicos, son partícipes de la segregación manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el caso concreto, después de haber elaborado un amparo a la parte quejosa, que distó por mucho de ser un escrito efectivo, resultó, con condicionamientos dependientes hacia el Estado, en violación a los derechos humanos⁸⁸, deponiendo la justicia a la merced de la ficción.

Al acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública, la Licenciada Yasmín Rosales Muñoz y otros asesores jurídicos pertenecientes a ésta defensoría, en segregación manifiesta (afirmaban lo que ahora la juez a quo⁸⁹ resuelve en juicio constitucional contrario al artículo 1 y 217 de la Ley de Amparo), que a la parte

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande..."

⁸⁷ Juicio de amparo indirecto 260/2018, Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del primer Circuito, autoridad responsable Secretario de Gobernación.

⁸⁸ La dignidad humana de la parte quejosa fue pisoteada, ni siquiera nos proporcionaron el número de amparo que fue interpuesto por ésta licenciada

⁸⁹ Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, cabe traer a colación, que el licenciado Héctor Molinero Orduña, Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, preguntó en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, si existía abogado, al responder la parte quejosa..., mencionó **"aun así, no se les ha negado el servicio"**, prosiguiendo en actitud discriminatoria, que no entendíamos, diciendo, qué cómo nos explicaba..., en este punto, es válido traer a colación, que es por nuestra apariencia que consideran que no tenemos derechos, que somos ignorantes, con absoluta malicia.



quejosa no se le ha vulnerado ningún derecho, a pesar de la tortura, que ha derivado en lesión grave a la integridad física, mental y moral. Con absoluta malicia, nos vejaba, se burlaban que no podíamos hacer nada, que sólo se veía que había afectado a nuestra salud⁹⁰, haciéndonos esperar cerca de cuatro horas, para después de ese tiempo, mencionar que no teníamos nada que hacer ahí, que ellos no podían hacer nada por nuestro caso, que acudiéramos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Asimismo, acudimos como último recurso a instar las garantías judiciales para la protección y reconocimiento del derecho vulnerado en diciembre de dos mil dieciséis con el juicio de amparo 1118/2016 y subsecuente 288/2017, 349/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017, 74/2018, 260/2018.⁹¹

Por consecuencia lógica y jurídica la ilegalidad del estado formal de supresión de derechos fundamentales no derogables causa total estado de indefensión, el acto formal de decreto del Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, infringe en perjuicio directo el principio de no discriminación, en el estado de excepción de suspensión/violación de derechos fundamentales inderogables. Fomenta la discriminación racial que han hecho del presente caso sin que a la fecha del presente escrito, la autoridad responsable condene la segregación de derechos fundamentales inderogables y la destrucción del Estado Constitucional de Derecho que han hecho del caso una vulneración a las normas imperativas de Derecho Internacional General (*ius cogens*).

Los diversos juicios constitucionales referidos han sido substanciados en los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, de ahí que, la parte quejosa solicita atentamente a su Señoría, el derecho humano de acceso a la justicia: Revisión Oficiosa de decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de supresión de derechos fundamentales no derogables. ofreciendo como hechos notorios los expedientes de los juicios de amparo indirecto: 909/2018, 260/2018, 74/2018, 651/2017, 627/2017, 545/2017, 349/2017, 288/2017 y 1118/2016, y, en consecuencia, los recursos que han derivado de éstos expedientes.

En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis P.LXXXVI/96, Tomo III, junio de 1996, pág. 459, registro 200110⁹²,

⁹⁰ **Llegando a mencionar a Carolina González Nava, que seguiríamos solicitando acceso a la justicia, mencionando que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que respondían burlones los asesores jurídicos pertenecientes al Instituto Federal de Defensoría Pública: “creo que apoyan con recursos para transportarse”, que al parecer se encontraba en Costa Rica (refiriéndose a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).**

⁹¹ Cabe hacer mención que los juicios de amparo (“Habeas Corpus”) 349/2017 y 74/2018, fueron en relación a las graves amenazas de policía de investigación que acuden armados a tratar de detenernos arbitrariamente, sin que la parte quejosa haya cometido ningún injusto, vulnerando derechos fundamentales inderogables de certeza y seguridad jurídica. Por consiguiente, la parte quejosa se ha visto obligada a auto salvaguardarse.

⁹² **“GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL.**

Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un “estado de cosas”, acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes



clarifica el presente caso, **la grave violación de derechos humanos se actualiza cuando las propias autoridades destruyen el Estado de Derecho.**

La definición del concepto de violaciones graves a derechos humanos se perfecciona con el **distanciamiento constitucional** que ha sido una constante en el presente caso.

En este orden de ideas, la segregación racial, dentro de una lógica formal, clarifica el presente caso, el por qué las autoridades responsables en abuso del derecho, con la intención de dañar a la parte quejosa, en violación a la función social del derecho, ha planificado graves violaciones sistemáticas, los motivos inaceptables que implica un abuso de las Instituciones como medio para destruir el proyecto de vida, con el objetivo de exterminio, la parte quejosa ha sido torturada, humillada, con la amenaza constante de pérdida de la libertad o de la vida, en violencia institucional y de la comunidad, precedente que solicitamos atentamente, sea analizado por su Señoría, con el objetivo de que no se vuelva a repetir esta supresión/violaciones sistemáticas y flagrantes de derechos humanos no derogables a un caso similar, por un largo periodo de seis años con tres meses que se advierte *ad infinitum*, a alguna persona por considerar que se encuentra en desigualdad estructural o discriminación estructural, que el Presidente de los Estados Unidos así como decretó formalmente éste estado de excepción debe reconocer la vulneración que el Estado mexicano ha hecho del presente caso y retirar las reservas que acontecen a derechos humanos no derogables.

Teniendo en cuenta la situación la segregación en la que se enmarcan los hechos ocurridos por un periodo de seis años con tres meses: supresión y/o violaciones sistemáticas y flagrantes a derechos humanos no derogables, que conforma una historia de torturas, vejaciones humillaciones, fabricación de delitos y libre tipificación de delitos, erigiéndose en un Tribunal que ha impuesto penas inusitadas, castigos. Hechos perpetrados a un grupo determinado con la intención de someterlos a condiciones de existencia que forzosamente han de acarrear su destrucción, total. El Estado obligado a garantizar, las condiciones jurídicas para la no vulneración del Derecho imperativo, más lo permite y determina formalizar decreto de estado de excepción, destruyendo el Estado de Derecho, contraviniendo todo ordenamiento en materia de los Derechos Humanos, tratados, convenios, suspendiendo derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso... en el caso concreto. Es válido mencionar el principio de la carga de la prueba es dependiente del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales del país a que está sea impartida con perspectiva de género, a observar la desigualdad estructural del actor frente al Estado, que al destruir el derecho, ha impuesto segregación racial, pues no importa las pruebas aportadas, la invocación de Tratados Internacionales en materia de los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, es como si estos no existieran, pues la parte quejosa ha sido despojada de derechos fundamentales inderogables, sin garantías de debido proceso...

o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis."

Considerando que a la fecha la parte quejosa ha sido segregada de derechos y garantías que son inherentes al ser humano. El derecho al pleno y efectivo ejercicio a las garantías judiciales han sido suspendidas, acudiendo ante su Señoría para el reconocimiento y restablecimiento del derecho vulnerado. Solicitando la revisión oficiosa de decreto del Presidente de los Estados Unidos de éste estado de excepción.

Hechos notorios son los innumerables juicios de amparo que en el presente caso han resultado fallidos, más conforman las probanzas idóneas de la interrupción formal del proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos humanos no derogables. Resoluciones contrarias a la intención de proteger, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, derechos implícitos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los resolutivos que engrosan los juicios de amparo indirecto en materia penal, son contradictorias a un Estado de Derecho; mas nada se puede hacer, cuando se simula juicio de amparo en el caso concreto, con sendas violaciones procesales, dilación en el proceso, es el pan de cada día, actuaciones que conforman un “engaño”, es en sí mismo violencia en juicio constitucional, formalizando segregación de derechos fundamentales inderogables⁹³.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado en opinión consultiva OC-8/87, que las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Que “los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.”⁹⁴

La corte Interamericana de Derechos Humanos en ésta opinión consultiva, menciona que el artículo 25.1, es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, que debe ser un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene como objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, máxime, lo son los que estén señalados de manera expresa en el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión⁹⁵

Sigue diciendo que el recurso de amparo constituye el instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad, siendo un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios físicos y psicológicos. Es importante destacar que, en el presente caso, por un periodo de dos años, con cuatro meses, se han suspendido los medios y recursos legales efectivos para hacer valer sus derechos de la parte quejosa.⁹⁶

⁹³ Juicio de Amparo Indirecto 1118/2016, 288/2017, 349/2017, 545/2017 ,627/2017 ,651/2017 ,74/2018, 260/2018. Las disposiciones que se han adoptado en juicio de amparo son ilegales, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone límites al poder de los Estados Partes para suspender derechos y libertades, estableciendo que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia incluyendo en este grupo las “garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. La suspensión del Estado de Derecho a autorizado a las autoridades responsables a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, en el que se han investido de poderes absolutos, se han extralimitado *ad infinitum* de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada.

⁹⁴ Párrafo 25, página 9.

⁹⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 32, página 10.

⁹⁶ En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado la violación al artículo 8.1 de la CADH, en los casos en los que no se ha respetado el debido proceso.

Las medidas adoptadas por el Estado en el presente caso es una desviación a la legalidad en abuso de poder y de la Instituciones desmedido, luego, la figura procesal del amparo es una garantía judicial indispensable para la protección de los derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente caso se encuentra en la inefectiva igualdad ante la ley, el inaccess a la justicia carece de justificación objetiva y razonable de conformidad con el actual marco constitucional de protección, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene obligaciones *erga omnes* específicas en materia de derechos humanos; protección y garantía, noción de igualdad, principio de no discriminación que es inseparable de la dignidad de la persona, ello es así, el principio de no discriminación constituye un elemento fundamental inherente a los derechos humanos, por consiguiente, el acto formal de decreto de estado de excepción es contrario al principio de igualdad y no discriminación, respecto al ejercicio y reconocimiento de los derechos inderogables, acción que es incompatible con los derechos reconocidos en la Constitución, pues a la parte quejosa se nos considera inferiores, hecho, que ha afectado el reconocimiento y goce a los derechos inderogables de los quejosos, las cuales han sido definidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, de la manera siguiente:

IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS⁹⁷.

El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la **noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona;** sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables,

Los hechos notorios en el que no se ha respetado en debido proceso, lo conforman los innumerables juicios de amparo indirecto, 1118/2016, 288/2017, 545/2017, 651/2017, 627/2017⁹⁶, 74/2018, 260/2018⁹⁶, la Juez a quo y los recursos que han derivado de éstos, han sido substanciados en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se han negado a tener las pruebas por vertidas, de amenazas, hostigamientos, por solicitar acceso a la justicia, no obstante, las probanzas de las penas de castigos prohibidos, en connivencia con las autoridades responsables: defensor público y particular torturas⁹⁶, coacción, penas infamantes, falsas acusaciones, procedimientos ilegales del Ministerio Público, de la fuerza pública, del Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México humillaciones públicas, vejaciones, etcétera) que las autoridades responsables han ejecutado con un alto grado de planificación, es notorio que el proyecto de vida ha sido destruido, sin certeza y seguridad jurídica ("*habeas corpus*"), atenidos a la nada jurídica.

⁹⁷ Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.), Décima Época, Primera Sala del Alto Tribunal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2016, Tomo I, Página: 370, registro: 2012715

proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, **combatir las prácticas de este carácter** y establecer normas y otras medidas **que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas**. Nota. Lo resaltado es propio.

Por consiguiente, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, **por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos** que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el **trato hacia** una persona o **grupo de personas es discriminatoria**, la segregación tiene por objetivo el exterminio, lo constituye un acto **arbitrario que redunde en violación de los derechos humanos inderogables**:

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL⁹⁸.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunde en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.

Nota. Lo resaltado es propio.

En el presente caso, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de tener las atribuciones legales, derivadas de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar nuestros derechos fundamentales inderogables, se ha negado llanamente a ejercer actividades tendientes a lograr garantizar el ejercicio de tales derechos fundamentales. **Esto es, en lugar de retirar reservas a derechos fundamentales no derogables. Decreta formalmente estado de excepción.**

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH⁹⁹) con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos

⁹⁸ Tesis: P./J. 9/2016 (10a.), Décima Época, El Tribunal Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2016, libro 34, Tomo I, Página: 112, registro: 2012594

⁹⁹ Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la pena ver el criterio jurisprudencial



Humanos (en adelante CADH), establece que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad¹⁰⁰.

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la —adopción de medidas positivas—, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal, la segregación o por la situación específica en que se encuentre¹⁰¹.

Por tanto, ante una conducta o violación indirecta administrativa, la Justicia Federal puede tutelar a las personas gobernadas por la vía del juicio de amparo o bien aceptar a trámite la solicitud de revisión oficiosa de decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de supresión de derechos fundamentales no derogables, con fundamento en el artículo 29, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sirva de apoyo el criterio judicial siguiente:

siguiente: **JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.** Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

¹⁰⁰ Cfr. CoIDH. Caso *Tribunal Constitucional vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Caso *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso *de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37

¹⁰¹ Cfr. CoIDH. Caso *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205



OMISIÓN LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA. EL MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO, CONSISTENTE EN QUE NO PROCEDE EL JUICIO EN SU CONTRA, NO ES NOTORIO, MANIFIESTO NI INDUDABLE, PORQUE IMPLICA UN ESTUDIO EXHAUSTIVO SOBRE EL TEMA QUE NO ES PROPIO DE UN ACUERDO, SINO DE LA SENTENCIA¹⁰².

Tomando en consideración que para analizar si existe una inconstitucionalidad omisiva el operador jurídico debe revisar que: i) exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; ii) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, iii) **esa conducta vulnere un derecho o garantía**, lo que se sitúa en la tensión entre la máxima efectividad que debe atribuirse a un texto constitucional y la realidad, que pasa por el núcleo de los poderes del Estado, así como que para hacer efectivos los derechos fundamentales existen dos principios a colmar: el de legalidad y el jurisdiccional; en atención al nuevo bloque de constitucionalidad y a la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el motivo de desechamiento de una demanda de amparo, consistente en que no procede el juicio contra omisiones legislativas o administrativas, no es notorio, manifiesto ni indudable, porque implica un estudio exhaustivo sobre el tema que no es propio de un acuerdo, ya que no es posible hablar de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, al no derivar de los argumentos de la demanda o de las pruebas, sino del estudio e interpretación que lleve a cabo el Juez de Distrito en la sentencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

En el caso que nos ocupa, se configuran los tres elementos necesarios para actualizar la conducta administrativa:

- i) **exista un mandato normativo expreso (ya sea de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática" que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes;**

En este sentido, es pertinente revisar el contenido de los artículos 1º, y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte conducente y tocante a lo relacionado con las obligaciones en materia de derechos humanos fundamentales:

"ARTICULO 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

¹⁰² Tesis: XI.1o.A.T.33 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2014, Tomo III, Página: 1861, registro: 2007189

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ARTICULO 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, **solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, **podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.** Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, **no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la y niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

[...]

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez

Adicionalmente a la obligación general impuesta en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la obligación de todas las autoridades para promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecen atribuciones específicas al Presidente de la Republica, entre las que se encuentra las siguiente:

Artículo 6o.- Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República.

En este empalme, el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la República facultades y obligaciones, tales como, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

Pues el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen (artículo 87 Constitucional)

En efecto, la obligación principal que la autoridad responsable protestó guardar y hacer guardar el principio de Supremacía Constitucional, asimismo ha asumido como Estado Parte de los instrumentos convencionales mencionados en párrafos anteriores, la respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los mismos, entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4o.); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27), prevén la posibilidad que por circunstancias de hecho excepcionales, los estados partes pueden suspender las obligaciones contraídas, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional (normas imperativas del Derecho Internacional, *ius cogens*) **sin discriminación alguna**.

Circunstancias excepcionales que están muy lejos del presente caso: segregación manifiesta, pues la tortura, humillación, penas infamantes, incriminación, destrucción del proyecto de vida, violencia de género, violencia Institucional, amenaza de pérdida de la vida y de la libertad¹⁰³, pérdida al derecho humano a una vivienda, la negación de garantías para su protección y el reconocimiento del derecho vulnerado, negación de la existencia de obligaciones *erga omnes* en relación al principio de no discriminación en vulneración a Derechos Humanos, hacen del presente caso la destrucción del Derecho, la nada jurídica, en violación a los artículos 1.1.2, 2.1.a).b).d)., 3, 5, párrafo primero, inciso a), b), e): iii), 6) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en consecuencia lógica en violación al artículo primero, 2 y 6 de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales¹⁰⁴, hacen del presente caso actos ilegales que están en oposición a normas imperativas de Derecho Internacional.

¹⁰³ "*habeas corpus*"

¹⁰⁴ **Artículo primero**

1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del racismo.

Artículo 2

1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 6

1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

La persistente denegación del derecho a no ser objeto de tortura¹⁰⁵, de vejámenes, castigos prohibidos, penas infamantes, fabricación de delitos y libre tipificación de delitos, discriminación, amenazas de pérdida de la libertad, entre otros, hacen del caso una radical negación a normas del *ius cogens*.

En este orden, se explicar dentro de una lógica formal y jurídica: el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos determina y formaliza, el decreto, radical de negación a normas imperativas de Derecho Internacional e interrumpe formalmente el proceso constitucional democrático en supresión/violación de derechos fundamentales no derogables. En clara práctica de apartheid, resuelve que el Gobierno de la Ciudad de México, sea el encargado de consumar el crimen de genocidio, total, hechos que ni siquiera en conflictos armados ésta permitido.

Contrario al acto Ejecutivo de autoridad, existen derechos fundamentales inderogables cuya suspensión está prohibida en toda circunstancia, regulados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad, y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos); y 15.2 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los cuales son normas de *ius cogens*, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo, que tienen su origen en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Derechos reconocidos en Convenciones Internacionales que no admiten ninguna posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales que protegen, Instrumentos que la autoridad responsable ha firmado y ratificado, que le exigen obligaciones *erga omnes*: Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para"; el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ...

Que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que la violación al principio de no discriminación hace que cualquier acto que sea contrario al mismo ilegal.

La destrucción física, mental y moral, parcial o total, son actos contrarios a los derechos humanos inderogables, implícitos en la naturaleza humana de las personas, derechos que son externos al Estado; y, por tanto, éste no lo puede crear u otorgar, derechos que están reconocidos en el artículo 1, 29, 89, fracción X, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁰⁵ En este orden, no puede admitirse dentro de una lógica formal y jurídica el por qué la juez a quo en juicio 627/2017, legaliza¹⁰⁵ la tortura, castigos, fabricación de delitos, libre tipificación de delitos en una investigación penal, instaurada *ad infinitum*. Métodos que ni siquiera en conflictos armados están permitidos.

A la luz de estas consideraciones, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, pág. 1533, ha manifestado que la autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garantías individuales; por tanto, se necesita que pruebe que existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga no sea considerada como violatoria de garantías, por consiguiente, la carga de la prueba, incuestionablemente, le corresponde a la autoridad, porque el que destruye un estado jurídico, es el que debe probar los hechos, ya que, si la autoridad no rinde esa prueba, como en el caso acontece, “no puede fallarse en su favor”:

GARANTIAS INDIVIDUALES.

La persona jurídica no tiene que probar que se encuentra en el goce de las garantías individuales, porque éste es el estado natural y general de toda persona en la República Mexicana y el acto que restringe o afecta esas garantías, sí debe ser objeto de prueba, porque hay que hacer patente si la restricción se realizó en las condiciones que la Constitución ha previsto. La autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garantías individuales; por tanto, se necesita que pruebe que existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga no sea considerada como violatoria de garantías. La carga de la prueba, incuestionablemente, toca la autoridad; porque el que destruye un estado jurídico o el que alega una excepción, es el que debe probar los hechos; si la autoridad no rinde esa prueba y se limita a afirmar que obró con justificación, no puede fallarse en su favor, ni negarse el amparo, sino que, por el contrario, debe concederse.

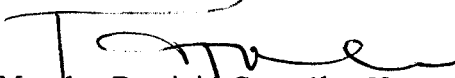
Amparo penal en revisión 459/34. Rosado García Carlos. 25 de julio de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Con fundamento con lo descrito en el cuerpo del presente ocurso, si bien es cierto que la quejosa suscrita carece de legitimación para formular la solicitud de la facultad de atracción ante el Máximo Tribunal Constitucional del país, es más cierto que los juicios de amparo citados a lo largo del éste escrito son hechos notorios que el caso concreto es un estado de restricción de derechos decretado formalmente por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado a su Señoría **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**; actualmente Ocurro y pido:

ÚNICO. – Tomar en cuenta, encarecidamente, el principio pro persona, ya que, si bien es cierto, procede recurso de reclamación, contra las providencias o acuerdos del Presidente del Alto Tribunal del país, la quejosa se permite respetuosamente ante su Señoría, solicitar: **revisión oficiosa de decreto de restricción o suspensión de derechos, con fundamento en el artículo 29, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

Protesto lo necesario


Martha Patricia González Nava

Ciudad de México a 15 de marzo de 2019.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURRENTE: MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ NAVA
RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚMERO: 573/2019 DERIVADO DEL VARIOS 1240/2018-VRNR
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo siguiente:

Contenido	Presentado en:
Escrito original de expresión de agravios con firma autógrafa de Martha Patricia González Nava, registrado con el número de folio 011760 , recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.	Original y copia simple en 81 fojas.

Las constancias referidas en la cuenta se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día quince de marzo de dos mil diecinueve. Conste.

Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil diecinueve.

Visto lo señalado en la certificación de esta fecha, dictada en el **expediente varios número 1240/2018-VRNR** y en términos de la normativa aplicable, con el original del escrito de la parte recurrente señalado en la cuenta, copia simple del acuerdo impugnado y de su constancia de notificación, **fórmense y registrense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al recurso de reclamación 573/2019**. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar al que deberán agregarse los documentos que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes atendiendo a la normativa aplicable. **Ahora bien** del análisis de las constancias de mérito se advierte que **Martha Patricia González Nava**, hace valer un

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR**

recurso de reclamación en contra del proveído dictado por esta Presidencia el **veintinueve de enero de dos mil diecinueve**, en el expediente varios número **1240/2019-VRNR**, a través de la cual determinó se desechar, por notoriamente improcedente su petición de solicitud de ejercicio de facultad de atracción y, además, se le comunicó que en relación con sus diversas peticiones debía estarse a lo determinado en los expedientes de solicitud de ejercicio de facultad de atracción 479/2018 y 7/2019, así como en el expediente de solicitud de reasunción de competencia 10/2019; y como el presente asunto se encuentra debidamente integrado tórnese a la **Primera Sala de este Alto Tribunal**, atendiendo a la materia en que incide el acto reclamado, el cual consiste en los actos del **Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, tomando en cuenta la distribución de materias que para efecto del turno entre las Salas de este Alto Tribunal deriva de lo previsto en el Punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, así como en el artículo 37 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, instrumentos normativos modificados por última vez mediante los diversos de nueve de septiembre y diez de junio, ambos de dos mil trece, respectivamente. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 80 y 104 de la Ley de Amparo vigente, así como 10, fracción V y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **se acuerda:**

I. Con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie puedan existir, se tiene por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer la parte recurrente citada al rubro.

II. Con fundamento en el artículo 81, párrafo primero del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,



RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

túrnese el expediente para su estudio, al **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Presidente de la Primera Sala, de este Alto Tribunal**, por ser a quien corresponde el turno por **estricto decanato**, conforme al registro que al efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, y radíquese en aquélla, en virtud de que el presente expediente incide en la materia de su especialidad, y envíense los autos a dicha Sala, a fin de que como Presidente dicte el acuerdo de radicación respectivo. **En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador de la penencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.**

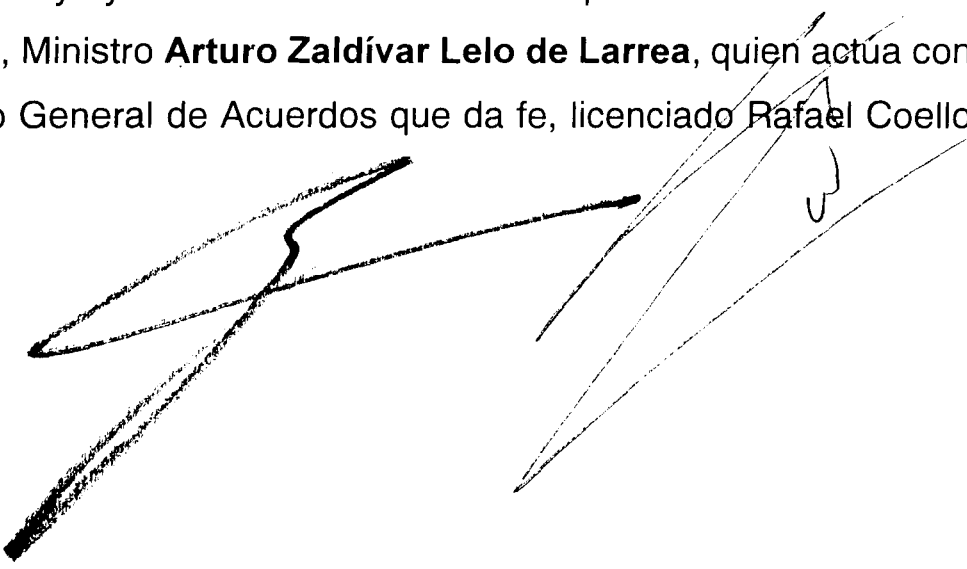
III. La parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

IV. Únicamente la parte —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para ello, podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 573/2019
DERIVADO DEL VARIOS NÚMERO 1240/2018-VRNR**

V. Notifíquese; y, por medio del MINTERSCJN, al **Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito**, en la inteligencia de que en los términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo general Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro **Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.



RCC/EMA/aysh

En 10 ABR 2019 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al interesado de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe

